**ACTA SESIÓN VIRTUAL N° 04-2020**

**SUBCOMISIÓN ACCESO A LA JUSTICIA DE PUEBLOS INDÍGENAS**

**03 ABRIL 2020**

|  |
| --- |
| *Participantes:* |
| *Sr. Jorge Olaso Álvarez, Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia* |
| *Sra. Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas* |
| *Sra. Melissa Benavides Víquez, Coordinadora Unidad de Acceso a la Justicia* |
| *Sra. Sandra Pizarro, representante Consejo Superior* |
| *Sr. Jorge David Morales Ramírez, Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia* |
| *Sr. Wilbert Kidd, Subdirector Ejecutivo del PJ* |
| *Sr. Dixon Li, Subdirector de Planificación* |
| *Sr. Marcos Guevara Berger, representante Escuela de Antropología de la UCR (Se reintegrará hasta el segundo semestre)* |
| *Sra. Flor Arroyo Morera, Escuela Judicial* |
| *Sr. Jean Carlo Monge, Judicatura Penal* |
| *Sr. Geyner Blanco, Asesor de Casa Presidencial* |
| *Sra. Valeria Varas, Asesora INAMU* |
| *Sr. Alí García, Profesor UCR* |
| *Sra. Vanessa Villalobos Montero, Departamento de Trabajo Social y Psicología* |
| *Sra. Carmen María Escoto Fernández, Sociedad Civil* |
| *Sra. Ariana Céspedes, Fiscala Indígena*  *Suplente: Sra. Tattiana García Chaves* |
| *Sra. Ligia Jeannette Jiménez, Defensora Indígena* |
| *Sr. Erick Alfaro, Contralor de Servicios Poder Judicial*  *Suplente Sr. Carlos Romero, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur* |
| *Sra. Vivian Rímola Soto, Tecnología de la Información* |
| *Sra. Marjorie Herrera, Defensoría de los Habitantes de la República* |
| *Sra. Yorleny Ferreto, Organismo de Investigación Judicial* |
| *Sr. Hugo Hernández, Oficina de Control Interno*  *Suplente: Señora Indira Alfaro* |
| *Sra. Cheryl Bolaños Madrigal, Gestión Humana* |
| *Sr. Robert García González, Auditoría Judicial*  *Suplente: Sr. Jeremy Eduarte Alemán* |
| *Sr. William Vega, ONU* |
| *Sr. Cristian Alberto Martínez Hernández: Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional* |
| *Sra. Rocío Rivera Cascante, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional* |
| *Sra. Patricia Bonilla Rodríguez, Centro de Información Jurisprudencial* |
| *Sra. Roxana Arrieta Meléndez, Directora de Gestión Humana*  *Suplente: Sr. Alex Guevara, jefe de UISA* |
| *Sra. Jovanna Calderón Altamirano, Dirección Nacional de Justicia Restaurativa* |
| *Sr. Franklin Paniagua, Ministerio de Justicia, DINARAC*  *Suplente: Sra. Kathy Piedra Corella* |

**ARTÍCULO I**

La Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en Acta 01-2020, Artículo II, tomó el acuerdo comunicado por la Unidad de Acceso a la Justicia en Oficio CACC-37-2020 al Centro de Conciliación, que literalmente indica:

*“… 4°. Solicitar colaboración a la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial a efecto de poder realizar un abordaje idóneo de la solicitud formulada por el señor Emigdio Cruz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu) referida a “Reconocimiento de formas de resolución de conflicto dentro del territorio (autonomía)”, considerando la colaboración que está dando la citada Dirección en los procesos vinculados con población indígena beneficiaria de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado en Buenos Aires de Puntarenas en los territorios de Salitre y Térraba…”*

El Centro de Conciliación comunicó mediante **el Oficio 012-CCPJ-2020** remitido el 24 de febrero, lo siguiente:

San José, 24 de febrero de 2020

*Oficio 012- CCPJ-2020*

*Referencia oficio CACC-37-2020*

*Máster Melissa Benavides Víquez*

*Coordinadora*

*Unidad de Acceso a la Justicia*

*Poder Judicial*

*S.D.*

***Estimada señora Benavides Víquez:***

*En atención al seguimiento a gestión formulada por Pueblo Indígena Malecu a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y específicamente a la solicitud de la Comisión que usted coordina respecto del punto 4°. Solicitar colaboración a la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial a efecto de poder realizar un abordaje idóneo de la solicitud formulada por el señor Emigdio Cruz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu) referida a “Reconocimiento de formas de resolución de conflicto dentro del territorio (autonomía)”, considerando la colaboración que está dando la citada Dirección en los procesos vinculados con población indígena beneficiaria de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado en Buenos Aires de Puntarenas en los territorios de Salitre y Térraba, informo que he conversado al respecto con la licenciada Jovanna Calderón Altamirano, de la Dirección de Justicia Restaurativa y entendiendo que lo que solicita es colaboración en capacitación respecto de mecanismos RAC, el Centro de Conciliación está absoluta disposición de prestar el apoyo que esté a nuestro alcance, previa coordinación de agendas. Por lo que quedo atenta al avance que se haga en este aspecto.*

*Suscribe cordialmente,*

***Carmen V. Cerdas Cisneros***

***Coordinadora General***

***Centro de Conciliación***

***Poder Judicial***

La señora Jovanna Calderón Altamirano, representante ante la Subcomisión por la DNJR señala que ha conversado con doña Carmen Cerdas Cisneros y que ambas se encuentran con la mayor anuencia de realizar en conjunto e incluso con ayuda de la Escuela Judicial, una capacitación sobre el tema de resolución alternativa y restaurativa de conflictos.

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio 012-CCPJ-2020 de 24 de febrero de 2020 emitido por el Centro de Conciliación del Poder Judicial, con ocasión del acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en Acta 01-2020, Artículo II, comunicado por la Unidad de Acceso a la Justicia en Oficio CACC-37-2020, en el que se solicitó colaboración a la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial, a efecto de poder realizar un abordaje idóneo de la solicitud formulada por el señor Emigdio Cruz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu) referida a *“Reconocimiento de formas de resolución de conflicto dentro del territorio (autonomía)”,* considerando la colaboración que está dando la citada Dirección en los procesos vinculados con población indígena beneficiaria de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado en Buenos Aires de Puntarenas en los territorios de Salitre y Térraba. Así mismo, se toma nota de la manifestación realizada por la representante de la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa, acerca de que, en conjunto con el Centro de Conciliaciones e incluso la Escuela Judicial, se encuentran en la mayor anuencia de brindar la capacitación, por lo que se dispone a integrarles a los procesos de diseño de capacitaciones en el tema de resolución alterna y restaurativa de conflictos. Se declara firme este acuerdo por unanimidad y se dispone a comunicarlo al Centro de Conciliación del Poder Judicial y al señor Emigdio Cruz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu), por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia. -

**ARTÍCULO II**

El señor Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, comunico mediante el Oficio CPZ-3-2020, lo siguiente:

*San Isidro Pérez Zeledón, 27 de febrero del 2020*

*Oficio CPZ-3-2020*

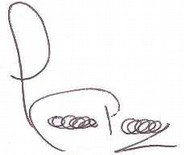
*Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial*

*Estimados señores y señoras:*

*En la pasada sesión del 07 de enero del 2020, mediante acta N.º 01-2020, se acordó, lo que se indica textualmente:*

***“Integrar un Comité de Capacitación dentro de la Subcomisión que se ocupe de coordinar con la Unidad de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana actividades de capacitación vinculadas con la temática indígena. El Comité estará integrado por las siguientes personas: Magistrado Jorge Olaso Álvarez, Melissa Benavides Víquez, Jean Carlos Monge, Ariana Céspedes, Ligia Jiménez, Marcos Guevara, Alí García, Valeria Varas, Carlos Romero, Geyner Blanco y Damaris Vargas, sin perjuicio de que se integren otras personas. Se coordinará una sesión extraordinaria para que este equipo presente una propuesta de capacitación que cumpla con los lineamientos dispuestos en la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica y la Circular 188-2019 de Corte Plena, incluyendo los requerimientos formulados por señor Emigdio Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu”.***

*En virtud de lo anterior, considera el suscrito, que es de suma importancia conocer de forma directa por parte del personal judicial, cuáles son las necesidades reales de capacitación que tienen, con el fin de brindar una calidad en el servicio que se presta a las personas usuarias indígenas. Para lo cual, se realizó una visita a los despachos que se ubican en el cantón de Buenos Aires y se conversó con los diferentes funcionarios y funcionarias judiciales, consultando sobre las necesidades de capacitación en materia indígena, obteniendo la información que se adjunta.*

*Espero que la información sirva de insumo, para la organización de las capacitaciones.*

*Atentamente,*

*Lic. Carlos Romero Rivera Contralor Regional de Servicios*

*Propuesta de capacitación en materia Indígena Despachos Judiciales de Buenos Aires*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Despacho*** | ***Temas propuestos*** | ***Especialista recomendado*** | ***Observaciones*** |
| *Juzgado Penal Jueces* | *1. Peritajes Culturales.* | *1. Marcos Guevara.* |  |
|  | *2. Capacitación sobre usos y costumbres de los territorios indígenas.* | *2. Personas Indígenas.* |
|  | *3. Concientización y sensibilización de la importancia de atención a las personas indígenas, en las áreas de atención.* | *3. Personas con experiencia en la atención a este tipo de población.* |
| *Fiscalía Fiscales* | *1. Capacitación sobre los diferentes idiomas indígenas que predominan, principalmente los Bruncas. Culturización actual de los Teribe.* | *1. Personas especialistas, con el conocimiento suficiente para capacitar.* |  |
|  | *2. Capacitación de cómo se siente la persona indígena, cuando recibe el servicio de forma directa en los territorios.* | *2. Personas de los territorios, que han tenido la experiencia de haber recibido el servicio por parte del Poder Judicial en la zona.* |
|  | *3. Capacitación a la parte técnica, donde se tiene el primer contacto con la persona indígena, para concientizar sobre la importancia de la buena atención a la persona indígena y la forma de abordaje en la atención.* | *3. Personal Judicial o externo, que haya tenido la experiencia de dar atención a este tipo de población.* |  |
| *4. Capacitación sobre la situación actual que tiene el personal judicial, de ingresar a los territorios indígenas donde existen conflictos.* | *4. Jefatura de la oficina de Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales UPRO.* |
| *5. Capacitación y actualización sobre las Medidas Cautelares MC-321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado de Costa Rica, aclarando los aspectos de cumplimiento correspondientes al Poder Judicial.* | *5. Especialista en la materia.* |
| *Juzgado Contravencional*  *Juez* | *1. Capacitación sobre el tema socio económico de las personas indígenas, y el impacto en el tema de las Pensiones Alimentarias.* | *1. Personas con conocimiento en la situación económica de las personas indígenas.* |  |
| *Defensa Pública Defensores Públicos* | *1. Peritajes Culturales* | *1. Especialistas en la materia, con conocimiento teórico y práctico sobre el tema.* |  |
|  | 1. *Perspectiva de la persona indígena desde su cosmovisión.* 2. *Actualización de como el Estado trabaja para resolver los conflictos indígenas. Y como los indígenas resuelven sus propios conflictos.* | *2. Personas Indígenas.*  *3.*   1. *Especialistas del Gobierno, que expliquen los avances, en lo que se trabaja, para la solución de los conflictos.* 2. *Líderes indígenas que expliquen cual es la forma que buscan resolver sus propios conflictos.* |  |
| *Unidad Regional del OIJ Jefatura a.i.* | *1. Técnicas para la atención a las personas usuarias indígenas.* | *1. Personas con experiencias en la atención a este tipo de población.* | *Es importante buscar formas de atención, donde al abordar a este tipo de población, no se sientan intimidados o discriminados. Ya que en diferentes delitos como los sexuales, se mejoraría los resultados en la investigación.*  *Se debe tomar en cuenta la diversidad de reservas que cuenta Buenos Aires.* |

**La señora Jovanna Calderón, representante de la DNJR, s**omete a valoración la posibilidad de poder incluir al equipo de Justicia Penal Restaurativa (6 personas) y Justicia Juvenil Restaurativa (3 personas), ambos de Pérez Zeledón, que atienden la zona de Buenos Aires, en la capacitación denominada *"Actualización de cómo el Estado trabaja para resolver los conflictos indígenas. Cómo las personas indígenas resuelven sus propios conflictos."* Ello en razón de la atención de personas usuarias indígenas que ellos realizan y la necesidad de su sensibilización, conocimiento y manejo del tema para aumentar la calidad de servicio público que se brinda.

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio CPZ-03-2020 de *27 de febrero del 2020 remitido por e*l señor Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en relación con el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en Acta 01-2020, en el que se dispuso la integración de un Comité de Capacitación dentro de la Subcomisión que se ocupe de coordinar con la Unidad de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana actividades de capacitación vinculadas con la temática indígena, por las siguientes personas: Jorge Olaso Álvarez, Melissa Benavides Víquez, Jean Carlos Monge, Ariana Céspedes, Ligia Jiménez, Marcos Guevara, Alí García, Valeria Varas, Carlos Romero, Geyner Blanco y Damaris Vargas. Trasladar la propuesta de temas de capacitación propuestos por las personas servidoras judiciales de Buenos Aires a la Escuela Judicial y a la Dirección de Gestión Humana para su conocimiento con expresa solicitud de que valoren su inclusión en el Plan de Capacitación 2020 establecido por la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica, conforme a los lineamientos de la Circular 188-2019 de Corte Plena. Así mismo, se traslada a la Contraloría de Servicios la solicitud planteada por la **señora Jovanna Calderón, representante de la DNJR, para que se i**ncluya al equipo de Justicia Penal Restaurativa (6 personas) y Justicia Juvenil Restaurativa (3 personas), ambos de Pérez Zeledón, que atienden la zona de Buenos Aires, en la capacitación denominada *"Actualización de cómo el Estado trabaja para resolver los conflictos indígenas. Cómo las personas indígenas resuelven sus propios conflictos.",* en razón de la atención de personas usuarias indígenas que realizan y la necesidad de su sensibilización, conocimiento y manejo del tema para aumentar la calidad de servicio público que se brinda. Se declara firme este acuerdo y se dispone a comunicarlo al señor Carlos Romero Rivera en su condición de Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur; las demás personas integrantes del Comité de Capacitación de la Subcomisión incluyendo a la señora Jovanna Calderón por la DNJR; la Escuela Judicial y Unidad de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, para lo de su cargo, por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia. -

**ARTÍCULO III**

La Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas tomó el acuerdo que consta en Acta 01-2020, Artículo II, comunicado por la Unidad de Acceso a la Justicia mediante Oficio CACC-36-2020, el cual se transcribe literalmente:

*“…5°. Trasladar a la Escuela Judicial, Dirección de Gestión Humana y demás Unidades de Capacitación de la Defensa Pública, Ministerio Público y OIJ, la solicitud de “capacitación y asesoramiento” planteada por el señor Emigdio Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu), para su atención. En lo referente a la solicitud de asesoramiento que plantea el Pueblo Malecu, trasladar la petición a la Dirección de la Defensa Pública.”*

La Unidad de Capacitación del Ministerio Público comunicó mediante el Oficio **UCS-MP- 104-2020** remitido el jueves 19 de marzo, lo siguiente:

***San José, 19 de marzo de 2020***

***UCS-MP-104-2020***

***M.Sc. Melissa Benavides Víquez***

***Coordinadora***

***Unidad de Acceso a la Justicia***

***Poder Judicial***

*Ref:// Oficio N°CACC-36-2020*

*M.Sc. Benavides Víquez:*

*Reciba un cordial saludo. El Ministerio Público por medio la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) y la Unidad de Capacitación y Supervisión, desde el 2009 ha venido trabajando el abordaje especializado de los casos penales en los cuales existe intervinientes indígenas, para ello la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la OAPVD desde el 2010, en coordinación con organizaciones comunales de los distintos territorios indígenas ha realizado visitas a estos lugares con la finalidad de brindar los servicios en el lugar.*

*Aunado a lo anterior, también hemos brindado charlas informativas que permiten a las personas indígenas identificar la labor que desempeña el Ministerio Público y los casos, así como mecanismos con los cuales cuentan en caso de requerir interponer una denuncia.*

*Producto de la labor desarrollada con las comunidades indígenas, en el 2011 se emitió la circular 13-ADM-2011 en la cual se aborda lo referente a la pesca tradicional Malecu.*

*Desde el Ministerio Público el esfuerzo se encuentra orientado a fortalecer el servicio que se brinda a las personas usuarias indígenas de cada uno de los 24 territorios indígenas, por ello desde el 2018 se brinda el curso de especialización en el abordaje de asuntos indígenas, el cual tiene una duración de 112 horas, dirigido a personal fiscal y técnico de cada una de las 15 fiscalías que tienen a su cargo la atención de algún territorio indígena.*

*En el 2020 se realizará el curso en el cuarto trimestre y se ampliará la promoción a efecto de que participe personal investigador del Organismo de Investigación Judicial.*

*Desde el área de capacitación las actividades académicas han sido constantes con el objetivo de informar y sensibilizar respecto a la necesidad de identificar y aplicar los derechos especiales que le asiste a los pueblos indígenas de acuerdo al marco normativo nacional e internacional, en razón de ello se han realizado capacitaciones dirigidas a personal de apoyo, oficinas del Ministerio Público, actividades regionales para personal de distintos despachos judiciales, otras dirigidas de manera específica para secciones del Organismo de Investigación Judicial.*

*Ahora bien, una vez que se tuvo en conocimiento el oficio N°CACC-36-2020 por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas se coordinó con el señor Emigdio Cruz presidente de la ADI Malecu, quien manifestó que en relación al Ministerio Público su preocupación es referente al abordaje de la pesca tradicional, en razón de ello de manera inmediata se coordinó con el señor Alejandro Araya, fiscal adjunto de San Carlos, con la finalidad de mapear:*

1. *Los casos presentados ante la fiscalía los cuales mantienen relación directa con el acceso a la pesca tradicional del pueblo Malecu.*
2. *En coordinación con la comunidad indígena individualizar los incidentes presentados.*

*Lo anterior con la finalidad de contar con un mapeo real, de los puntos que deberán fortalecerse mediante la capacitación.*

*Cabe señalar que de acuerdo al cronograma de visita a territorios indígenas por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas se estará efectuando reunión con el pueblo Malecu durante el tercer trimestre del año, en este mismo periodo se llevaría a cabo la capacitación dirigida a personal del Ministerio Público destacados en las fiscalías de Guatuso, Upala, Los Chiles y San Carlos con la finalidad de abordar lo pertinente a la pesca tradicional y las directrices de institución para el abordaje de causas con pertinencia cultural.*

*De manera tal que ya nos encontramos atendiendo los requerimientos del señor Cruz y se reitera que para el tercer trimestre del año se estarán llevando a cabo las respectivas actividades de capacitación tanto a lo interno del territorio como a nivel del personal judicial; siempre y cuando el estado nacional vuelva a la normalidad, debido a lo que estamos atravesando con el COVID-19.*

*Atentamente,*

***Dixiela Madrigal Mora***

***Fiscala Adjunta***

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio UCS-MP- 104-2020 remitido el jueves 19 de marzo de 2020 por la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, en relación con el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, según consta en el Acta 01-2020, Artículo II, comunicado por la Unidad de Acceso a la Justicia mediante Oficio CACC-36-2020, en el que se dispuso trasladar a la Escuela Judicial, Dirección de Gestión Humana y demás Unidades de Capacitación de la Defensa Pública, Ministerio Público y OIJ, la solicitud de *“capacitación y asesoramiento”* planteada por el señor Emigdio Cruz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guatuso (Territorio Malecu), el cual se hace de conocimiento de la Dirección de la Fiscalía General y del señor Cruz en la condición dicha. Se declara este acuerdo firme y se dispone a comunicarlo por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO IV**

La Licenciada Vanessa Jiménez, Abogada de Forest People remitió a la Presidencia de la República comunicado electrónico del 3 de marzo de 2020, 10:20 a.m., con copia al Viceministro Randall Otarola Madrigal; el Magistrado Presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia Jorge Olaso Alvarez; el Exviceministro Juan Alfaro López; el asesor indígena de Casa Presidencial Geyner Blanco Acosta; el señor Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; el Viceministro de Seguridad Eduardo Solano Solano; el señor Franklin Paniagua Alfaro de DINARAC del Ministerio de Justicia; el Concejo CODIAW; el Concejo Mayores Broran; el señor Roger Mata Brenes jefe del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; la señora Alice H Shackelford de Naciones Unidas; la Defensoría de los Habitantes de la República; y Vleugels Birgit (EEAS-SAN JOSE), el comunicado electrónico denominado “Carta de ONG sobre violencia contra Bribri y Broran”, en la que se informa:

*Señor presidente  
  
Le transmito a su Excelencia una carta de varios ONG reuniendo en Ginebra para discutir el tema de los defensores de derechos y ambiente.  La carta se refiere a la violencia reciente en territorios indígenas en Buenos Aires.  
  
Respetuosamente,  
  
Vanessa Jiménez  
Abogada Principal  
Forest Peoples Programme*

***CARTA DE ONG SOBRE VIOLENCIA CONTRA BRIBRI Y BRORAN***

*6 de febrero de 2020*

*Carlos Alvarado Quesada Presidente de Costa Rica Vía:* [*despachopresidente@presidencia.go.cr*](mailto:despachopresidente@presidencia.go.cr)

*RE: Violencia contra los derechos humanos y defensores del medio ambiente en Costa Rica*

*Estimado presidente Alvarado Quesada*

*Las organizaciones abajo firmantes, que viajan y se reúnen en Ginebra para discutir la crisis urgente y las necesidades de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, hemos recibido con gran preocupación los informes del reciente tiroteo de un defensor indígena Bribri, Mainor Ortíz Delgado, y ahora el asesinato de Defensor indígena Brörán, Yehry Rivera Rivera. Entendemos que esto sucedió casi un año después del aniversario del brutal asesinato del defensor indígena Bribri, Sergio Rojas, un asesinato que sigue sin resolverse. Entendemos que se suponía que estos tres defensores debían estar bajo la protección de su gobierno como peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como beneficiarios de las medidas cautelares emitidas en 2015 por la Comisión. Se nos ha informado que, hasta la fecha, ningún perpetrador de violencia contra estos dos pueblos ha sido encarcelado. Somos más conscientes de que tanto los pueblos Bribri como Brörán encuentran sus territorios ocupados masivamente por intrusos ilegales hostiles, muchos de los cuales deforestan las tierras para la cría de ganado y otros esfuerzos agrícolas. Se nos ha señalado que, durante décadas, la ley de Costa Rica ha obligado expresamente a su Gobierno y a los anteriores a eliminar a estos ocupantes ilegales. Esto no se ha hecho y ahora prevalece la inseguridad. Nos preocupa profundamente que Costa Rica, a menudo considerada líder en derechos humanos y medio ambiente, no proteja a sus pueblos indígenas y su deseo de recuperar su medio ambiente y vivir en paz. Ayer dedicamos un evento para honrar a los defensores en Costa Rica que recientemente perdieron la vida. Le pedimos que ahora los honre eliminando de inmediato a los ocupantes ilegales desde sus tierras, procesando fielmente a los perpetradores de violencia e intimidación contra estos defensores y tomando medidas más efectivas para proporcionar una protección que disuada y prevenga futuras agresiones. Saludos,*

*Dr. Peter Larsen, Universidad de Ginebra - Suiza Clemente Bautista Jr, Red Popular de Kalikasan para el Medio Ambiente - Filipinas Prof. Philippe Le Billon, Universidad de British Columbia - Canadá Not1Más - Reino Unido Dra. Mary Menton, Universidad de Sussex - Reino Unido Dr. Jörg Balsiger, Universidad de Ginebra - Suiza José Aylwin, Observatorio Ciudadano - Programa de Pueblos de los Bosques de Chile - Reino Unido*

**SE ACUERDA:** Se toma nota del comunicado electrónico enviado por la licenciada Vanessa Jiménez, Abogada de Forest People a la Presidencia de la República el 3 de marzo de 2020, 10:20 a.m., con copia al Viceministro Randall Otarola Madrigal; el Magistrado Presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia Jorge Olaso Alvarez; el Exviceministro Juan Alfaro López; el asesor indígena de Casa Presidencial Geyner Blanco Acosta; el señor Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; el Viceministro de Seguridad Eduardo Solano Solano; el señor Franklin Paniagua Alfaro de DINARAC del Ministerio de Justicia; el Concejo CODIAW; el Concejo Mayores Broran; el señor Roger Mata Brenes jefe del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; la señora Alice H Shackelford de Naciones Unidas; la Defensoría de los Habitantes de la República; y Vleugels Birgit (EEAS-SAN JOSE), denominado “Carta de ONG sobre violencia contra Bribri y Broran”, en la que se informa sobre la carta de varias organizaciones no gubernamentales, reunidas en Ginebra, para discutir el tema de los defensores de derechos y ambiente.  La carta se refiere a la violencia reciente en territorios indígenas en Buenos Aires. Se dispone a comunicar el contenido del comunicado a las principales jefaturas administrativas institucionales y las jurisdiccionales, representadas ante esta Subcomisión por las y los integrantes, para lo de su cargo según sus competencias legales, por medio de dichos representantes. Se declara este acuerdo firme por unanimidad para su ejecución inmediata y se dispone a comunicarlo a la licenciada Vanessa Jiménez, Abogada de Forest People; las personas integrantes de la Subcomisión; Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y; Comisión de Acceso a la Justicia; por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia, para lo de su cargo.

**ARTÍCULO V**

Con el objetivo de dar seguimiento a la Circular 188-19 de Corte Plena y las acciones ejecutadas por el Poder Judicial en relación con las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, la Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas Vásquez, solicitó a las principales jefaturas institucionales la emisión de un informe donde se refieran a los avances realizados, conforme a la matriz construida en coordinación con el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aprobada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

Las respuestas recibidas fueron integradas en un solo documento con la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia por medio de la señora Angie Calderón Chaves, vía Google Drive por la extensión de la información recopilada, quien remitió comunicado electrónico el 31 de marzo de 2020, 2:39 p. m., a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en el que señaló:

[angiecalderon1158@gmail.com](mailto:angiecalderon1158@gmail.com) has shared a link to the following folder:



[Matriz Seguimiento Circular 188-2019](https://drive.google.com/drive/folders/1oxOi8teU8gFQfq8fnYNaGHSVWJKsuATX?usp=sharing_eil&ts=5e83aa60)

MATRIZ CIRCULAR 188-2019. Carpeta con informes remitidos por oficina. Los que me ha remitido a mí. Va la matriz de Excel en la que intenté consolidar la información, sin embargo, no cumplió expectativas, porque la información que mandan no es uniforme, No utilizaron la Matriz que se les facilitó. Va otro documento de Word con una tabla en la cual se insertan todos los informes por oficina.

[**Open**](https://drive.google.com/drive/folders/1oxOi8teU8gFQfq8fnYNaGHSVWJKsuATX?usp=sharing_eip&ts=5e83aa60)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Google Drive: Have all your files within reach from any device.  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA | [Logo for Google Drive](https://drive.google.com/) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

En el informe incorporan las respuestas remitidas por las siguientes jefaturas administrativas institucionales:

1. Fiscalía General
2. Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito en Oficio 506-OAPVD
3. Organismo de Investigación Judicial
4. Defensa Pública
5. Dirección de Planificación en Oficio 412-PLA-2020
6. Dirección Ejecutiva en Oficio 1019-DE-2020
7. Dirección de la Escuela Judicial
8. Dirección de Gestión Humana Oficio PJ-DGH-CAP-61-2020
9. CONAMAJ
10. Contraloría de Servicios
11. Dirección de la Escuela Judicial

**SE ACUERDA:** Se toma nota de los informes remitidos por la Fiscalía General, Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito en Oficio 506-OAPVD, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Dirección de Planificación en Oficio 412-PLA-2020, Dirección Ejecutiva en Oficio 1019-DE-2020, CONAMAJ, Contraloría de Servicios y Escuela Judicial, acerca de las acciones ejecutadas en relación con el seguimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena y las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, solicitados por la Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas Vásquez, a las principales jefaturas institucionales, conforme a la matriz construida en coordinación con el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aprobada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Se dispone a comunicar este acuerdo a las citadas oficinas, a la Presidencia y al Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento. Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución. Comuníquese por medio de la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTÍCULO VI**

El señor William Cerdas Zuñiga, Administrador Regional de Turrialba, en comunicado electrónico remitido el 5 de febrero de 2020, 10:32:23, a todos los empleados de Turrialba, indicó:

*“… les informo que ya se tiene nombrada a Yulissa Ortiz, que va a sumir las traducciones en lengua cabécar que requieran los despachos como también cuando requieran realizar giras, la temática de solicitudes va a ser de la siguiente manera:*

* *Por parte de la Administración se va a tener una agenda destinada para las solicitudes de traducción.*
* *Previo a realizar la solicitud se recomienda que consulten vía teléfono a la Administración la disponibilidad de la interprete, si es factible para el día y la hora que la requieren confeccionan un correo dirigido a la cuenta de la Administración, con copia a Doña Ivannia Moya León, William Cerdas Zúñiga para tener un respaldo de las gestiones realizadas.*
* *Es importante que en la solicitud indiquen el rango de horas que se requiere el servicio, esto con la finalidad de que si otro de despacho requiere el apoyo sea factible de agendarlo.*
* *Las solicitudes se agendan en un orden primero ingresar primeras en atender.*
* *Si algún despacho requiere el apoyo de la traductora y se encuentra asignada a otro despacho, se puede recurrir al apoyo de los y las traductoras externos, esto con la finalidad de no afectar el servicio al usuario externo e interno.  De igual forma cuando la compañera traductora se encuentre de gira y requieran del servicio de traductora pueden recurrir a los intérpretes externos.*
* *El recurso se encuentra a disposición de todos los despachos.*

*Cualquier duda con gusto.”*

**SE ACUERDA:** Se toma nota del comunicado remitido por el señor William Cerdas Zuñiga, Administrador Regional de Turrialba, el 5 de febrero de 2020, 10:32:23, a todos los empleados de Turrialba, en el que informa el nombramiento de la señora Yulissa Ortiz, para que asuma las traducciones en idioma cabécar y su disponibilidad para colaborar con los despachos que lo requieran. Solicitar a la Dirección Ejecutiva valorar la posibilidad de designar personas traductoras e intérpretes en los diferentes idiomas indígenas, como personal de planta del Poder Judicial, para atender los requerimientos de las oficinas y despachos judiciales, iniciando con un plan piloto en los Circuitos Judiciales donde estadísticamente se reporten mayor demanda; lo anterior, aprovechando plazas vacantes institucionales que podrían destinarse a ese fin de interés, previa coordinación con la Dirección de Gestión Humana. Se declara este acuerdo firme por unanimidad para su ejecución y se dispone su comunicación a las Direcciones Ejecutiva y de Gestión Humana por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia. -

**ARTÍCULO VI**

La señora Damaris Vargas Vázquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, remitió Oficio DVV-SI-005-2020, de 4 de febrero de 2020 al Dr. Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el que señaló:

*“… Como es de su conocimiento, en mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, participo en las sesiones de trabajo periódicas que se realizan en Buenos Aires de Puntarenas con ocasión del seguimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, cuyos beneficiarios son las personas indígenas de los Pueblos de Salitre y de Térraba. Mi participación se viene realizando desde 2019 con la autorización del Consejo Superior en sesión N° 43-19 celebrada el 14 de mayo de 2019, Artículo XXXIII. El traslado se ha venido realizando con la colaboración de vehículos del Organismo de Investigación Judicial con la venia del señor Walter Espinoza, Director General por seguridad.*

*Ante mi designación por parte de la Asamblea Legislativa como Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a partir del 16 de enero pasado, solicité a Corte Plena en sesión del lunes 20 de enero autorización para seguir asistiendo a esas sesiones en la condición dicha.*

*Con ocasión de lo anterior, remito consulta acerca de si mis traslados se pueden seguir realizando en la forma dicha, o bien, debo hacerlo con el vehículo discrecional asignado. Respetuosamente sugiero se valore la primera opción considerando existe un protocolo del OIJ para el acceso a los territorios indígenas de Salitre y de Térraba; aunado al hecho de que estarse trasladando, además, el vehículo discrecional asignado a la suscrita podría implicar una duplicidad de recursos y gastos institucionales innecesarios contrarios a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo anterior, siempre que tal petición se enmarque dentro de los lineamientos institucionales de seguridad y la normativa que regula lo solicitado.*

*La siguiente visita está programada para el viernes 28 de febrero al territorio indígena Térraba en Buenos Aires de Puntarenas, así que agradecería si se puede obtener una respuesta sobre mi gestión con anticipación para poder realizar a tiempo las coordinaciones respectivas…”*

Se informa que la Dirección del Organismo de Investigación Judicial mostró su anuencia a continuar colaborando con el acompañamiento y la seguridad con ocasión de los traslados a los territorios indígenas de Salitre y Térraba; de la misma forma que el Despacho de la Presidencia.

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio DVV-SI-005-2020, de 4 de febrero de 2020.-

**ARTÍCULO VII**

La señora Damaris Vargas Vázquez, comunico mediante el Oficio N° DVV-S1-017-2020, comunicó al licenciado *Randall Otárola Madrigal, Viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia de la República, lo siguiente:*

***“****Reciba un cordial saludo. Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarles que Corte Plena, jerarquía máxima del Poder Judicial- en forma conteste con el compromiso y responsabilidad con el que ha asumido el cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, me autorizó que continúe participando en el seguimiento a tan importante labor desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Lo anterior, en sesión N° 04-2020 celebrada el 27 de enero del 2020, Artículo XI, en la que se permitió seguir brindando el apoyo necesario y participar en las reuniones y actividades referentes a la atención de las Medidas Cautelares en las zonas de Térraba y Salitre, en representación del Poder Judicial.*

*Ante la naturaleza del Poder Judicial de Costa Rica que integra la Judicatura, el Ministerio Público o Fiscalía General, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el sector Administrativo, mi actuación ha sido activa y mediática, trasladando a las oficinas respectivas los requerimientos de las personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares, de acuerdo a la distribución de competencias institucionales, ya sean éstas planteadas en las sesiones o por medio de comunicados electrónicos. De igual forma, he asistido y lo seguiré haciendo, a las sesiones de trabajo generadas con ocasión del seguimiento de los Protocolos de Seguridad y Saneamiento que en su oportunidad fueron negociados y firmados entre el Ministerio de Justicia y Paz y las personas representantes de los pueblos indígenas de Salitre y de Térraba.*

*La participación de la suscrita en representación del Poder Judicial, seguirá siendo acorde con los principios de independencia judicial y las garantías de imparcialidad, transparencia y objetividad que caracterizan la gestión de la Institución, lo cual se evidencia entre otras acciones, en la emisión de la Circular 188-19 de Corte Plena, la cual es producto de los acuerdos de dicha Corte en sesiones 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX, y 42-19 de 7 de octubre de ese mismo año, Artículo VII.*

*Se está en la mayor disposición de seguir apoyando el proceso de implementación de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH mediante acciones coordinadas con las diferentes autoridades judiciales, y con las personas representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo…”*

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio N° DVV-S1-017-2020.-

**ARTÍCULO VIII**

La señora Vanessa Jiménez, Abogada de Forest Peoples Programme, comunico vía correo electrónico del 19 de febrero de 2020, 2:47 p. m., a la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, con copia al entonces Viceministro de la Presidencia de la República, señor Juan Alfaro López; Geyner Blanco Acosta, asesor indígena de Casa Presidencial; Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Eduardo Solano Solano Viceministro de Seguridad; Franklin Paniagua Alfaro de DINARAC del Ministerio de Justicia; Concejo CODIAW; y Concejo Mayores Broran, denominado “Mainor Ortiz/Comunicado de la Presidencia”, en el que señaló:

*“Primero, nos gustaría darle las gracias por enviar los enlaces mediáticos a sus colegas del Poder Judicial sobre la tentativa de homicidio de Mainor Ortiz Delgado.  Para los beneficiarios, el aumento de la educación y la mejora del tratamiento por parte del Poder Judicial de su situación es indispensable a la protección de la vida e integridad física de los Beneficiarios de las Medidas Cautelares.  De hecho, sería interesante discutir si hay una forma de sentarse con la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (quizás otros del Poder Judicial) para conversar sobre este tema con más profundidad.*

*Segundo, recientemente leímos el comunicado de la Presidencia de la República de 17 del febrero con respecto a la nueva violencia involucrando el Bribri, Mainor Ortíz Delgado.  Mientras que el comunicado contenía varias declaraciones engañosas, esperábamos que, a menos, Ud. pueda aclarar dos afirmaciones que tiene vinculación al Poder Judicial.*

*1. El comunicado dice que el Estado está ejecutando “las siguientes acciones inmediatas para la atención de la problemática de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires” e incluye en su lista la “[a]pertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas, en manos de las comunidades indígenas.” ¿Puede decirnos Ud. a qué se refiere? ¿Qué significa, en la práctica, “[a]pertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas, en manos de las comunidades indígenas”? ¿Se trata de una referencia oblicua a los 20 ejes adoptados por la Corte Plena o algo nuevo?*

*Si es una referencia a los 20 ejes, respetuosamente renovamos nuestra solicitud que hay explicación sobre el estado de la implementación de los ejes y como han tenido un impacto positivo para proteger la vida e integridad física de los Bribri y Brörán (es decir, los resultados concretos que Uds. se han medido como derivados de la implementación de los ejes).*

*2. Además, el Comunicado dice “a través de la Comisión Interinstitucional que atiende el tema, insistirá en la necesidad de no llevar a cabo procesos de recuperación en los que se podría estar exponiendo la integridad tanto de personas indígenas como no indígenas.”  ¿A qué se refiere? Sin discutir la idoneidad de tal solicitud, ¿quién es esta Comisión Interinstitucional?”  De nuevo, porque tiene alguna vinculación al Poder Judicial, es una referencia a la sección IV del Protocolo para Implementar las Medidas Cautelares que requiere el establecimiento de la Comisión de Coordinación (con membresía interinstitucional) y con el mandato, entre otros, de “conocer los procedimientos legales y administrativos y comunicarlos al pueblo indígena Bribri de Salitre de manera simplificada” y “[d]ar seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia que se produzcan o hayan producido en el territorio indígena de Salitre.”  Como sabe, esta Comisión de Coordinación interinstitucional nunca ha sido implementado por el Gobierno y nadie, de nuestro conocimiento, está llevando a cabo su mandato en una forma sistemática (incluso con la coordinación de la Subcomisión de Coordinación (tampoco establecida como requerida por el Protocolo)).*

*La “Comisión Interinstitucional” no puede ser una referencia a la CAID, porque CAID no tiene el mandato para insistir en la necesidad de no llevar a cabo las recuperaciones pacíficas de tierras que pertenecen a los Bribri.  Entonces, ¿quién es esta Comisión Interinstitucional y esta “comisión” enviará una comunicación a los Beneficiarios de las Medidas Cautelares en el futuro cercano?  Fue desalentador escuchar sobre esto en un comunicado de prensa cuando presumiblemente estamos de buena fe en “espacios de dialogo” (como explicado en el Comunicado).*

*Como miembro de la delegación del Gobierno encargada de implementar las Medidas Cautelares, y debido a su conexión con los procedimientos legales y casos judiciales ante el Poder Judicial, sus aclaraciones sobres estos dos puntos nos ayudarían mucho para entender la base de nuestras conversaciones con el Estado en el futuro.*

*Finalmente, para su información, aquí hay un enlace a varios “tweets” /hilos de tuitas recientemente publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la nueva violencia en el territorio de Salitre. <<*[*https://twitter.com/CIDH/status/1229934629660119040*](https://twitter.com/CIDH/status/1229934629660119040)*>>”*

En respuesta a la gestión anterior, la señora Damaris Vargas Vásquez, en la condición dicha, comunico a la señora Vanessa Jiménez, mediante el Oficio N° DVV-S1-018-2020 de 25 de febrero de 2020, lo siguiente:

*“Reciba un atento saludo. A la vez, en relación con el agradecimiento que externa por* *socializar con las y los representantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, la información que usted nos suministró, le informo que el reconocimiento es nuestro por suministrar datos de interés y facilitar procesos de concertación con la población indígena. La Subcomisión está integrada por representantes de la Fiscalía, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Judicatura y sector Administrativo, quienes trasladan esa información a los equipos de trabajo de los cuales son parte, de manera tal que desde ese espacio se integra el accionar de las personas servidoras judiciales conforme a sus competencias, en procura de que el abordaje integral.*

*De seguido doy respuesta a sus consultas:*

***Primero:*** *“Para los beneficiarios, el aumento de la educación y la mejora del tratamiento por parte del Poder Judicial de su situación es indispensable a la protección de la vida e integridad física de los Beneficiarios de las Medidas Cautelares.  De hecho, sería interesante discutir si hay una forma de sentarse con la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (quizás otros del Poder Judicial) para conversar sobre este tema con más profundidad.”*

*En relación con su preocupación vinculada con la importancia del aumento de la educación y mejoras del tratamiento por parte del Poder Judicial para la protección de la vida e integridad física de las personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, hago de su conocimiento que el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales para el tratamiento idóneo de los procesos vinculados con la población indígena es un tema estratégico institucional asociado al Acceso a la Justicia, según se desprende del Plan Estratégico Institucional 2019/2024.*

*Corte Plena, jerarquía máxima institucional, aprobó a solicitud de la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, la Circular 188-19, denominada “20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”. En esa Circular, se señala literalmente:*

***“CIRCULAR No. 188-2019***

***Asunto****: Modificación a la Circular N° 123-2019 Sobre los 20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica.*

***AL MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSA PÚBLICA, DIRECCIONES GENERAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, GESTIÓN HUMANA, PLANIFICACIÓN, DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA, ESCUELA JUDICIAL Y DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS***

***SE LES HACE SABER QUE:***

*La Corte Plena, en sesión Nº 20-19 celebrada el 27 de mayo de 2019, artículo XIX, dispuso aprobar los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, que deberán ser desarrollados por las Direcciones del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Gestión Humana, Planificación, Dirección Ejecutiva, Tecnología de la Información, Escuela Judicial y el Sector Jurisdiccional, con ocasión del encuentro realizado entre representantes del Estado y Personas Indígenas Bribri de Salitre y Térraba, en cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica.*

*En sesión N° 42-19 celebrada el 7 de octubre en curso, artículo VII, se dispuso a realizar la publicación nuevamente de la Circular 123-2019 correspondiente a los ejes de acción recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, eliminando el eje número 20 por encontrarse repetido.*

*Los citados ejes son los siguientes:*

***1.*** *Concertar con las personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares N° 321-12 emitidas por la CIDH contra Costa Rica, las acciones a seguir para garantizar la vida y seguridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre; e informarles las que ya se han adoptado para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a tales medidas para evitar su repetición. Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos de la CIDH y construir confianza y diálogo intercultural. En la medida de lo posible, realizar las sesiones de trabajo en los territorios indígenas involucrados, con la colaboración de personas traductoras que faciliten la comunicación efectiva y transparente. Se sugiere valorar sean las principales jefaturas institucionales quienes ejecuten esta labor.*

***2.*** *Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales vinculadas con la población indígena, establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019/2024 (ejes transversales acceso a la justicia y justicia abierta, entre otros); el efecto posible de tales riesgos, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos a fin de continuar con la adopción de las medidas necesarias para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. Además, establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar en relación con la tramitación y resolución de los procesos judiciales en los que sean parte pueblos indígenas, priorizando aquellos en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.*

***3.*** *Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, normas y procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones vinculadas con los procesos judiciales en los que intervengan personas indígenas, priorizando aquellos en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.*

***4.*** *Establecer un sistema de información que permita tener una gestión documental institucional en el desarrollo de las actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados en relación con la tramitación y resolución de los procesos judiciales vinculados en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.*

***5.*** *Incluir en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales que estén vinculados con personas indígenas, incorporando además información relativa a los pueblos relacionados, los territorios, entre otros datos de interés para la toma de decisiones.*

***6.*** *Con absoluto respeto al principio de independencia judicial, emitir circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales en las que se les reitere su deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras, a saber:* ***i)*** *asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin;* ***ii)*** *proporcionar el acceso a los pueblos indígenas y tribales a asistencia técnica y legal en relación con su derecho a la propiedad colectiva, en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla, y* ***iii)*** *facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, así como facilitar la participación de los pueblos en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, sin que ello les implique hacer esfuerzos desmedidos o exagerados, ya sea debido a las distancias o a las vías de acceso a dichas instituciones, o a los altos costos en virtud de los procedimientos. Además, el otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, así como su especial relación con la tierra, y respeto de los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena, los cuales se encuentren en armonía con los derechos humanos, según los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Kaliña y Lokono versus Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 y las disposiciones de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.*

***7.*** *Con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros, establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, en lo relacionado con la aplicación del Derecho Indígena, con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias indígenas una justicia pronta, cumplida, sin denegación y accesible; priorizando lo vinculado con los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.*

***8.*** *Realizar encuentros entre el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre con personas funcionarias judiciales de la Contraloría de Servicios, Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, a efecto de que estas últimas les expongan el funcionamiento del Poder Judicial en sus diferentes ámbitos. En forma previa a su ejecución se concertará con las personas indígenas la identificación de los contenidos mínimos de los aspectos sobre los cuales desean ser informados y los mecanismos que ofrece el Poder Judicial para el acceso a la justicia.*

***9.*** *Realizar encuentros entre representantes del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y personas funcionarias judiciales con competencia para conocer procesos judiciales vinculados con esa población, a efecto de que las personas indígenas capaciten a las y los servidores judiciales sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas; priorizándose a quienes laboren en las oficinas judiciales con competencia material y territorial para conocer de procesos vinculados con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Iniciar el proceso de capacitación con personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias; y luego se continuará con las demás.*

***10.*** *Verificar que, en los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos:*

1. *Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016;*
2. *Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017,*
3. *Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras*
4. *Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.*
5. *Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas; además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico.*

***11.*** *Establecer un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros. Al respecto, la Institución tiene experiencia pues para tal seguimiento del impacto de la capacitación se diseñó el Manual para realizar las evaluaciones de resultados de la capacitación judicial en el desempeño laboral por parte de la Escuela Judicial.*

***12.*** *Gestionar ante el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y el Consejo Superior para declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.*

***13.*** *Llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, y valorar su inclusión en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.*

***14.*** *Valorar la posibilidad de establecer acuerdos interinstitucionales entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo (y sus instituciones) y el Poder Legislativo, así como las Universidades estatales, a fin de que las acciones que se ejecuten vinculadas con personas indígenas, especialmente las relacionadas con las medidas cautelares de la CIDH, estén previamente coordinadas y sean consultadas a las personas indígenas.*

***15.*** *Instar al Instituto de Desarrollo Rural y al Ministerio de Justicia y Paz para que valoren la posibilidad de capacitar a las personas juzgadoras, defensoras públicas y fiscalas con competencia para conocer procesos en los que intervengan personas indígenas del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, sobre las acciones emprendidas en el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas y sistemas catastrales y registrales vinculados.*

***16.*** *Analizar opciones para brindar protección y seguridad a las personas indígenas beneficiarias de las medidas cautelares, dentro de sus territorios y acordes a sus costumbres.*

***17.*** *Realizar sesiones periódicas en las que se informe a miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre beneficiarias de las medidas cautelares de la CIDH sobre los avances alcanzados.*

***18.*** *Actualizar el convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica con el objetivo de que incluya la Facultad de Derecho y la Escuela de Antropología para fortalecer el programa de peritajes culturales y de capacitaciones a las personas servidoras judiciales, con posibilidades de establecer acciones conjuntas con otras Escuelas de la UCR que podrían ofrecer insumos importantes en los peritajes culturales.*

***19.*** *Diseñar una Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial conforme a los lineamientos de MIDEPLAN que sea construida y consultada con las personas indígenas, así como un Plan de Acción de acuerdo a la metodología de la Dirección de Planificación, que contribuya con su ejecución, en seguimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.*

***20.*** *Participar como parte del Estado en los encuentros que se realicen entre las personas indígenas beneficiarias de las medidas y otras instituciones del Estado.”*

***San José, 17 de octubre de 2019***

***Licda. Silvia Navarro Romanini***

***Secretaria General***

***Corte Suprema de Justicia”***

*De los acuerdos de Corte Plena que dieron origen a la Circular se desprende que la mayoría de los ejes de acción están vinculados con la necesidad de fortalecer las actividades de capacitación en forma concertada con la población indígena. Desde su emisión y aún antes de ésta, estamos trabajando en esa línea de acción, por lo que cualquier sugerencia que genere un impacto positivo en la atención de los procesos vinculados con las personas indígenas y su cosmovisión, especialmente tratándose de las beneficiarias de las Medidas Cautelares, siempre serán bienvenidos.*

*Con ocasión de lo anterior, esta cordialmente invitada a la siguiente sesión de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas programada para el 6 de marzo de 2020 a las 9:30 horas; o a cualquiera de las restantes sesiones programadas en forma mensual el resto del año (primeros viernes de cada mes). Lo anterior, a fin de conocer sus iniciativas y exponerle los avances realizados en la Institución sobre el tema vinculado con la educación y mejoras en el tratamiento por parte del Poder Judicial. Si es más cómodo para usted conectarse por videoconferencia u otro medio electrónico, nos informa para la coordinación respectiva.*

***Segundo:*** *“… recientemente leímos el comunicado de la Presidencia de la República de 17 del febrero con respecto a la nueva violencia involucrando el Bribri, Mainor Ortíz Delgado. Mientras que el comunicado contenía varias declaraciones engañosas, esperábamos que, a menos, Ud. pueda aclarar dos afirmaciones que tiene vinculación al Poder Judicial. 1. El comunicado dice que el Estado está ejecutando “las siguientes acciones inmediatas para la atención de la problemática de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires” e incluye en su lista la “[a]pertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas, en manos de las comunidades indígenas.” ¿Puede decirnos Ud. a qué se refiere? ¿Qué significa, en la práctica, “[a]pertura de los procedimientos legales para la puesta en posesión de las fincas ocupadas por no indígenas, en manos de las comunidades indígenas”? ¿Se trata de una referencia oblicua a los 20 ejes adoptados por la Corte Plena o algo nuevo?  Si es una referencia a los 20 ejes, respetuosamente renovamos nuestra solicitud que hay explicación sobre el estado de la implementación de los ejes y como han tenido un impacto positivo para proteger la vida e integridad física de los Bribri y Brörán (es decir, los resultados concretos que Uds. se han medido como derivados de la implementación de los ejes). 2. Además, el Comunicado dice “a través de la Comisión Interinstitucional que atiende el tema, insistirá en la necesidad de no llevar a cabo procesos de recuperación en los que se podría estar exponiendo la integridad tanto de personas indígenas como no indígenas.”  ¿A qué se refiere? Sin discutir la idoneidad de tal solicitud, ¿quién es esta Comisión Interinstitucional?”  De nuevo, porque tiene alguna vinculación al Poder Judicial, es una referencia a la sección IV del Protocolo para Implementar las Medidas Cautelares que requiere el establecimiento de la Comisión de Coordinación (con membresía interinstitucional) y con el mandato, entre otros, de “conocer los procedimientos legales y administrativos y comunicarlos al pueblo indígena Bribri de Salitre de manera simplificada” y “[d]ar seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia que se produzcan o hayan producido en el territorio indígena de Salitre.”  Como sabe, esta Comisión de Coordinación interinstitucional nunca ha sido implementado por el Gobierno y nadie, de nuestro conocimiento, está llevando a cabo su mandato en una forma sistemática (incluso con la coordinación de la Subcomisión de Coordinación (tampoco establecida como requerida por el Protocolo)). La “Comisión Interinstitucional” no puede ser una referencia a la CAID, porque CAID no tiene el mandato para insistir en la necesidad de no llevar a cabo las recuperaciones pacíficas de tierras que pertenecen a los Bribri.  Entonces, ¿quién es esta Comisión Interinstitucional y esta “comisión” enviará una comunicación a los Beneficiarios de las Medidas Cautelares en el futuro cercano?  Fue desalentador escuchar sobre esto en un comunicado de prensa cuando presumiblemente estamos de buena fe en “espacios de dialogo” (como explicado en el Comunicado). Como miembro de la delegación del Gobierno encargada de implementar las Medidas Cautelares, y debido a su conexión con los procedimientos legales y casos judiciales ante el Poder Judicial, sus aclaraciones sobres estos dos puntos nos ayudarían mucho para entender la base de nuestras conversaciones con el Estado en el futuro.”*

*Al respecto, debo informarle que el Poder Judicial no participó en la redacción y publicación del comunicado de prensa realizado por la Presidencia de la República de 17 del febrero. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo que cualquier consulta sobre su alcance estimo debe direccionarse a éste. No obstante, le informo que de acuerdo al artículo 153 de la Constitución Política, corresponde al Poder Judicial administrar justicia en las diferentes causas que se sometan a su conocimiento; de ahí, si el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones, o cualquier persona física o jurídica, indígena o no, disponga el planteamiento de procesos judiciales vinculados con la población indígena, será función del Poder Judicial su tramitación y resolución en forma pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico.*

*En relación con lo anterior, como es de su conocimiento, con ocasión de la audiencia celebrada en Salitre en abril de 2019, convocada por la Defensoría de los Habitantes de la República, tuvimos la oportunidad de asistir representantes de diferentes instituciones del Gobierno provenientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El informe que presenté a Corte Plena sobre los resultados de esa visita y las recomendaciones incluidas, generaron precisamente la emisión de la Circular 188-19 anteriormente transcrita. A partir de ese momento, hemos tenido varias sesiones de trabajo en los territorios indígenas de Salitre y Térraba con representantes indígenas y de las Instituciones con el objetivo de concertar posiciones acerca del abordaje adecuado del seguimiento de las Medidas Cautelares. Con ocasión de esa acción conjunta, las acciones del Poder Judicial realizadas a través de los años han sido facilitados mediante informes a la Cancillería, gracias a la articulación de acciones que exige la CIDH y la normativa nacional e internacional que regula los derechos de la población indígena.*

*Finalmente, en lo atinente al Protocolo firmado oportunamente entre el Ministerio de Justicia y Paz y la población indígena que generó las Comisiones de Saneamiento y de Seguridad, debo indicarle que aunque el Poder Judicial no fue partícipe del mismo, al estimar que vincula a la Institución como parte del Estado ante su deber de dar seguimiento y cumplimiento de las Medidas Cautelares desde nuestras competencias, he estado participando como observadora activa, trasladando a las autoridades judiciales respectivas las gestiones de las personas indígenas para lo de su cargo. La participación como observadora en representación del Poder Judicial contó con la anuencia de las personas representantes de los pueblos indígenas de Salitre y de Térraba, según consta en las actas de las sesiones que muy gentilmente ha compartido el Ministerio de Justicia y Paz.*

*Finalmente, aprovecho para informarle que en el Poder Judicial estamos trabajando en la construcción de la Política Indígena conforme a la metodología del Ministerio de Planificación Nacional, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, aprobada a fines de 2018, y los lineamientos para la construcción de Políticas Públicas de Corte Plena. La metodología establece la participación activa de la población indígena y la articulación de acciones con las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo, el cual está en construcción de la Política Nacional Indígena con pertinencia cultural.*

*Sin más por el momento, me pongo a su disposición en lo que este a mi alcance para la articulación y coordinación de acciones, enmarcadas en las funciones asignadas al Poder Judicial.*

*Atentamente,*

***Damaris Vargas Vásquez***

***Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas***

***Magistrada Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia***

***Poder Judicial***

*Copias:*

*Presidencia Corte Suprema de Justicia*

*Despacho de la Presidencia*

*Comisión de Acceso a la Justicia*

**SE ACUERDA:** Se toma nota del comunicado electrónico remitido por la señora Vanessa Jiménez, Abogada de Forest Peoples Programme, del 19 de febrero de 2020, 2:47 p. m., a la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, con copia al entonces Viceministro de la Presidencia de la República, señor Juan Alfaro López; Geyner Blanco Acosta, asesor indígena de Casa Presidencial; Magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Eduardo Solano Solano Viceministro de Seguridad; Franklin Paniagua Alfaro de DINARAC del Ministerio de Justicia; Concejo CODIAW; y Concejo Mayores Broran, denominado “Mainor Ortiz/Comunicado de la Presidencia”; así como de la respuesta emitida por la señora Vargas Vásquez en el carácter dicho mediante Oficio N° DVV-S1-018-2020 de 25 de febrero de 2020. Comunicar este acuerdo a la Presidencia y al Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia, para su conocimiento. -

**ARTÍCULO IX**

La Unidad de Acceso a la Justicia comunicó mediante el Oficio CACC-11-2020 a las personas que integran la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, las sugerencias realizadas por la Licenciada Ligia Jiménez a la Circular No. 10-09, cuyo contenido es el siguiente:

***CIRCULAR No. 10-09***

***Asunto****: Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones*

*Indígenas.*

***A los despachos judiciales Se les hace saber que:***

*El Consejo Superior en sesión 77-08, celebrada el 14 de octubre de 2008, artículo XLI, a solicitud de la Comisión de Accesibilidad y de la Subcomisión vinculada con los Grupos Indígenas, acordó comunicarles las siguientes* ***Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las Poblaciones Indígenas:***

1. *Las* ***autoridades judiciales*** *promoverán la realización de diligencias* ***in situ****, en aquellos lugares donde existan territorios indígenas.*

1. *Dentro de cada presupuesto de los distintos programas se contemplará un rubro para brindar ayuda económica a las personas usuarias indígenas que la requieran, para cubrir algunos gastos que origine su traslado a los despachos judiciales, y otro de viáticos para las y los funcionarios que participen en las diligencias in situ Los y las jueces, así como cualquier autoridad judicial establecerán como práctica la atención de las y los usuarios indígenas.* ***(Modificado por el Consejo Superior en sesión Nº 104-09 del 17 de noviembre de 2009, artículo XLVII)***
2. *Las personas juzgadoras, así como los y las funcionarios (as) judiciales darán prioridad de trato a las personas indígenas que se apersonen a los despachos judiciales.*
3. ***Las personas juzgadoras deberán fijar los señalamientos de las audiencias y de los juicios dentro de un horario accesible, contemplando*** *las particularidades de cada zona.*
4. ***Las personas juzgadoras, así como las autoridades que requieran documentos de otras entidades en este tipo de asuntos, establecerán los canales de comunicación y coordinación necesarios para hacerlos llegar al caso concreto y a la brevedad posible;*** *y comunicarán a la Comisión de Acceso a la Justicia los obstáculos que se les presenten para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones.*
5. ***Se deberán aplicar las directrices de no revictimización, en aquellos casos donde una de las partes del proceso es una persona indígena, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.)***
6. *La Contraloría de Servicios será la encargada de* ***velar por el cumplimiento de las recomendaciones propuestas)***
7. *Colocar distintivos en los expedientes* ***en caso de que una de las partes del proceso sea una persona indígena, se deberá colocar el distintivo correspondiente en el expediente.)***
8. *Las personas servidoras judiciales propiciarán y colaborarán, junto con otras instituciones públicas, la incorporación de las personas indígenas a los procesos de enseñanza secundaria y universitaria, que faciliten su participación en la solución de sus asuntos a partir de su propia perspectiva****.***
9. ***Derecho a una persona intérprete o traductora****: La Administración de Justicia procederá a nombrar siempre a toda persona indígena intérprete y traductor en la lengua materna, con cargo al presupuesto del Poder Judicial,* ***salvo que hable y comprenda el idioma español.*** *El intérprete y o traductor será nombrado dentro de la lista oficial, sin embargo, de modo excepcional, podrá nombrarse por inopia. En tal supuesto, la autoridad respectiva verificará que sea una persona idónea, considerando las particularidades de la situación concreta. Lo anterior sin perjuicio de que dicha persona nombre uno de su confianza, conforme lo establece el artículo 14 del Código Procesal Penal.*
10. *Respeto a la diversidad cultural: obligación del peritaje antropológico/cultural: Cuando se juzgue a una persona indígena, la persona juzgadora que conoce del caso dispondrá, cuando ello sea necesario para resolverlo, de oficio o a petición de parte y costeado por el Estado, el peritaje antropológico y/o cultural, con el fin de conocer las normas culturales particulares, la personalidad, vida del imputado, entre otras, vinculadas con el hecho atribuido, lo anterior de conformidad con el artículo 339 del Código Procesal Penal.*

*La administración de justicia procederá a elaborar una lista de peritos conocedores de las diferentes culturas indígenas, quienes tendrán por función efectuar, individual o conjuntamente, el peritaje requerido.*

**SE ACUERDA:** Se reserva para conocerse en una sesión posterior. -

**ARTÍCULO X**

La Licenciada Ligia Jiménez Zamora, Defensora Pública Indígena, comunico vía correo electrónico el jueves 05 de marzo de 2020 a la Unidad de Acceso a la Justicia, *Subcomisión de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez y Melissa Benavides Víquez, con copia a Katherine Salazar Duarte, lo siguiente:*

*“… En virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Justicia para pueblos indígenas de Costa Rica, desde el 28 de setiembre de 2019, y considerando lo que se establece en el numeral 7 en el párrafo segundo: "El Poder Judicial deberá asumir el costo de las pruebas y las pericias requeridas en un proceso judicial, cuando la persona indígena no tenga medios para hacerlo por su cuenta. Para tal efecto, las universidades estatales deberán dar colaboración especializada y gratuita al Poder Judicial, a fin de tener un listado de personas idóneas que puedan elaborar esos peritajes culturales. El presupuesto que se apruebe a dichas instituciones deberá contener un rubro expreso para cubrir los costos de la citada colaboración. ARTÍCULO 8- Peritaje cultural. El juez deberá solicitar peritajes culturales en aquellos procesos judiciales que requieran un peritaje especial de las costumbres, las tradiciones y los conceptos normativos de los pueblos indígenas.”*

*Con el mayor de los respetos, sugiero que podamos valorar parámetros para elaborar una circular desde la Dirección Ejecutiva, o Consejo Superior, para todas las personas funcionarias públicas, en la que se establezcan los procedimientos para hacer efectivos estos peritajes en las cuatro Universidades Públicas.”*

**SE ACUERDA:** Se reserva para conocerse en una sesión posterior.

**ARTÍCULO XI**

La Comisión de la Jurisdicción Penal remitió por medio de correo electrónico el 1 de abril de 2020 el Oficio CJP-068-2020 de 30 de marzo de 2020, el cual fue puesto en conocimiento de las y los integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en el que informó:

San José, 30 de marzo de 2020

CJP068-2020

Magistrada

Damaris Vargas Vásquez

Coordinadora

Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

S. D.

Estimada señora Magistrada:

En relación con su oficio número DVV-S1-024-2020, mediante el cual nos trasladó la gestión interpuesta por la Licenciada Ariana Céspedes López, "Fiscal Adjunta Indígena", en la que se indica lo siguiente:

El viernes 21 de febrero del 2020 la Fiscalía de Buenos Aires informó que dio aviso a los encargados de la caja chica del Juzgado de Buenos Aires, sobre la presencia de usuarios indígenas y de la necesidad de que se les girará la ayuda económica que les correspondía, ya que esas personas se habían presentado a las oficinas judiciales sin contar con recursos económicos. No obstante, según se dice en el informe, al parecer se en el Juzgado se les denegó girarles la referida ayuda en razón de que se presentaron cerca de la hora de cierre de ese Despacho.

Se indica en el referido oficio que las y los funcionarios de la Fiscalía de Buenos Aires decidieron darles los viáticos a las personas indígenas de su propio dinero.

La Fiscalía de Buenos Aires solicita se toman las acciones pertinentes para que en el futuro se garantice el acceso a la justicia a esta población tanto en horario de oficina como fuera de él.

**Acuerdo de la Comisión de la Jurisdicción Penal**

1. La Comisión acordó solicitar a la Dirección Ejecutiva la presentación de un informe en el que se describa el procedimiento establecido para el giro de este tipo de ayudas a la población indígena que acude a las oficinas judiciales en Buenos Aires de Osa, tanto en horas de oficina como después de la jornada laboral.
2. Solicitar al juez o jueza que estuvo a cargo del Juzgado de Buenos Aires, en la fecha de los hechos referidos en el oficio DVV-S1-024-2020 de la Fiscalía Adjunta indígena, un informe sobre los hechos indicados en el referido oficio de la Fiscalía.
3. La información que se solicita tiene como objetivo el contar con los insumos necesarios para recomendar los correctivos que resulten pertinentes ante el Consejo Superior de Poder Judicial, sin perjuicio de remitir el asunto en su momento, si se estima necesario, a la Inspección Judicial para lo de su cargo

Atentamente,

**Patricia Solano Castro**

**Magistrada de la Sala de Casación Penal**

**Presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Penal**

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio CJP-068-2020 de 30 de marzo de 2020 remitido por la Comisión de la Jurisdicción Penal.

**ARTÍCULO XII**

La señora Cheryl Bolaños Madrigal, jefa de la Unidad de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, remitió comunicado electrónico del 6 de marzo de 2020, 3:12 p. m., en el que informó a la Unidad de Acceso a la Justicia y a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, que en cumplimiento del eje número 9 de las acciones aprobadas por la Corte Plena en sesión 20-19 del 27 de mayo de 2019 Artículo XIX para garantizar la implementación de las medidas cautelares 3321-12 de la CIDH, su interés para que se incluya al Subproceso Gestión de la Capacitación en las próximas visitas o capacitaciones que se organicen con las poblaciones indígenas de Térraba y Salitre y así participar de las capacitaciones  sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y transmisión de la tierra entre otros datos de interés.

El **Eje 9 señala:** “*9. Realizar encuentros entre representantes del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y personas funcionarias judiciales con competencia para conocer procesos judiciales vinculados con esa población, a efecto de que las personas indígenas capaciten a las y los servidores judiciales sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas; priorizándose a quienes laboren en las oficinas judiciales con competencia material y territorial para conocer de procesos vinculados con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Iniciar el proceso de capacitación con personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias; y luego se continuará con las demás.”*

**SE ACUERDA:** *Se toma nota del interés de la señora* Cheryl Bolaños Madrigal, jefa de la Unidad de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, en cumplimiento del eje número 9 de las acciones aprobadas por la Corte Plena en sesión 20-19 del 27 de mayo de 2019, Artículo XIX, para garantizar la implementación de las medidas cautelares 3321-12 de la CIDH, de que el Subproceso de Gestión de la Capacitación participe en las próximas visitas o capacitaciones que se organicen con las poblaciones indígenas de Térraba y Salitre y así participar de las capacitaciones  sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y transmisión de la tierra entre otros datos de interés. Se acuerda solicitar a las oficinas representadas por las y los integrantes de la Subcomisión, quienes organicen actividades de capacitación en territorios indígenas de Salitre y Térraba, informar a la señora Bolaños las fechas programadas durante 2020 y la posibilidad de que asista el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana. Comuníquese este acuerdo a la señora Cheryl Bolaños en el carácter dicho y a las y los integrantes de la Subcomisión por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia. -

**ARTICULO XIII**

A efecto de dar seguimiento a la construcción de la Política Indígena del Poder Judicial se pidió informe a la Unidad de Acceso a la Justicia sobre avances de coordinación con la Dirección de Planificación y MIDEPLAN y se solicitó valorar la inclusión de personas indígenas de Salitre y Térraba en esas capacitaciones con el objetivo de que, desde un inicio, se dé participación activa a esa población.

La Unidad de Acceso a la Justicia, rindió informe a la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en el que informó:

*“En atención su correo, procedemos a dar respuesta en nuestra condición de Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia y Encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia, sobre los avances para la coordinación de acciones con MIDEPLAN y otros asuntos:*

*1.- El día de hoy Melissa se comunicó telefónicamente con Carlos Von Marshall de MIDEPLAN para conversar de manera directa sobre las fechas para las capacitaciones. Ellos han propuesto 13, 14 y 15 de abril para la de Política Pública y el 27 y 28 de ese mismo mes para la de Análisis Prospectivo. Posteriormente se dirigió un correo para que se confirmen esas fechas, solicitándole además que se remita la información necesaria para socializarla entre las personas que han confirmado su asistencia. Usted ha sido copiada de estas comunicaciones.*

*2.- La convocatoria para participar en estas capacitaciones se envió por correo electrónico en fecha* ***21 de enero*** *a todas las personas integrantes de la Comisión de Acceso y las Subcomisiones. De esta convocatoria respondieron* ***16 personas****. Se adjunta la lista de quienes contestaron formalmente nuestro correo. Aún existen posibilidades para que se enlisten más participantes pues se tienen* ***25 cupos*** *por grupo. Con las fechas confirmadas por MIDEPLAN, se procederá con la solicitud ante Consejo Superior con los nombres de las personas que hayan confirmado a la fecha. Considero que este trámite debe hacerse desde la Unidad de Acceso a la Justicia pues la capacitación incluye a personas de todas las Subcomisiones, de la Comisión, de la Unidad y lo que se pretende es capacitar al Personal Judicial de distintas oficinas para que participen en el proceso de todas las Políticas Institucionales de Acceso a la Justicia.*

*Por otro lado, no le veríamos problema, sino más bien una ventaja, que participen dos personas indígenas de los territorios Térraba y Salitre, si usted tiene sugerencias de quienes puedan ser estas personas, si nos facilita los datos, desde la Unidad de Acceso con gusto les extenderemos la invitación.*

*3.- El cronograma de actividades lo enviará Don Carlos Von Marshall cuando nos confirme formalmente las fechas. Melissa le estará dando seguimiento el día de hoy y mañana. Le mantendremos informada sobre lo comunicado y se socializará inmediatamente la información que se nos remita.*

*4.- Respecto al reforzamiento para la Subcomisión de Indígenas que usted solicita, además de las acciones que se han realizado  sean estas las convocatorias para participar en la capacitación,  la socialización de la información que suministró MIDEPLAN, del seguimiento para confirmar posibles fechas con esa institución para llevar a cabo las capacitaciones, de la redacción de la plantilla y posterior solicitud ante OCRI para la búsqueda de cooperación no solo para la creación de la Política de Indígenas sino también la actualización de la Política de Discapacidad; de las coordinaciones que haremos ante el Consejo Superior para tramitar los permisos, del ofrecimiento para  contactar las personas indígenas, entre otras acciones que con gusto se han venido haciendo y se harán para colaborarle; le solicitamos nos informe específicamente cuáles acciones se requieren adicionales para dar a buen arribo los objetivos que usted busca.*

*La Unidad de Acceso a la Justicia se caracteriza por maximizar el acompañamiento a todas nuestras Subcomisiones y como usted, queremos el mejor interés para las poblaciones vulnerables.”*

La Unidad de Acceso a la Justicia remitió consulta a las personas integrantes de las diferentes Subcomisiones de Acceso a la Justicia el 21 de enero de 2020 acerca de quienes tienen interés en recibir la capacitación de MIDEPLAN. El listado de personas interesadas es el siguiente:

**Lista de Personas Participantes de la Confección de la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Correo** |
| 1. Laura Marcela Arias Guillen | lariasgu@poder-judicial.go.cr |
| 1. Francia León González | [fleong@poder-judicial.go.cr](mailto:fleong@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Cheryl Bolaños Madrigal | [cbolanosm@poder-judicial.go.cr](mailto:cbolanosm@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Jorge Olaso Alvarez | jolaso@poder-judicial.go.cr |
| 1. Maricel María Gomez Murillo | [mgomezmu@poder-judicial.go.cr](mailto:mgomezmu@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Yorleny Ferreto Solano | [yferreto@poder-judicial.go.cr](mailto:yferreto@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Angie Calderón Chaves | [acalderonc@poder-judicial.go.cr](mailto:acalderonc@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Jazmín Orozco Arias | jorozco@poder-judicial.go.cr |
| 1. Melissa Benavides Víquez | mbenavidesv@poder-judicial.go.cr |
| 1. Evelyn Quijano Eduarte | [equijanov@poder-judicial.go.cr](mailto:equijanov@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Xinia Fernández Vargas | [xfernandezv@poder-judicial.go.cr](mailto:xfernandezv@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Karla Calvo Jiménez | [kcalvoj@poder-judicial.go.cr](mailto:kcalvoj@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Ellen Villegas Hernández. | [evillegas@poder-judicial.go.cr](mailto:evillegas@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Miguel Mc Calla Vaz | [mmccalla@poder-judicial.go.cr](mailto:mmccalla@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Carlota Arauz Garcia | [carauz@poder-judicial.go.cr](mailto:carauz@poder-judicial.go.cr) |
| 1. Marisol Barboza Rodríguez | mbarbozar[@poder-judicial.go.cr](mailto:mmccalla@poder-judicial.go.cr) |

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, señora Damaris Vargas Vásquez, reitera su interés en ser parte de esa capacitación, por lo que solicita se le incluya en el listado anterior. De igual forma, la representante de la Defensa Pública, señora Ligia Jiménez también solicita su inclusión conforme indica había pedido oportunamente.

**SE ACUERDA:** Se toma nota del informe rendido por la Unidad de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas sobre los avances de la coordinación de capacitación con MIDEPLAN para la construcción de la Política Indígena del Poder Judicial, así como del listado de personas que mostraron interés. Solicitar la inclusión de la señora Ligia Jiménez, representante de la Defensa Pública ante la Subcomisión y la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, dentro del grupo de personas interesadas en recibir esa capacitación; y verificar el listado de personas de esta Subcomisión que oportunamente mostró interés. El comunicado al Consejo Superior solicitando los permisos para asistir a las actividades, lo ejecutará la Unidad de Acceso a la Justicia. Instar a la Unidad de Acceso a la Justicia para que se revise el listado de personas de esta Subcomisión que oportunamente mostraron interés en esa capacitación y se proceda con su inclusión; además, se incluya en la capacitación a personas indígenas de Salitre y Térraba, entre otros pueblos, con el objetivo de que se integren al, proceso de construcción de la Política Indígena del Poder Judicial desde un inicio. Se declara firme este acuerdo por unanimidad.

**ARTICULO XIV**

La Dirección Nacional de Justicia Restaurativa remitió el Oficio 048-DNJR-20/Mag. Gerardo Rubén Alfaro de 9 de marzo de 2020, el cual se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. A la vez, a efecto de dar una respuesta oportuna, se les solicitó informar en el plazo de 3 días:

1. Si alguna de las personas integrantes de la Subcomisión tiene disposición de apoyar a la DNJR en la construcción del diseño de capacitación de *Atención de población indígenas con enfoque restaurativo* para personal judicial y autoridades institucionales.

2.   Sugerencias de al menos una persona líder y una lideresa indígena por zona: Salitre, Cabagra y Térraba, para que se integren a la construcción del diseño de capacitación, mencionado en el punto número uno. En el caso de Térraba sugiero a don Pablo Sibar.

1. Sugerencias de al menos 2 líderes y 2 lideresas de cada uno de los pueblos: Salitre, Cabagra y Térraba, para invitarles a realizar, en forma conjunta, la construcción del “Protocolo de Justicia Penal Restaurativa para la atención de casos con intervinientes indígenas” y de igual forma, el nombre de alguna persona de la Subcomisión de Asuntos Indígenas, que colabore en esta elaboración. Por Térraba sugiero a don Pablo Sibar.

El señor Jean Carlo Monge, juez Penal, en comunicado electrónico del 24 de marzo pasado, señaló:

*“En cuanto al punto 1 y por supuesto en respeto de lo que indique la Subcomisión, mi persona estaría interesada en apoyar a la DNJR. Sin embargo, por la carga de trabajo que actualmente tengo y otras obligaciones que se derivan de mi cargo, me gustaría saber si existe un calendario de actividades de dicha Dirección, a efecto de programarme y conversarlo con la coordinación de mi oficina. En cuanto a los puntos 2 y 3, por Cabagra se podría pensar en el señor Rafael Delgado y don José Maximiliano Torres. El primero como integrante del Tribunal de Derecho Propio y el segundo como integrante del Consejo de Mayores. Ambos tienen posiciones disímiles en cuanto a varios aspectos de la temática indígena, por lo que resultaría importante contar con la visión de ambos.”*

La señora Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena, informó:

*“Buenas tardes estimadas señoras y señores. Reciban un cordial saludo. Reenvío el correo que remití en horas de la mañana, y lo amplío en el siguiente sentido: Después de conversar con la Coordinadora de la Unidad de Justicia Restaurativa de la Defensa Pública, y valorando la necesaria visión que desde nuestra Institución se debe tener en Justicia Restaurativa, también quisiéramos formar parte del diseño de la Capacitación, junto con el Lic. Monge Madrigal. Las personas interesadas seríamos la Licda. Adriana Gómez Calderón, y   mi persona. Buenos días, me parece muy bien que el compañero Monge Madrigal participe en esta construcción. Desde la Defensa Pública la Lic. Adriana Gómez como coordinadora de Justicia Restaurativa, y mi persona, participamos en la construcción del Protocolo. En cuanto al punto 2 es importante que en todos los casos haya mujeres lideresas, en este caso sugiero que Valeria Varas que trabaja con las mujeres indígenas nos pueda indicar varios nombres, según los grupos a los que ellas representan. En cuanto al punto 3, desde la Defensa Pública se ha indicado, que en Salitre hay por lo menos de 5 a 6 grupos con miradas diferentes, por lo que habría que reunirse con cada grupo por separado, de lo contrario se escucharían parcialmente a unas personas y otras no, y sesgaría la forma de resolución, además resulta necesario, como lo indicó doña Valeria Varas en la reunión de la Sub Comisión, que se integren mujeres en esta construcción. Me parece que quien maneja más adecuadamente los diferentes grupos es la Defensoría de los Habitantes, por lo que invito a Marjorie Herrera para nos pueda decir los posibles nombres de personas por grupo. En ese lugar como mínimo habría que hacer 5 reuniones. En el caso de Cabagra, me parece que hay tres grupos definidos, y en Térraba también, por lo que hablaríamos de seis reuniones más. Recordemos que la idea es construir un protocolo, no llevar un documento para que las personas indígenas lo validen.”*

Por su parte, el señor Carlos Romero, Contralor de servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, señaló:

“Respecto a su solicitud, la opinión por parte de la Contraloría de Servicios va muy de acorde al criterio de otras personas integrantes de la Subcomisión.  Al no tener conocimiento de las personas líderes o lideresas de los diferentes territorios, y los perfiles que se necesitan para el trabajo de la construcción del Diseño de Capacitación, así como para el Protocolo de Justicia Penal Restaurativa, consideramos importante, que la búsqueda de estas personas se realice por medio de las organizaciones correspondientes y con los perfiles necesarios, para poder cumplir con los objetivos propuestos. Lo anterior, nos asegura, continuar con la línea que hemos venido implementando de participación ciudadana, no solo dando cumplimiento a la política existente, sino a toda la normativa vigente, relacionada con este tipo de población. Espero dejarle debidamente informada.”

La señora Flor Arroyo Morera de la Escuela Judicial, en comunicado electrónico del 27 de marzo de 2020, 4:04 p. m., señaló:

*“… De conformidad con su solicitud de crear el perfil de las personas indígenas que colaborarán con el diseño de la actividad académica y de la creación del protocolo, nuestra especialista en métodos de enseñanza, doña Marisol Barboza, ha propuesto el siguiente perfil:*

* *líder o lideresa de un pueblo indígena,*
* *persona conocedora de la labor del Poder Judicial,*
* *persona conocedora de los procesos de acuerdo dentro de los pueblos indígenas,*
* *que hable español, (esto puede resolverse con una persona traductora)*
* *con disposición para colaborar.*

*El correo de doña Marisol se encuentra de seguido, por si quisieran tomar nota de las recomendaciones que ella propone para este proceso.”*

**SE ACUERDA:** **1°** Se toma nota del Oficio 048-DNJR-20/Mag. Gerardo Rubén Alfaro de 9 de marzo de 2020, dirigido por la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y de la integrante Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena, el señor Jean Carlos Monge, juez penal y el señor Carlos Romero, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. **2°** Solicitar a las Unidades de Capacitación y a la DNJR incluir en el proceso de construcción de los diseños de capacitación a personas indígenas, mujeres y hombres, representantes de pueblos indígenas, con el objetivo de que participen activamente en su elaboración en cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena, quienes cuenten con el perfil específico que se construya para esa población, luego de la propuesta formulada por la señora Marisol Barboza Rodríguez, especialista en métodos de enseñanza. De igual forma, instar a la DNJR incorpore población indígena para que participe en el proceso de construcción del Protocolo de Justicia Penal Restaurativa. Tomando en consideración que en los territorios indígenas hay diferentes tipos de liderazgos de la población indígena, lo ideal es contar con personas que puedan aportar sustancialmente e incidir en la construcción de ambos procesos, no en forma accesoria. Con el objetivo de que la participación no sea impuesta desde el Poder Judicial, y garantizar que la designación se realice desde los pueblos indígenas, se dispone a solicitar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para que, en forma coordinada con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, se pueda tener contacto con las diferentes organizaciones de personas indígenas y los listados. En tanto se superan las limitaciones generadas por la Pandemia Covid-19, y para mayor celeridad, instar a la Defensoría de los Habitantes de la República colaboración para poder contactar al Grupo de Peticionarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH que cubre a los pueblos de Salitre y Térraba, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas; además, al Tribunal de Derecho Propio de Boruca, Tribunal de Derecho Propio de Cabagra y el Tribunal Indígena de Bribri Talamanca, a fin de que designen una persona por cada organización que colabore con el diseño y la ejecución de las actividades de capacitación. Para hacer efectiva la participación de las personas indígenas, remitir solicitud a la Escuela Judicial acerca de la posibilidad de contar con recursos institucionales para cubrir la alimentación, viáticos y demás requerimientos de las personas indígenas; así como a las y los representantes ante la Subcomisión del INAMU, la DHR y el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, entre otros, a efecto de informen si hay opciones de colaboración. Las personas indígenas seleccionadas se integrarán al Comité de Capacitación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas previamente seleccionado al que se incorporan además la señora Marjorie Herrera por la DHR y la señora Jovanna Calderón por la DNJR. **3°** Se designa al juez Jean Carlos Monge para que coordine con la licenciada Ligia Jiménez, Defensora Pública Indígena y la señora Ariana Céspedes, Fiscala Indígena o a su suplente, la Fiscala Tatiana García, a efecto de que preparen una propuesta de capacitación integral que sirva de base al Comité de Capacitación para su análisis, previo a ser sometida a aprobación de la Subcomisión en pleno. **4°** Se tiene por planteado el perfil de las personas indígenas que participarán en el proceso de construcción de la capacitación, propuesto por la señora Marisol Barboza Rodríguez, especialista en métodos de enseñanza de la Escuela Judicial, en el que se señala debe tratarse de personas indígenas: a) líder o lideresa de un pueblo indígena, b) persona conocedora de la labor del Poder Judicial, c) persona conocedora de los procesos de acuerdo dentro de los pueblos indígenas, d) que hable español o en su defecto se le asignará una persona traductora, y con disposición para colaborar. **5°** Se declara firme este acuerdo por unanimidad para su ejecución. Comuníquese integralmente a la DNJR, la DHR, la Escuela Judicial y Unidades de Capacitación del Poder Judicial; además, a las y los integrantes del Comité de Capacitación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas; para lo que se solicitará colaboración a la Unidad de Acceso a la Justicia.

**ARTICULO XV**

La Oficina de Peritos de la Dirección Ejecutiva remitió el Oficio N° 1253-DE-2020 de 31 de marzo de 2020 a la Unidad de Acceso a la Justicia, en el que se indica:

*“En relación al acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en sesión celebrada el pasado 20 de diciembre de 2019, artículo IV, en lo que interesa a esta Dirección Ejecutiva dispuso: “2°. Consultar a la Oficina de peritos si se logró establecer comunicación con las Mujeres Indígenas enlistadas por la señora Ilse Valeria Vara Rojas del INAMU”.*

La Oficina de Peritos informó, conforme a lo solicitado, la lista de mujeres indígenas y los resultados de la comunicación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cédula** | **Idioma** | **Intento de localizar** | **Resultado** |
| Elizabeth Herrera Martínez | 303620295 | Cabécar | En fecha 17 de febrero de 2020 a las 8:41 | Se llamo y se obtuvo el correo electrónico por el que se envió la información de inscripción. |
| Ileana Moya Obando | 304270270 | Cabécar | Ya inscrita como Auxiliar de la Administración de Justicia. | Traductora ya inscrita. |
| Martha Eugenia Palacio Palacio | 603080029 | Ngäbe | En fecha 17 de febrero de 2020 a las 8:45, teléfono apagado.  17 de marzo de 2020 a las 18:06, teléfono apagado. | Sin localizar |
| Domitila Carrera Caballero | 901000408 | Ngäbe | En fecha 17 de febrero 2020 a las 9:20 no tiene correo electrónico, devolvería la llamada cuando consiguiera el de alguno de los hijos, no devolvió llamada. El 17 de marzo de 2020 no ingresa la llamada. | No se pudo dar la información. |
| Ofelina | 9010500315 | Ngäbe | En fecha 17 de febrero | Se remitió |

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio N° 1253-DE-2020 de 31 de marzo de 2020 remitido por la Oficina de Peritos de la Dirección Ejecutiva, en relación con el acuerdo tomado por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en sesión celebrada el pasado 20 de diciembre de 2019, artículo IV, en el que se dispuso consultar a la Oficina de Peritos de la Dirección Ejecutiva si se logró establecer comunicación con las Mujeres Indígenas enlistadas por la señora Ilse Valeria Vara Rojas del INAMU. Solicitar a la Oficina de Peritos valorar otras opciones de comunicación con las señoras indígenas, ante las dificultades que enfrentan muchas personas indígenas en territorios alejados, como los Ngäbe, para tener acceso a servicios de telecomunicaciones eficientes (acceso y cobertura). Se declara este acuerdo firme y se dispone a comunicarlos a la Oficina de Peritos de la Dirección Ejecutiva y a la señora Valeria Varas, por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia. -

**ARTICULO XVI**

La Secretaría General de la Corte remitió el Oficio N° 3168-2020 de 31 de marzo de 2020, en el que comunicó el 1 de abril pasado, el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 20-2020 de 12 de marzo de 2020, Artículo XXXIII, que literalmente indica:

San José, 31 de marzo de 2020

N° 3168-2020

Al contestar refiérase a este # de oficio

**Señora**

**Máster Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora**

**Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**

**Estimada señora:**

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión **N° 20-2020** celebrada el **12 de marzo del 2020**, que literalmente dice:

## “*ARTÍCULO XXXIII*

**DOCUMENTO N°13995-15, 2515-20, 3032-20**

La máster Damaris Vargas Vásquez, en su condición de Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, mediante oficio N° DVV-S1-022-2020 del 28 de febrero de 2020, gestionó lo siguiente:

“…Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi condición de Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, a fin de dar respuesta a la solicitud de información contenida en el Oficio Nº 3967-19 de 29 de abril de 2019, en el que la Secretaría General de la Corte comunicó el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, Artículo XXXV, que literalmente dice:

***“Se acordó: 1.)*** *Devolver el informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019 a la Dirección de Planificación, para que actualice los datos contenidos en el citado informe.* ***2.)*** *Solicitar a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General de la República, un criterio de la situación actual de la atención de los asuntos indígenas en la localidad Buenos Aires.* ***3.)*** *Hacer este acuerdo de conocimiento del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Ministerio Público y la Defensa Pública.****”***

El Informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019 fue emitido por la Dirección de Planificación con ocasión del acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 20 de diciembre del 2016, artículo LVI, asociado al estudio para determinar la necesidad de las plazas de Fiscal Auxiliar y Técnico Judicial 2 en la Fiscalía de Buenos Aires, así como una plaza de Juez 4 para el Tribunal de la Zona Sur, un Fiscal y Defensor Público, asignada mediante permiso con goce de salario y sustitución, para atender prioritariamente los asuntos indígenas en Buenos Aires.

Al respecto, es importante señalar que la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas emitió pronunciamiento, según evidencia que consta en el Oficio N° 11983-18 del 20 de noviembre del 2018 de la Secretaría General de la Corte. El acuerdo de la Subcomisión fue comunicado gracias a la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia en el Oficio N° CACC-408-2018 de 16 de noviembre de 2018. En el acuerdo, la Subcomisión solicita se valore devolver la plaza de defensor y fiscal a la jurisdicción de Buenos Aires para la atención de los procesos vinculados con personas indígenas.

La Dirección de Planificación en el Informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019, recomendó:

“(…)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.**  **Recomendaciones** | *Por lo anterior, se recomienda lo siguiente:*  ***Fiscalía de Buenos Aires***  ***5.1.-****En cuanto a la necesidad de las plazas de Fiscal Auxiliar y Técnico Judicial 2 asignadas con permiso con goce de salario y sustitución para atender el ejercicio de la acción penal de los posibles delitos de usurpación de tierras en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires, y en atención de la medida cautelar impuesta por la Corte Interamericana al Estado costarricense, esta Dirección no puede recomendar su creación en virtud de algunos conceptos, a saber:*   * + - * *Al igual que en estudios anteriores, se ha determinado que la carga de trabajo no justifica plenamente la creación de los recursos que se han venido desempeñando, tanto en la Fiscalía de Buenos Aires, como en el I Circuito Judicial de la Zona Sur.*       * *La coyuntura presupuestaria de la Institución y las limitaciones existentes a nivel de las propuestas para crear permisos con goces de salario.*   *A pesar de lo anterior, esta Dirección también es consciente de la importancia de atender con prioridad los asuntos en los que están involucrados grupos vulnerables de la sociedad, como en este caso, los grupos indígenas de esas zonas. De igual forma, se reconoce el abordaje y las actividades investigativas ya realizadas por los permisos concedidos en el 2017 en el caso de Térraba (17-000125-634-PE), que es un territorio más amplio, por lo que se estima que se tomará más tiempo en la investigación que el caso de Salitre.  Asimismo, se es consciente de una nueva solicitud de personas indígenas y la ONG para ampliar la medida cautelar, al pueblo de Bribri de Cabagra y se debe tomar en consideración el resto de los territorios, a los cuales también hay que brindar el servicio público de administración de justicia.*  *Por lo anterior se recomienda que la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, valoren si existen recursos internos que puedan trasladarse a la zona de Buenos Aires, para que asuman las importantes funciones que se han venido desarrollando y en los que están involucrados los grupos indígenas de esa zona. Esta misma medida aplicaría en relación con la plaza de Fiscal que se ha establecido en el I Circuito Judicial de la Zona Sur.*  *Realizar la gestión ante la Administración de Pérez Zeledón para que les brinden colaboración con el respectivo cronograma de trabajo, dado que la Fiscalía General destacó en Buenos Aires un Fiscal durante el primer trimestre del presente año para la atención de los asuntos indígenas, no así la plaza de Técnico Judicial para las labores de apoyo, razón por la cual se coordinó con la Administración.*  ***5.2.-*** *Se recomienda que la Fiscalía de Asuntos Indígenas lleve un control de las estadísticas de los asuntos indígenas por fiscalía, y a partir de la experiencia de Bribri Salitre defina un cronograma de atención a los territorios indígenas en el Cantón de Buenos Aires y brinde seguimiento al proyecto. Asimismo, que rinda informes trimestrales a la Dirección de Planificación de las actividades realizadas por las plazas asignadas y el desarrollo del proyecto, con el fin de tener datos y elementos para evaluar la necesidad del recurso otorgado.*  ***Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur***  ***5.3.-*** *Después del análisis de carga de trabajo, la Dirección de Planificación reitera la recomendación emitida en el informe anterior de NO recomendar la propuesta del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, en cuanto a nombrar otra jueza o juez en forma permanente en Buenos Aires, con su respectiva oficina, y una sala de juicio en forma regular; a efectos de atender las apelaciones y demás vistas de los asuntos de  Buenos Aires; realizar juicios unipersonales e integrar colegio con dos profesionales de Pérez Zeledón para realizar los juicios previamente señalados.*  ***5.4.-*** *La Defensa Pública deberá igualmente, valorar la posibilidad de un traslado de algún recurso que exista y que pueda reubicarse en esa zona para continuar con la atención de los asuntos donde están involucrados los grupos indígenas, una vez que se lleven a cabo estudios de reestructuración y reorganización de oficinas, en caso de estimarse necesario. Sobre este tema indicó el Lic. Erick Núñez Rodríguez, Subdirector de la Defensa Pública, que de los análisis que se están realizando para redistribución de plazas de acuerdo a las necesidades institucionales y procurando asignar los recursos donde mayormente se requiere, se determinó la necesidad de atender prioritariamente la Zona de Buenos Aires.*  ***5.5****.-En virtud de los inconvenientes presentados en el local que se alquila del ANDE en Buenos Aires, se recomienda a la Administración Regional de Pérez Zeledón agilizar las gestiones que actualmente realiza para que a la brevedad posible se alquile un local en el Cantón de Buenos Aires para habilitar una sala de juicios específica, que permita instalar un equipo de videoconferencia para las vistas y lecturas de sentencias desde Pérez Zeledón.*  ***5.6.-*** *Finalmente se reitera la recomendación, en el sentido de que si el órgano superior* ***estima conveniente apartarse del criterio técnico antes expuesto*** *y ofrecer el servicio de administración de justicia penal en Buenos Aires (a nivel de Tribunal Penal), con la finalidad de brindar mayor accesibilidad a la población vulnerable identificada (personas indígenas),  se presentan algunas estimaciones de costos mínimos asociados con la puesta en funcionamiento de una* ***“Sede de Tribunal”*** *en esa localidad, para asumir la atención de juicios unipersonales, apelaciones, vistas y procesos abreviados en materia Penal; esos recursos contarían con la integración de dos profesionales del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur para celebrar juicios colegiados:*  ***COSTOS MÍNIMOS ESTIMADOS [:1]***   |  |  | | --- | --- | |  |  |  * ***Estructura mínima de 5 plazas nuevas****:*  |  |  | | --- | --- | | ***PUESTO*** | ***COSTOS ESTIMADOS***  ***2018*** | | *1 Jueza o Juez 4* | *64.124.000,00* | | *1 Coordinadora o Coordinador Judicial 3* | *19.060.000,00* | | *1 Técnica o Técnico Judicial 3* | *16.179.000,00* | | *1 Custodia/o de Detenidas/os* | *17.211.000,00* | | *1 Auxiliar de Seguridad (Guarda de Juicio)* | *13.602.000,00* | | ***TOTAL*** | ***¢ 130.176.000,00*** |  * ***Mobiliario y Equipo de Oficina***  |  |  | | --- | --- | | ***PUESTO*** | ***COSTOS ESTIMADOS***  ***2018*** | | *1 OFICINA NUEVA (a)* | *1.918.673,00* | | *1 Jueza o Juez 4* | *846.295,00* | | *1 Coordinadora o Coordinador Judicial 3* | *391.398,00* | | *1 Técnica o Técnico Judicial 3* | *391.398,00* | | *1 Custodio de Detenidos* ***(b)*** | *2.288.449,00* | | *1 Auxiliar de Seguridad (Guarda de Juicio)* ***(b)*** | *1.497.651,00* | | ***TOTAL*** | ***¢ 7.333.864,00*** |   ***NOTAS: (a)*** *Incluye 1 Reloj de pared, 6 Sillas de espera (visita), 3 Archivadores metal tipo legal 4 gavetas, 2 Ventiladores de pared, 2 Bibliotecas de metal y 4 Butacas de 4 plazas.* ***(b)*** *Costos de equipamiento básico.*   * ***Alquiler de local*** *(para albergar al personal y habilitado con una sala de juicios considerando un área de 125 metros cuadrados): ¢ 1.500.000,00 colones por mes* ***[.)) …” -” A ic: () 12]****, para* ***un monto anual de ¢18.000.000,00 colones****.*   ***Por tanto, los costos totales anuales estimados por habilitar una “Sede de Tribunal” en Buenos Aires serían de alrededor de ¢ 155.509.864,00 colones***  *Adicionalmente, se debe contemplar el costo de* ***¢ 112.575.000,00*** *correspondiente a una plaza de Fiscala o Fiscal Auxiliar (¢ 57.101.000) y una de Defensora o Defensor Público (¢ 55.474.000), para completar el equipo de trabajo.*  *Cabe indicar que las recomendaciones antes expuestas fueron formuladas considerando los resultados obtenidos por la Licda. Graciela Lugo Solano, Profesional 2 (Socióloga) de la Dirección de Planificación, en el análisis sociodemográfico de la zona de Buenos Aires.*  ***Relación del Informe con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018***  *Las recomendaciones antes expuestas están en concordancia con el tema Nº 7 del Plan Estratégico Institucional, para el período 2013-2018, que indica:*  ***“7.- Planificación institucional***  *Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”*  *Asimismo, los planteamientos son consecuentes con los siguientes ejes transversales:*   * ***Servicio Público de Calidad.*** *La propuesta tiene como fin acercar el servicio de justicia penal a las personas usuarias, y principalmente a los grupos vulnerables socialmente, del Cantón de Buenos Aires.* * ***Accesibilidad.*** *Existen problemas evidentes de accesibilidad en el servicio en los grupos vulnerables identificados, principalmente en las personas indígenas por las condiciones socioeconómicas en que viven y lo complejo de los traslados hasta Pérez Zeledón.* |
| **Realizado por:** | *Licda. Marlene Alpízar López, Profesional 2.*  *Licda. Graciela Lugo Solano, Profesional 2.* |
| **Aprobado por:** | *Licda. Ginethe Retana Ureña, Jefa del Subproceso Organización Institucional.*  *Máster Allan Pow Hing Cordero, Jefe del Subproceso de Planificación Estratégica.* |
| **Visto bueno:** | *Ing. Dixon Li Morales, Jefe del Proceso de Ejecución de las Operaciones.* |

Como antecedentes se citan en el Oficio en referencia los siguientes:

En sesión Nº 75-16 celebrada el 9 de agosto del año 2016, artículo XXIV, se concedió permiso con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada en propiedad por el servidor Heiner Bermúdez Anchía, para que llevara a cabo las labores de apoyo al fiscal auxiliar designado para la dirección funcional y ejercicio de la acción penal de los posibles delitos de usurpación de territorio indígena, en perjuicio del pueblo indígena Bribri de Salitre en primera instancia, para luego pasar a analizar lo atinente al pueblo indígena Teribe ubicado en Térraba, cantón de Buenos Aires de Puntarenas, lo anterior a partir del 16 de agosto y hasta el 23 de diciembre del 2016.

Posteriormente, en sesión N° 113-16 del 20 de diciembre del 2019, artículo LVI,  se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada por el servidor Heiner Bermúdez Anchía, y a la plaza N° 19899 de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Buenos Aires, ocupada por el licenciado Esteban Ceciliano Matamoros a fin de que se dedicaran a las labores que se dieron cuenta, lo anterior a partir del 24 de diciembre del 2016 y hasta el 31 de marzo del 2017.

Seguidamente, en sesión N° 2-17 celebrada el 12 de enero del 2017, artículo LXXVI, se concedió permiso con goce de salario y sustitución, a una plaza de Juez 4, para el Tribunal del Primer Circuito de la Zona Sur, así como a un fiscal y un defensor o defensora, para completar el equipo, a partir del 16 de enero del 2017 y hasta por tres meses y se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

Luego en sesión N° 29-17 del 28 de marzo del 2017, artículo LV, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre 2017, a las plazas N° s 96502 de Técnico Judicial 2 y 19899 de Fiscal Auxiliar, ambas de la Fiscalía de Buenos Aires, a fin de que se dedicaran a las labores que se dan cuenta.

En sesión N° 32-17 celebrada el 4 de abril del 2017, artículo XLV, se prorrogaron los permisos con goce de salario y sustitución, a una plaza de Juez 4 y a una de Fiscal, del 17 de abril del 2017 y hasta por tres meses, para que se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

En sesión N° 34-17 del 5 de abril del 2017, artículo LXXXIX, se prorrogaron los permisos con goce de salario y sustitución, a una plaza de Defensor Público, del 16 de abril del 2017 y hasta por tres meses más, para que se dedicaran a las labores indicadas con el fin de dar un trato prioritario a las comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires.

Luego en sesión N° 40-17 celebrada el 27 de abril del 2017, artículo XXXVIII, se comunicó al máster Randall Quirós Soto, Jefe de la Sección de Desarrollo Organizacional de la Dirección de Planificación, que este Consejo requiere el estudio solicitado en sesión Nº 113-16 del 20 de diciembre del 2016, artículo LVI, para determinar la necesidad de mantener los permisos con goce de salario y sustitución a la plaza N° 96502 de Técnico Judicial 2 y a la plaza N° 19899 de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía de Buenos Aires.

Posteriormente, en sesión N° 42-17 del 4 de mayo del 2017, artículo LXIII, se tuvo por rendido el informe de la Dirección de Planificación con respecto al estudio solicitado en sesión N° 40-17 del 27 de abril del 2017, artículo XXXVIII.

En sesión N° 63-17 del 04 de julio del 2017, artículo XCVII, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución de la plaza de juez 4 asignada al Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, hasta el último día laboral del 2017, para que se dedicara las labores indicadas y se concedió permiso con goce de salario y sustitución a una plaza de Técnico Judicial del citado despacho, del 01 de setiembre hasta el último día laboral del 2017, siempre y cuando exista contenido presupuestario, de lo contario se instó a la administración regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, a mantener dentro de las posibilidades el técnico supernumerario a fin de que continuara con la colaboración del juzgador en los debates y vistas a realizar en el cantón de Buenos Aires.

Seguidamente, en sesión N° 66-17 del 13 de julio del 2017, artículo XCI, se prorrogó el permiso con goce de salario y sustitución a una plaza de Defensor Público, hasta el último día laboral del 2017, para que se dedicara a las labores indicadas, en el cantón de Buenos Aires.

Finalmente, en sesión N° 96-17 celebrada el 19 de octubre del 2017, artículo CII, se aprobó el traslado de la plaza de Juez 4 del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, al Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por lo que restaba del año 2017.

En relación con lo anterior, la Subcomisión mantiene la misma posición que externó en su momento y amplía la misma para que se valore con los recursos institucionales existentes, amplíe el equipo de trabajo para atender de manera prioritaria los procesos judiciales vinculados con la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas, al tratarse de una población en situación de vulnerabilidad; con especial atención de los procesos relacionados con personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado. Lo anterior, a fin de poder cumplir con la responsabilidad del Poder Judicial como parte del Estado, en lo que a sus competencias se refiere. De igual forma, la petición anterior obedece al cumplimiento de la Circular 188-19 de Corte Plena.

**Recomendaciones:**

1. Se solicita establecer una acción afirmativa en beneficio de la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas y de China Kichá de Pérez Zeledón, que consiste en reforzar tanto la jurisdicción de Buenos Aires como Pérez Zeledón, con nuevas plazas que permitan  conformar un equipo de trabajo completo que integre representantes de Judicatura, Defensa Pública, Fiscalía de Asuntos indígenas, OIJ, personal de apoyo, recursos tecnológicos y materiales tales como vehículos para transporte y oficinas, entre otros que sean necesarios para que la labor del equipo de trabajo pueda ser eficaz, eficiente y efectiva, a efecto de atender los procesos judiciales vinculados con las personas indígenas citadas. Lo anterior, con fundamento en la normativa internacional que regula los derechos de la población indígena: Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, la cual tiene carácter supraconstitucional según reiteradas resoluciones de la Sala Constitucional al tratarse de convenios referidos a derechos humanos; el artículo 1 de la Constitución Política que refiere a Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural; así como la normativa interna, entre otras, la Ley Indígena y la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

En relación con lo anterior, debe tomarse en consideración que los conflictos en Buenos Aires de Puntarenas han aumentado considerablemente, por lo que la recomendación planteada en esta recomendación y en la siguiente, se refieren a la autorización de un equipo de trabajo en materia penal por medio de la aplicación del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conforme a la Metodología de Administración de Proyectos para el control y seguimiento debidos. Además, debe tomarse en consideración que los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas corresponden a una competencia territorial diferente al territorio de China Kichá de Pérez Zeledón.

1. Para la valoración de la urgencia del citado recurso se tome en cuenta no solo aspectos estadísticos, sino que se tome en cuenta la especificidad con que los funcionarios deben atender la población indígena y el abordaje diferenciado de las causas, que implica un aumento en las cargas de trabajo de manera que para atender adecuadamente los usuarios se debe contar con más personal, con el cual sea posible atender prioritariamente la conflictividad que enfrenta la zona.
2. En seguimiento del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica, que obligan al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, concertar las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y así evitar su repetición, se solicita al Consejo Superior en cumplimiento a lo que compete al Poder Judicial como parte del Estado, el reforzamiento de las oficinas judiciales que atienden este tipo de procesos en las materias penal, agraria y contenciosa administrativa, con el personal necesario a efecto de que las decisiones judiciales sobre ese tipo de asuntos se atienda de manera prioritaria y se emitan de conformidad con la normativa nacional e internacional que regula los derechos de la población indígena. Lo anterior, debido a que las medidas cautelares y provisionales de la CIDH tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica de derechos en posible riesgo, hasta en tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final, según la CIDH. Con ocasión de lo anterior, a fin de que el Estado pueda cumplir con la decisión final de las Medidas y, de ser necesario, con las reparaciones ordenadas, es necesario reforzar los equipos de trabajo humanos y materiales a disposición para atender este tipo de procesos, con especial referencia a la materia penal que es objeto de análisis.
3. A efecto de atender la "gravedad de la situación", vinculada con el serio impacto que la acción u omisión estatal pueda tener sobre los derechos protegidos o sobre el efecto eventual de las decisiones pendientes ante la CIDH; así como la "urgencia de la situación", que se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza son inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; el "daño irreparable" vinculado con la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización, se solicita la atención prioritaria e inmediata de los requerimientos de recursos materiales y tecnológicos, así como el talento humano necesario para conformar el equipo de trabajo que continúe dando respuesta a los procesos vinculados con la población indígena beneficiaria de las Medidas Cautelares.
4. A efecto de cumplir con la Circular 188-19 de Corte Plena, solicitar a la Escuela Judicial para que priorice el fortalecimiento de las competencias del equipo de trabajo que está a cargo y que, de aceptarse las recomendaciones anteriores, se designe de manera inmediata para la atención de los procesos judiciales penales vinculados con la población indígena de Buenos Aires de Puntarenas y de China Kichá de Pérez Zeledón, indistintamente de la cantidad de procesos pendientes o la proyección que se tenga ante los altos niveles de conflictividad en la zona, atendiendo sobre todo a la exigencia de la normativa supraconstitucional que regula los derechos de esa población y los requerimientos de la CIDH. Lo anterior, para disminuir en lo posible desde las funciones del Poder Judicial, la serie continua de ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, identificados por los gestionantes de las Medidas Cautelares como posibles factores generadores de riesgo que incidirían en su situación, asociados a lo que la CIDH califica como un presunto clima de tensión y hostilidad, en vista que los miembros de ambos pueblos indígenas estarían cohabitando un área en la que se encontrarían personas no indígenas, en el marco de un conflicto territorial que habría perdurado por varios años; y supuestas represalias, debido a la labor que los miembros de ambos pueblos indígenas estarían adelantando, con el fin de que se reconozca y delimite su territorio.
5. Se solicite a la Dirección Nacional de Justicia Restaurativa y al Centro de Conciliación del Poder Judicial continuar con la atención de los procesos indígenas de la zona citada, coadyuvando en la búsqueda de soluciones legalmente posibles y con pertinencia cultural, en cumplimiento del mandato que les confiere la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica. Lo anterior, considerando que, según refiere la CIDH en las Medidas Cautelares 321-15, el 7 de julio de 2014, el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica expresó *"su preocupación por la violencia registrada en el territorio indígena de Salitre [...l, que ha provocado movilización de personas, quema de ranchos y bloqueo de caminos. La ONU confía en que el Estado impulse urgentemente la resolución pacífica del conflicto de manera que se proteja el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y también se garantice los derechos humanos de todos sus habitantes y a los actores involucrados para que rechacen cualquier tipo de violencia"*
6. Solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, ante la posibilidad de que la situación de riesgo pueda exacerbase aún más en la zona de Buenos Aires y de China Kichá de Pérez Zeledón, por la continuidad del clima de tensión y las medidas destinadas a delimitar los territorios, se tomen medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. Se recomienda que las medidas necesarias que se tomen para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, deben tener pertinencia cultural.
7. Solicitar a las personas servidoras judiciales y oficinas involucradas en los equipos de trabajo que se conformen, emitir informes de su gestión, según la periodicidad que la Dirección de Planificación sugiera al Consejo Superior y éste disponga, a efecto de verificar el acceso a la justicia de la población y la atención prioritaria y oportuna.
8. Instar a la Dirección Ejecutiva para asegurar que el equipo de personas traductoras e intérpretes, conformado tanto por mujeres como por hombres, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, sea suficiente para la atención de los procesos judiciales en los que estén vinculadas personas indígenas de las zonas referidas, para garantizar que no se constituya en un atraso en la gestión de los diferentes equipos de trabajo.
9. Solicitar a la Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Pérez Zeledón a cargo de Buenos Aires, y a los despachos involucrados, tomar las medidas necesarias para que el pago a las personas traductoras e intérpretes se realice de manera oportuna y cumpliendo con todos los requerimientos legales y políticas institucionales, para poder seguir contando con este apoyo.
10. Solicitar colaboración a la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica que, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica, para que coadyuven con los peritajes culturales necesarios para la atención de los procesos judiciales que atienda el equipo de trabajo que se conforme, a cargo de reforzar la atención de los asuntos indígenas de la zona de Buenos Aires de Puntarenas y China Kichá de Pérez Zeledón.
11. Solicitar a la Escuela Judicial, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica y la Circular 188-19 de Corte Plena, brinde capacitación de manera prioritaria al equipo de trabajo que se conforme para atender los asuntos penales de la zona, con el objetivo de fortalecer sus competencias en Derecho Indígena, siguiendo los lineamientos dispuestos en la circular en referencia que incluyen aspectos relacionados con contenidos mínimos, verificación de asistencia y seguimiento del impacto de la capacitación. Instar a la Escuela Judicial verifique que, en los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos: a) Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016; b) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017, c) Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras; d) Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; d) Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas; además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico. Incluyendo, el establecimiento de un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros. Al respecto, la Institución tiene experiencia pues para tal seguimiento del impacto de la capacitación se diseñó el Manual para realizar las evaluaciones de resultados de la capacitación judicial en el desempeño laboral por parte de la Escuela Judicial.
12. Declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, ampliar a sensibilización, atención y acceso a la justicia de pueblos indígenas en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y la Circular 188-19 de Corte Plena.
13. Solicitar a la Escuela Judicial llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, y valorar su inclusión en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.
14. Instar al CACMFJ para que, junto con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, divulgue la Circular 188-19 de Corte Plena; en especial el eje sexto referido a las personas juzgadoras de todas las materias que atienden procesos vinculados con personas indígenas, en el que se señala: “*Con absoluto respeto al principio de independencia judicial, emitir circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales en las que se les reitere su deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras, a saber:* ***i)*** *asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin;* ***ii*** *proporcionar el acceso a los pueblos indígenas y tribales a asistencia técnica y legal en relación con su derecho a la propiedad colectiva, en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla, y* ***iii*** *facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, así como facilitar la participación de los pueblos en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, sin que ello les implique hacer esfuerzos desmedidos o exagerados, ya sea debido a las distancias o a las vías de acceso a dichas instituciones, o a los altos costos en virtud de los procedimientos. Además, el otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, así como su especial relación con la tierra, y respeto de los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena, los cuales se encuentren en armonía con los derechos humanos, según los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Kaliña y Lokono versus Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 y las disposiciones de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.”* Así como el sétimo que indica: *“****7.*** *Con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros, establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, en lo relacionado con la aplicación del Derecho Indígena, con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias indígenas una justicia pronta, cumplida, sin denegación y accesible; priorizando lo vinculado con los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre.”*
15. Solicitar a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, Comisión de Acceso a la Justicia y Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, y el eje octavo de la Circular 188-19, priorizar la realización de encuentros entre el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre, a efecto de que estas últimas les expongan el funcionamiento del Poder Judicial en sus diferentes ámbitos. En forma previa a su ejecución, solicitarles concertar con las personas indígenas de los pueblos indígenas de Buenos Aires la identificación de los contenidos mínimos de los aspectos sobre los cuales desean ser informados y los mecanismos que ofrece el Poder Judicial para el acceso a la justicia. Así mismo, que en forma coordinada con la Escuela Judicial y demás Unidades de Capacitación de la institución, coordinen encuentros entre representantes del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y personas funcionarias judiciales con competencia para conocer procesos judiciales vinculados con esa población, a efecto de que las personas indígenas capaciten a las y los servidores judiciales sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas; priorizándose a quienes laboren en las oficinas judiciales con competencia material y territorial para conocer de procesos vinculados con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Iniciar el proceso de capacitación con personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias; y luego se continuará con las demás.

Se adjuntan documentos de interés y desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas nos ponemos en la mayor disposición en caso de que requieran una ampliación del informe.



- 0 -

El máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial, mediante oficio N°0206-DG-2020 del 4 de marzo de 2020, comunicó lo siguiente:

***“…***según el oficio N° 3967-2019; del 29 de abril de 2019, sobre el acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión Nº 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, Artículo XXXV, me permito hacer un recuento de la labor desplegada por la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, así como reseñar la labor que por ley nos compete.

Como es de su conocimiento, los asuntos indígenas relacionados con la recuperación de tierras, en los últimos años han tomado un rumbo violento (Homicidios y otros) producto de los enfrentamientos entre la parte indígena con la no indígena, hecho que tiene al Gobierno Central comprometido y las autoridades de la región en alerta y a la expectativa de lo que pueda ocurrir, incluso recientemente la recuperación de tierras indígenas se activó en la localidad de China Kichá de Pérez Zeledón, por lo que el conflicto se extiende presentándose en ambos cantones.

En respuesta el Poder Judicial ha otorgado recurso humano y material a la Fiscalía, Defensa, Judicatura de los sitios de interés con el propósito de hacerle frente a los casos surgidos del conflicto, pero sin considerar a las oficinas inmersas del Organismo de investigación Judicial, por lo que internamente se han realizado algunos reacomodos para lograr contar con posibilidades de hacer frente a la situación, aspectos que actualmente no bastan para la magnitud del problema ya que las cargas de trabajo se han incrementado exponencialmente en comparación con lo que se atendía años atrás. En este momento definitivamente la Unidad Regional del OIJ de Buenos Aires no cuenta con personal suficiente para poder atender los casos de una forma eficiente y, más bien el exceso de trabajo ha venido provocando problemas de saludo y curva de rendimiento decreciente.

En razón de lo anterior se solicita que el Organismo de Investigación Judicial sea reforzado como otros ámbitos en la zona lo han sido con plazas profesionales y técnicas para atender estos asuntos, por lo menos es imperioso el refuerzo de la Unidad Regional del OIJ en Bueno Aires con una pareja de investigadores y un auxiliar (03 plazas), para poder brindar atención oportuna a los asuntos indígenas de la región de Pérez Zeledón y Buenos Aires, para lo cual se propone autorizar un permiso con goce de salario y sustitución en los términos permitidos por el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por su parte, en lo referente a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, cabe indicar que del año 2016 a la fecha se han realizado nueve estudios de seguridad de la zona indígena de Buenos Aires, el último de ellos en diciembre del 2019.

Se han atendido un total de 69 solicitudes de acompañamientos para brindar protección a diferentes diligencias e instancias del poder judicial, entre ellas; personal de Ministerio Público en especial de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Así como de la Defensa Pública, personal de la Judicatura y peritos judiciales del área de topografía de Ciencias Forenses.

Partiendo de lo observado en el último estudio de seguridad realizado en la zona, existe la necesidad urgente de contar con personal de protección de víctimas en el lugar, esto con el fin de poder atender de manera inmediata cualquier situación que se pudiese dar y que requiera de nuestros servicios. Es por lo anterior que en fecha 17 de febrero último se inauguró una nuestra de la UPROV en el cantón de Perez Zeledón dentro del OIJ en el tercer piso del edifico de los Tribunales de Justicia, la cual cuenta con cuatro agentes de protección y un vehículo todo terreno, además contamos con el ofrecimiento de poder utilizar un segundo vehículo de la Oficina de Atención del Ministerio

Público. Es de importancia indicar que a partir de la fecha de la muerte del líder indígena Jerry Rivera RiveraNombre 001 , se asignaron cinco agentes más en el lugar a fin de poder atender todas las solicitudes que a raíz del acontecimiento ingresaron, las cuales a la fecha son en total 27 requerimientos.

En torno a lo indicado por la señora Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en punto número 7 de su exposición, donde literalmente indica “Solicitar a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, ante la posibilidad de que la situación de riesgo pueda exacerbase aún más en la zona de Buenos Aires y de China Kichá de Pérez Zeledón, por la continuidad del clima de tensión y las medidas destinadas a delimitar los territorios, se tomen medidas adecuadas y efectivas, tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona. Se recomienda que las medidas necesarias que se tomen para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, deben tener pertinencia cultural”.

Me permito indicar que al tenor de lo que indica la Ley 8720 a la cual no debemos, al día de hoy se han atendido de la mejor manera todas las solicitudes de protección emanadas de la Oficina de Atención y Protección para la Víctima del Delito del Ministerio Público, quienes por mandato de ley son los encargados de hacer las valoraciones y dictar las correspondientes medidas de protección, el artículo 6 de la ley establece “ Administración del Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes del proceso penal…… continuando con el desarrollo de este artículo, la indicada Ley le confiere a la Oficina de Atención del Ministerio Público una serie de atribuciones que nacen a raíz de las valoraciones realizadas por el equipo especializado de evaluadores, la cuales las realizan a las víctimas que así lo deseen, definiendo en cada caso la o las medidas que correspondan, este punto en particular es de suma importancia para nuestra labor destacar que los diferentes casos tendrá sus propias medida de acuerdo al nivel de la amenaza o el riesgo, siendo que esto nos limita a realizar aquellas acciones de carácter operativo destinadas a cumplir con las medidas dictaminadas, cabe destacar que dentro de las medidas algunas de estas se aplican directamente en la zona de conflicto, como por ejemplo los monitoreos, que son ingresos previamente determinados donde se nos pide ir hasta donde se encuentre la víctima y asegurarnos de que se encuentra en buen estado de salud físico y psicológico.

Por lo indicado en líneas anteriores, queda claro que la función de la UPROV está supeditada a un requerimiento formal emanado del “Equipo Técnico

Evaluador” del Ministerio Público, quienes ante la voluntad de un usuario que así lo promovió mediante denuncia y que fue evaluado por ellos para dictar una serie de medidas, las cuales fueron aceptadas por la víctima y ejecutadas por nosotros en UPROV.

También es importante resaltar que en principio la aplicación de la Ley 8720 es de carácter voluntario, artículo 4. Ámbito de Aplicación último párrafo “

Podrá otorgarse la protección aun cuando la denuncia no se haya interpuesto.

Sin embargo, una vez acordada la protección, la denuncia por el hecho que la genera deberá interponerse en un plazo razonable. Aquí el derecho que la ley le confiere a la víctima en su carácter voluntario es precisamente que las medidas de protección en alguna medida son restrictivas de derechos de las personas, he ahí la posibilidad de someterse o no al proceso.

Para hacer efectiva la protección de las víctimas de riesgo o amenazas señaladas en la presente ley, el estado delegó en el Organismo de Investigación Judicial y este a su vez la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, la función de realizar todas aquellas acciones tendientes a la protección de estas víctimas, quienes voluntariamente se acogieron al programa mediante la formulación de la respectiva denuncia y aceptando las medidas extraprocesales establecidas por el Ministerio Público. Esta función no debe de confundirse con la labor de prevención que realiza el Ministerio de Seguridad Pública a quien le compete la seguridad ciudadana de manera generalizada, en todo caso la capacidad de acción de la Unidad de Protección es sumamente limitada.”

- 0 -

Manifiesta la integrante Castillo Vargas: “Presidente, magistrado Cruz Castro, estimo que por la complejidad y la amplitud de peticiones que nos hace la Subcomisión, el tema debemos analizarlo detalladamente en relación con los recursos que eso implica y las posibilidades, entonces mi sugerencia es que se rote, para que alguno de los integrantes lo analicemos y vayamos corroborando, que es viable y que no, para atenderle en la mayor medida de lo posible, lo que la subcomisión nos indica, pero de manera que sea realista”.

Indica el presidente, magistrado Cruz Castro: “Me parece muy razonable la sugerencia, porque es muy complejo y además muy delicado para el país”.

Analizada por este Consejo Superior la presente gestión, **se acordó:** Turnar al o la integrante que por rol corresponda, para estudio e informe a este Consejo.

**Atentamente,**

**Lic. Carlos T. Mora Rodríguez**

**Subsecretario General interino**

**Corte Suprema de Justicia**

Diligencias / Refs: **13995-15, 2515-20, 3032-20**

*Claudio*

SE ACUERDA: Se toma nota del Oficio Nº 3967-19 de 29 de abril de 2019, en el que la Secretaría General de la Corte comunicó el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 28-19 celebrada el 28 de marzo de 2019, Artículo XXXV, que literalmente dice: *“Se acordó: 1.) Devolver el informe N° 328-PLA-OI-PE-2019 del 8 de marzo del 2019 a la Dirección de Planificación, para que actualice los datos contenidos en el citado informe. 2.) Solicitar a la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General de la República, un criterio de la situación actual de la atención de los asuntos indígenas en la localidad Buenos Aires. 3.) Hacer este acuerdo de conocimiento del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, del Ministerio Público y la Defensa Pública.”* Además, se toma nota del Oficio N° 3168-2020 remitido por la Secretaría General de la Corte, fechado 31 de marzo de 2020 y enviado el 1 de abril de 2020, en el que comunicó el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión N° 20-2020 de 12 de marzo de 2020, Artículo XXXIII; el Oficio N° DVV-S1-022-2020 de 28 de febrero de 2020 y sus recomendaciones, remitido por la señora Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas; y el Oficio N° 206-DG-2020 de 4 de marzo pasado enviado por el máster Walter Espinoza Espinoza, Director General del Organismo de Investigación Judicial. Estar a la espera de lo que resuelva el Consejo Superior. Se declara acuerdo firme por unanimidad.

**ARTICULO XVII**

La Dirección de Planificación remitió a la Unidad de Acceso a la Justicia el Oficio N° 507-PLA-RH-MI-2020 de 30 de marzo de 2020, en el que confirió el plazo de 8 días naturales para que se emita pronunciamiento sobre el Oficio 10880-18, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 2 de octubre del 2018, artículo LXVI, e informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas.

El oficio se hizo de conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas el 1 de abril de 2020, con el objetivo de que emitieran pronunciamiento a la Dirección de Planificación dentro del plazo conferido de 8 días naturales concedido sobre las observaciones que eventualmente se tengan.

*507-PLA-RH-MI-2020*

*Ref. SICE 1692-18*

*30 de marzo de 2020*

*Magistrado*

*Jorge Olaso Álvarez, Coordinador*

*Comisión de Acceso a la Justicia*

*Máster*

*Diana Montero Montero, Directora a.i.*

*Defensa Pública*

*Estimado señor:*

*Estimada señora:*

*En atención al oficio 10880-18, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 2 de octubre del 2018, artículo LXVI, les remito el informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas.*

*Les solicito respetuosamente analizar este documento y enviar las observaciones que estimen pertinente en un plazo de 8 días naturales a partir de la fecha de recepción, con el fin de valorarlas previo a que sea elevado a conocimiento del Consejo Superior. Debe tomar en consideración el criterio de las y los servidores judiciales del despacho a su cargo que están involucrados, para lo cual es conveniente que les compartan estos resultados.*

*La respuesta debe ser enviada al correo electrónico oficial de la Dirección de Planificación:*

[*planificacion@poder-judicial.go.cr*](mailto:planificacion@poder-judicial.go.cr)

*De no recibirse respuesta en el plazo concedido, se entenderá que no se tienen observaciones y se seguirá el trámite indicado en el segundo párrafo de este oficio.*

*Atentamente,*

*Nacira Valverde Bermúdez*

*Directora a.i. de Planificación*

*Copias:*

* *Dirección de Tecnología de la Información*
* *Dirección de Gestión Humana*
* *Archivo*

*NVB/EGPG/bls*

*Ref.* ***1692-18****/1610-18/1859-18/150-18*



***Subproceso de Modernización Institucional***

***Proceso de Ejecución de las Operaciones***

***Dirección de Planificación***

***Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas***

***Elaborado por:***

*Inga. Hazel Calderón Mata*

*Lic. Eder Arias Vargas*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***NOMBRE*** | ***Puesto*** |
| ***Aprobado por:*** | *Inga. Elena Gabriela Picado González* | *Jefa a.i. Subproceso Modernización Institucional* |
| ***Visto Bueno*** | *Lic. Nacira Valverde Bermúdez* | *Directora de Planificación* |

*Marzo, 2020*

# ***Oficios y referencias***

*En el siguiente cuadro se detalla los números de oficios de la Secretaría General de la Corte que corresponden a las referencias internas de la Dirección de Planificación:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***No. Referencia Interna*** | ***No. Oficio de la Secretaría*** | ***Oficios Relacionados*** |
| *1610-18* | *10473-18* | *-* |
| *1692-18* | *10880-18* | *-* |
| *1859-18* | *-* | *Correo del 13-nov-18 de la Dirección de la Defensa Pública, sobre cantidad de usuarios indígenas* |
| *150-19* | *951-19* | *-* |
| *384-19* | *2339-19* | *-* |

# *Proyecto u oficinas analizadas*

*Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.*

# *Antecedentes*

*Mediante oficio 37-CSP-18 del 9 de abril, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, sesión extraordinaria 25-18 del 4 de abril, donde se aprobó el informe 20-PLA-OI-2018, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, entre las que se destaca asignar siete plazas extraordinarias de Defensor Público para la atención de materia Agraria, por todo el período 2018 en apoyo del plan de descongestionamiento del Tribunal Agrario, y se estima la continuidad de las plazas de defensores para el período 2019.*

*Por otra parte, en relación con el Proyecto de Ley denominado: “Carta de derechos sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas”, expediente 17805; mediante oficio 10880-18 del 22 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 86-18, del 2 de octubre, artículo LXVI donde se acoge la solicitud presentada por la Jefatura de la Defensa Pública mediante oficio JEFDP-1123-2018 del 17 de setiembre de 2018 y se hace de conocimiento del acuerdo a la Dirección de Planificación con la finalidad que realice el análisis de todos los aspectos que implique el cambio por la entrada en vigencia de lo que ese entonces era el proyecto de Ley. En este particular, se resalta que la Ley 9593 de Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, entró en vigencia a partir de su publicación, la cual fue realizada en la Gaceta 179 (Alcance 174) del 28 de setiembre de 2018.*

*Además, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, de la Dirección de la Defensa Pública señala que:*

*“Dentro del estudio que realiza la Dirección de Planificación sobre las cargas de trabajo de plazas asignadas a la jurisdicción de Flagrancia, se valore la posibilidad de que algunas de estas plazas sean reasignadas a la atención de la población indígena para garantizar su acceso a la justicia (…)”*

*En razón de lo anterior, mediante oficio 10473-18, del 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 87-18 del 4 de octubre de 2018, artículo LXXXIV, donde se considera trasladar la gestión presentada por la máster Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, a estudio de la Dirección de Planificación, e informe a este Consejo lo que corresponde.*

*Por otro lado, en lo referente al patrocinio letrado de los servidores judiciales legalmente encomendado a la Jefatura de la Defensa Pública (artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), en la sesión 43-2019 del Consejo Superior artículo XL del 14 de mayo 2019, se acordó trasladar una plaza de persona defensora de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia “para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial, ya que se detectó la necesidad de reforzar estas funciones, pero no ha sido posible su asignación por la escases de recursos institucionales”.*

*Por otro lado, mediante oficio 2339-19 del 6 de marzo de 2019, de la Secretaría de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 13-19 del 15 de febrero de 2019, que literalmente dice:*

*“Acoger la gestión anterior, en consecuencia: Autorizar al doctor Roberto Montero García, Defensor Público Supervisor, para que como recargo asuma en codefensa con las y los defensores públicos agrarios la representación de las personas usuarias que requieran de servicios contenciosos administrativos; además, la defensa de los dos funcionarios de Gestión Humana que deben ser representados y que a su vez funja como capacitador de la Defensa Pública en litigio Contencioso Administrativo en aras de poder  asumir con responsabilidad  la competencia creada en la  Ley N°9530.”*

*En otro orden de ideas, es relevante hacer mención que mediante el informe 34-PLA-EV-2017 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley denominado “Código Procesal de Familia”; se analizó lo referente a la Defensa Pública en la atención de asuntos en materia de Familia, Violencia Doméstica y Pensión Alimentaria; donde, se consideró entre otros asuntos crear un total de 33 plazas de Defensor Público para la defensa de la parte actora en asuntos de Pensión Alimentaria. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, durante las sesiones de trabajo para analizar el proyecto del Presupuesto de Poder Judicial para el 2018, y se acordó lo siguiente:*

*“Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se dispuso: Acoger la propuesta planteada por la magistrada Arias y el magistrado Salazar Alvarado, en consecuencia, los presupuestos actualizados de impacto de Justicia Restaurativa y de las Reformas Procesal de Familia y Agrario se conocerán en el momento en que sean Leyes de la República.”*

*Seguido, la Dirección de Planificación da a conocer, por medio del oficio 1285-PLA-2019 del 16 de agosto de 2019 que, mediante correo electrónico del 13 de agosto del 2019, la Magistrada de la Sala Segunda Sra. Julia Varela Araya solicitó a la Dirección de Planificación modificar las estimaciones del impacto presupuestario que tendría la implementación del proyecto de Lay del Código Procesal de Familia que se tramita en el expediente 19455 de la Asamblea Legislativa. Donde, textualmente se expone lo siguiente:*

*“…con la finalidad de disminuir el impacto económico de la implementación del referido código, se eliminaron tres temas importantes que contenían el mayor peso desde el punto de vista económico, para esta importantísima y necesaria reforma. Lo eliminado se refiere a: Los equipos interdisciplinarios, para los despachos de Familia que lo requerían*

1. *Los juzgados sumarios que se creaban*
2. *La Defensa Pública para atender en todos los casos de familia, donde se dieran intereses contrapuestos*

*Como consecuencia de lo anterior, en el tema de la Defensa Pública, el contenido del artículo 56, del proyecto de Ley consultado a Corte, cuyo informe se rindió el pasado lunes 12 de agosto,* *solo refleja lo que actualmente está dentro la Ley de Pensiones Alimentarias vigente; por lo que no debe de interpretarse que se están creando obligaciones nuevas de plazas para Defensa Pública, para atender casos de pensiones alimentarias.*

*En consecuencia, dentro de los costos del proyecto del Código Procesal de Familia, no debe existir ninguna suma para la creación de plazas de asistencia letrada de la Defensa Pública, tal y como lo expliqué ayer en Corte Plena, en el informe rendido.” (…)*

*Por lo mencionado anteriormente, es importante indicar que, este nuevo planteamiento solicitado por la Magistrada Varela Araya, difiere del presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos en el 2017, propiamente en cuanto a la exclusión de 33 plazas de Defensora o Defensor Público, que se requerirían para dar cobertura nacional a la atención en pensión alimentaria a la parte beneficiaria que no cuente recursos económicos para contratar patrocinio letrado conforme al artículo 56 del proyecto de este proyecto de Ley, donde no se debe interpretar que se están creando nuevas obligaciones de plazas para la Defensa Pública para atender casos de pensiones alimentarias.*

*El proyecto de Ley del “Código Procesal de Familia” fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 2018.*

*En sesión 34-18 del 25 de abril de 2018 del Consejo Superior, se dispuso:*

*“1) Aprobar el informe 33-PLA-MI-2018 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, de acuerdo al escenario planteado en la recomendación 5.1.2.*

*2)* ***Siguiendo los lineamientos de la Corte Plena no se deberán incluir los recursos en el anteproyecto 2019 hasta que se apruebe la Reforma Legal como Ley de la República****” (la negrita no es original del texto).*

*El Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó aprobar el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria); donde se mantiene una plaza de persona Defensora por Oficina que cubre el tema de interés contrapuestos en materia agraria; y además, deben asumir la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas.*

*Posterior, el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión extraordinaria 47-19 (Presupuesto 2020) artículo XV, del 23 de mayo de 2019, dispuso de manera textual lo siguiente:*

*“Aprobar las recomendaciones de la Dirección de Planificación, por tanto, mantener lo dispuesto por el Consejo Superior, se aclara a la Defensa Pública que precisamente por las razones expuestas en esta reconsideración, en el informe inicial se asignó un recurso humano para la zona de Buenos Aires por el impacto que representa en la prestación del servicio público”*

*Este informe fue conocido y aprobado en la Sesión 22-19 de Corte Plena (Presupuesto 2020) celebrada el 6 de junio de 2019, Artículo IV; en el cual, se dispuso de manera textual:*

*“Aprobar por separado del Presupuesto Ordinario del Poder Judicial, los requerimientos correspondientes a la “Ley 9593. Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica” en la forma indicada. Así votaron las magistradas y los magistrados Cruz, Solís, Molinari, Aguirre, Sánchez, Olaso, Chacón, Ramírez, Solano, Hernández, Salazar Alvarado, Araya, las Suplentes y los Suplentes León Díaz, Aragón Cambronero, Blanco González, Zúñiga Morales, Segura Bonilla, Alfaro Vargas y Chacón Jiménez.”*

*Adicionalmente, en el informe definitivo 490-PLA-EV-2019, fue conocido en sesión 43-19, artículo XL del Consejo Superior 43-19, del 14 de mayo de 2019. En este caso el Consejo Superior, dispuso tener por rendido el informe definitivo; además, recomendó de manera textual:*

*“(...) se reasignará esta plaza para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial”.*

*“(…) Del análisis y seguimiento efectuado a las cargas de trabajo de los puestos de Defensora o Defensor Público, se recomienda mantener solo una de las dos plazas ordinarias, reconociendo la labor tan importante que desarrollan estas personas, sin embargo, se evidenció que estas labores pueden ser asumidas por uno de esos recursos.*

*De esta forma y a partir de labores conexas que viene desarrollando la Dirección de Planificación en la Defensa Pública, se considera oportuno reasignar esta plaza de Defensora o Defensor Público para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, para tender personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a personas funcionarias judiciales que son denunciadas atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial (…)”*

*En oficio 101-P-2019, de fecha 17 de mayo de 2019 y dirigido a la Ministra de Hacienda, el Presidente de la Corte y en alusión al oficio DM-0466-2019, mediante el cual se informó de la aplicación de la Regla Fiscal en el presupuesto 2020, entre otras ideas al referirse al monto máximo autorizado al Poder Judicial, se indicó:*

*“(…) Es importante señalar que estos datos no incorporan los requerimientos asociados a las nuevas obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa por aprobación de leyes, los cuales será necesario solicitar ante el Ministerio de Hacienda de forma complementaria al presupuesto ordinario.”*

*Posteriormente mediante oficio DM-0945-2019, de fecha 11 de junio del 2019, la señora Ministra de Hacienda y en alusión a lo indicado en el oficio 101-P-2019, comunica al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:*

*“(…) Finalmente, en relación con las solicitudes complementarias al Anteproyecto de presupuesto de la institución a que se hace alusión en su oficio, le informo que el cumplimiento de la regla fiscal no da espacio para el financiamiento de nuevos gastos”.*

*En el oficio 118-P-2019 del 14 de junio de 2019, el presidente de la Corte solicitó a la Ministra de Hacienda se valorara la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender esta y cinco nuevas obligaciones más encomendadas por la Asamblea Legislativa.*

*Mediante oficio 1538-PLA-PP-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la Dirección de Planificación al revisar el Proyecto de Presupuesto 2020 trasladado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y en relación directa con los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial para la atención de nuevas obligaciones, en el apartado A.1. se indicó lo siguiente:*

*“(…) No fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa”.*

*Este oficio mencionado anteriormente fue conocido por Corte Plena en sesión 41-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, artículo XV.*

*Finalmente, de acuerdo con la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, aprobada por la Asamblea Legislativa, se comprobó que los recursos para la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas no fueron incorporados durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019 relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económica del 2020” en la Comisión de Asuntos Hacendarios.*

# *Justificación*

*El siguiente informe responde a la actualización del análisis presentado para el presupuesto 2020 que contempla los cambios de entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, ya que en el presupuesto 2020 no se brindaron recursos para cubrir esta nueva legislación, por lo que nuevamente se revisa y actualiza el informe para conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena.*

# *Metodología de trabajo*

*A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:*

*De conformidad al informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación sobre el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en todas las materias, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 y aprobado por Corte Plena mediante acuerdo del acta 022-2019 del 06 de junio de 2019; se da seguimiento a las recomendaciones expresas en dicho informe, con el propósito de determinar su cumplimiento.*

*Seguidamente, mediante correo electrónico, el 27 de enero de 2020, se le solicita a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas, la información estadística relacionada con asuntos atendidos por la Defensa Pública que contengan intervinientes de población indígena durante el año 2019, con la finalidad de analizar el comportamiento de la atención de los asuntos a nivel nacional.*

*Así mismo, mediante el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020, se le solicita al Tribunal Contencioso Administrativo, los datos estadísticos referentes a asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo o como persona física. De ahí que, el día 04 de febrero de 2020, se recibe correo electrónico de respuesta con el listado de asuntos que lleva el Tribunal e indicando que, únicamente se pueden filtrar los asuntos activos, en los cuales se encuentran como parte una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, no así, como persona física o persona servidora judicial.*

*Adicionalmente, el 03 de febrero de 2020 se coordina una sesión de trabajo con la Administración de la Defensa Pública, respaldada en la minuta 29-PLA-MI-MNTA-2020; con el propósito de identificar el impacto dado en la Defensa Pública a partir de la implementación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y, recibir retroalimentación de la manera de trabajo optada por la administración para solventar las necesidades de la población en mención.*

*Con base en la información recolectada en reunión mencionada en el párrafo anterior y, con la información estadística enviada por la Administración de la Defensa Pública; se procede a analizar las cargas de trabajo de las plazas de Defensora o Defensor Público responsables de la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.*

*Seguido, se consultó a Unidad de Capacitación de la Defensa Pública sobre los lineamientos establecidos por parte de la Jefatura de la Defensa Pública para cubrir el tema de capacitación del personal de la Defensa Pública en la tramitación de asuntos con interviniente persona usuaria indígena.*

*Finalmente, se realizan consultas al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para obtener estadísticas de la población indígena, a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para segmentar la población por territorio según etnia y Defensas Públicas regionales de las zonas donde se concentra la mayor densidad de personas indígenas, para obtener particularidades de las poblaciones.*

# *Información relevante*

## *Aspectos demográficos a considerar*

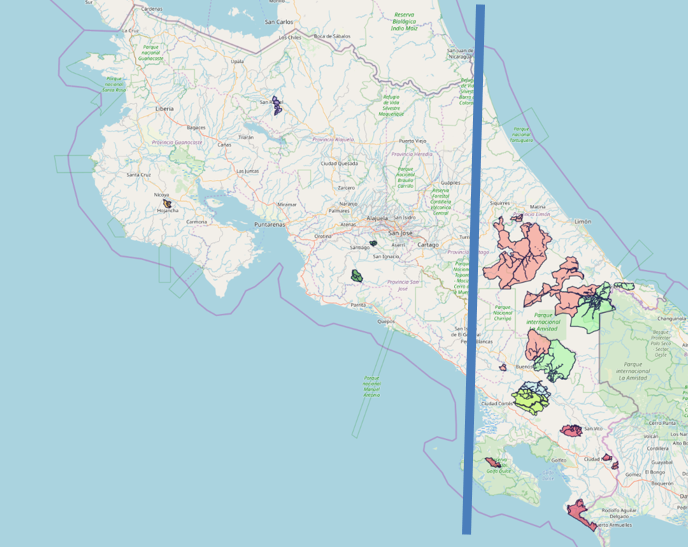
*Con base en la consulta realizada al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la población indígena, según el censo 2011, es de 104 143 personas, las cuales están distribuidas a lo largo del territorio nacional, segmentada en ocho etnias:*

* *Bribri*
* *Brunca*
* *Teribe*
* *Gnobe o Guaymí*
* *Huetar*
* *Maleku (Región Norte)*
* *Chorotega*
* *Cabécar*

*Las etnias que agrupan la mayor cantidad de población son los Bribri con un 35% y los Cabécar con 29%. Estas dos etnias representan un 64% sobre el total de la población indígena en Costa Rica.*

*En la siguiente figura se muestra la concentración de territorios indígenas de Costa Rica, según el Sistema Geo referencial del Poder Judicial.*

*Figura 1 Mapa de territorios indígenas de Costa Rica*



***Fuente****: Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación, con datos tomados del Sistema Geo referencial del Poder Judicial.*

*Con datos estadísticos del INEC y según la distribución de territorios, se puede determinar que un 78% de los pueblos indígenas se encuentran en las zonas ubicadas al sur del país, viviendo en las provincias de Limón 26%, Puntarenas 24%, San José (zona sur) 19% y Cartago 8%. El restante 22% se encuentra distribuido en Guanacaste 10%, Alajuela 8% y Heredia 4%. Por tal motivo, se considera atender de forma prioritaria las zonas con mayor densidad de población indígena ubicadas en el sur.*

*En virtud de los datos anteriores y, con los obtenidos de la distribución de poblaciones indígenas del CONAI, se realiza una estimación de la posible afluencia de personas indígenas según las defensas públicas más cercanas.*

*Figura 2 Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país*

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Como resultado se obtuvo que Bribri (29%), Buenos Aires (26%), Limón (12%) y Turrialba (8%), son las zonas que pueden tener mayor demanda en la atención de asuntos indígenas según su ubicación geográfica, densidad de población indígena y la presunta movilización de personas; pues, en conjunto agrupan el 75% de la posible afluencia.*

*En síntesis, según los datos demográficos obtenidos del INEC y según la competencia de las defensas públicas del país ante la presunta movilización de personas indígenas, se puede ver que las zonas de Bribri y Buenos Aires en conjunto poseen el 55% de la posible demanda, ubicadas muy por encima de las otras defensas públicas del país.*

*Por otro lado, el 30 de abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió la resolución 16/15 con la medida cautelar 321-12 donde solicita al Gobierno de Costa Rica, adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encuentran en el sureste del Puntarenas; importante mencionar que esta zona es competencia de la Defensa Pública de Buenos Aires.*

## *Análisis de datos estadísticos de la Defensa Pública*

### *Representación de la Defensa Pública en asuntos con personas usuarias indígenas*

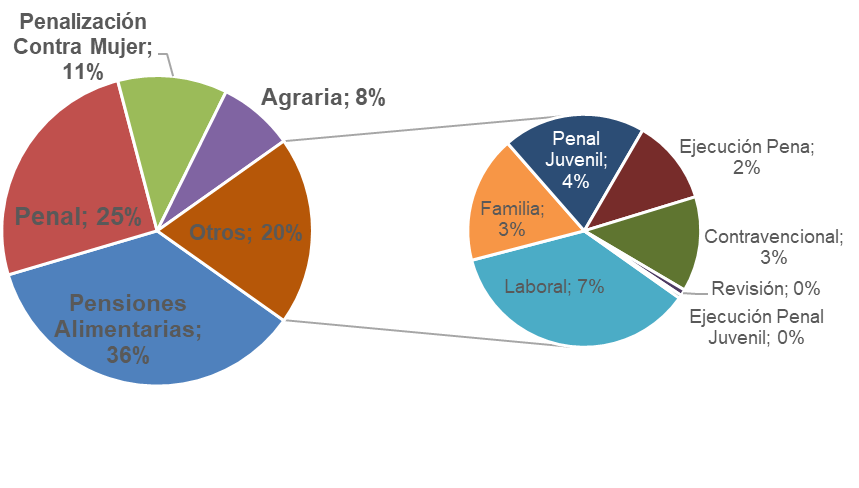
*Como parte del proceso de recopilación de datos estadísticos, se solicita al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública, y a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Asuntos de Pueblos Indígenas; la información estadística de la cantidad de personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública en asuntos nuevos, de octubre de 2018 a setiembre de 2019; así como también, la cantidad de procesos activos (circulante) y asuntos terminados al cierre de setiembre de 2019 por cada una de las oficinas a nivel nacional.*

*En cuanto a los datos suministrados por la Defensa Pública, se encuentra la cantidad de procesos (expedientes) activos al cierre de setiembre de 2019, así como la cantidad de expedientes que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019 y la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos asuntos.*

*Es importante aclarar que, según indica el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; por orden se contabilizan por separado las representaciones y expedientes con interviniente persona usuaria indígena de la competencia antigua y la actual, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas, donde se le amplía la competencia a la Defensa Pública.*

*En la siguiente figura se muestra la representación por materia de los expedientes, donde se cuenta como interviniente una persona usuaria indígena y, que ingresaron de octubre 2018 a setiembre 2019:*

*Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019*



***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Con base en la información mostrada en la figura anterior, se puede inferir que, el 80% de la cantidad de expedientes, de octubre 2018 a setiembre 2019, responden a personas indígenas en calidad de intervinientes en asuntos de Pensiones Alimentarias (36%), Penal ordinario (25%), Penalización de violencia contra mujer (11%) y Agrario (8%). El restante 20% de los asuntos entrados es en Laboral, Penal Juvenil, Familia, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisión y Ejecución Penal Juvenil.*

*Dicho lo anterior, en la siguiente tabla se evidencia la proporción de procesos entrados (expedientes), respecto a la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos procesos.*

*Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Materia*** | ***Cantidad de expedientes*** | ***Personas indígenas*** | ***Promedio de personas indígenas por expediente*** | ***Diferencia*** |
| *Pensiones Alimentarias* | *412* | *438* | *1,06* | *26* |
| *Penal* | *295* | *369* | *1,25* | *74* |
| *Penalización Contra Mujer* | *132* | *150* | *1,14* | *18* |
| *Agraria* | *91* | *102* | *1,12* | *11* |
| *Demás materias* | *227* | *241* | *1,06* | *14* |
| ***Total*** | ***1157*** | ***1300*** | ***1,12*** | ***143*** |

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Con base en la tabla anterior, se puede observar que, un proceso (expediente) mantiene en promedio 1,12 personas usuarias indígenas como intervinientes, en los cuales hay 143 personas usuarias indígenas en calidad de interviniente en asuntos donde hay dos o más personas indígenas intervinientes.*

*Haciendo la segregación por materia, se evidencia que, de los asuntos que ingresaron de octubre de 2018 a setiembre 2019, la materia penal mantiene la mayor proporción de cantidad de personas usuarias indígenas por expediente (1,25); es decir, hay 74 personas usuarias indígenas que se mantienen en procesos con dos o más intervinientes. Aunado a lo anterior, materia agraria mantiene un promedio de 1,12 personas usuarias indígenas por proceso, pero 11 personas se mantienen en asuntos con dos o más intervinientes. Las demás materias mantienen en promedio 1,06 personas indígenas intervinientes por cada expediente, lo anterior equivale a que solo 6 de cada 100 personas indígenas, en los asuntos ingresados, sean partícipes en asuntos con dos o más intervinientes.*

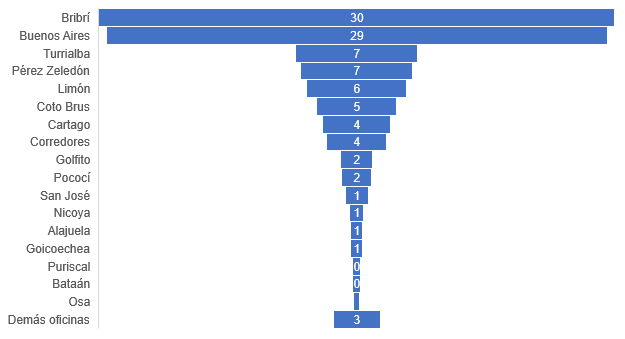
*Ahora bien, se tiene como excepción algunos asuntos conocidos dentro de la Defensa Pública, donde la Supervisora de Asuntos Indígenas indica que intervienen gran cantidad de personas usuarias indígenas y por ello, se toma en consideración dentro del análisis actual.*

*Sin embargo, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)” y el presente análisis estadístico, se infiere técnicamente que dichos expedientes responden a casos aislados y se encuentran fuera de los límites de control, debido a que en el amplio periodo de tiempo de estudio no se refleja el comportamiento descrito.*

*Además, de la* ***Tabla 1 Cantidad de asuntos entrados, de octubre 2018 a setiembre 2019, y la cantidad de personas usuarias indígenas intervinientes****; se puede inferir que la entrada promedio mensual de asuntos, a nivel nacional, es de 103, con 116 personas usuarias indígenas intervinientes. De esos 103 asuntos nuevos a nivel nacional, en promedio 37 son de Pensiones Alimentarias, 26 de Penal Ordinario, 12 de Penalización de Violencia contra Mujer, 8 de materia agraria y, las restantes 20 causas son Laboral, Familia, Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Contravencional, Revisiones y Ejecución de la Pena en Penal Juvenil.*

*Ahora, en la siguiente figura se evidencia la concentración mensual por oficina de la Defensa Pública, de la cantidad de asuntos entrados con personas usuarias indígenas durante octubre 2018 hasta setiembre 2019.*

*Figura 4 Cantidad de asuntos entrados de octubre 2018 a setiembre 2019, con personas indígenas representadas por la Defensa Pública*



***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Con base en la información mostrada en la figura anterior, en un primer bloque se puede inferir que la mayor concentración de asuntos con personas usuarias indígenas se encuentra en la Defensa Pública de Buenos Aires, con un promedio de ingreso mensual de 30 expedientes; seguido de la Defensa Pública de Bribri, con un promedio de ingreso mensual de 29 asuntos. Las dos oficinas de la Defensa Pública mencionadas anteriormente responden al 58% del total de asuntos entrados a nivel nacional.*

*Lo anterior, es congruente con la cantidad de población indígena en las zonas, según los datos demográficos detallados en el apartado anterior.*

*Ahora bien, en la figura anterior, como un segundo bloque, podemos observar que las oficinas de la Defensa Pública de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen un promedio de ingreso mensual entre cuatro y siete representaciones.*

*Estas oficinas representan un 31% del total de representaciones mensuales, el equivalente a 32 personas usuarias indígenas. Haciendo la aclaración que, según explica la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Pueblos Indígenas, debido a la necesidad particular de cada oficina, se ha optado por que personas defensoras se trasladen una o dos veces por semana a brindar soporte a otras oficinas; tal es el caso de Pérez Zeledón que brinda soporte a Buenos Aires, Cartago a Turrialba, Limón a Bribri y Corredores a Coto Brus.*

*De lo anterior y, considerando que el control de asuntos se realiza por el Libro de Registro de la Defensa Pública por persona defensora, se podría reportar expedientes de personas usuarias indígenas en las oficinas que brindan el soporte, cuando la persona indígena es atendida en la oficina a la que se le brinda dicha colaboración.*

*Finalmente, en un tercer bloque, el restante 11% del ingreso mensual de representaciones a personas indígenas, equivale a un promedio de 11 personas y, estas se distribuyen en el resto del país en las diferentes materias.*

*Dicho lo anterior, la siguiente tabla muestra la cantidad de personas representadas en asuntos nuevos en promedio por mes, en las oficinas que representan el 89% de las representaciones de la Defensa Pública a nivel nacional.*

*Tabla 2 Promedio de asuntos mensuales entrados en las oficinas que representan el 89% del ingreso mensual a nivel nacional*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Oficina*** | ***Pensiones Alimentarias*** | ***Penal*** | ***Penalización Contra Mujer*** | ***Agraria*** | ***Demás materias*** | ***Total*** |
| *Bribri* | *14* | *8* | *6* | *0* | *3* | *30* |
| *Buenos Aires* | *6* | *10* | *4* | *2* | *7* | *29* |
| *Turrialba* | *3* | *2* | *1* | *0* | *1* | *7* |
| *Pérez Zeledón* | *3* | *0* | *0* | *2* | *2* | *7* |
| *Limón* | *2* | *1* | *0* | *1* | *2* | *6* |
| *Coto Brus* | *2* | *1* | *1* | *0* | *1* | *5* |
| *Cartago* | *1* | *0* | *0* | *2* | *0* | *4* |
| *Corredores* | *2* | *1* | *0* | *1* | *1* | *4* |
| *Demás oficinas* | *3* | *3* | *0* | *0* | *4* | *11* |
| ***Total*** | ***37*** | ***26*** | ***12*** | ***8*** | ***20*** | ***103*** |

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Nota: La Defensa Pública reporta, de octubre 2018 a setiembre 2019, asuntos entrados con persona usuaria indígena en 34 oficinas; por lo que la fila “Demás oficinas” contempla un total de 26 oficinas.*

*De la tabla anterior se puede extraer que, el promedio de ingreso mensual de asuntos mensuales es similar para la Defensa Pública de Bribri (30) y Buenos Aires (29). No obstante, la segmentación de asuntos entrados por materia varía en su comportamiento, debido a que en Bribri el 46% de los asuntos entrados son de Pensiones Alimentarias (14), mientras que, en Buenos Aires el 34% de los asuntos entrados son Penales Ordinarios (10).*

*Las oficinas de Turrialba, Pérez Zeledón, Limón, Coto Brus, Cartago y Corredores mantienen una representación mensual entre uno y tres asuntos en Pensiones Alimentarias y, entre uno y dos asuntos en Penal Ordinario.*

*Respecto a Penalización de Violencia contra la Mujer, se observa que las oficinas de Bribri y Buenos Aires presentan una entrada mensual promedio de seis y cuatro, respectivamente. Las demás oficinas de la Defensa Pública a nivel nacional mantienen un ingreso promedio mensual igual o inferior a uno, por lo que se puede decir que hay meses que ingresa un asunto nuevo y meses donde no hay un ingreso.*

*Respecto a las causas entradas en materia agraria, en la tabla anterior se evidencia que, la Defensa Pública de Buenos Aires, Pérez Zeledón y Cartago mantienen un promedio mensual de dos asuntos; en las demás oficinas hay meses que ingresa un asunto y meses en los que la entrada es nula.*

*Es importante recordar que la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la Defensa Pública de Buenos Aires y, en ese sentido, se puede inferir que la mayor cantidad de asuntos agrarios entrados se encuentran en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.*

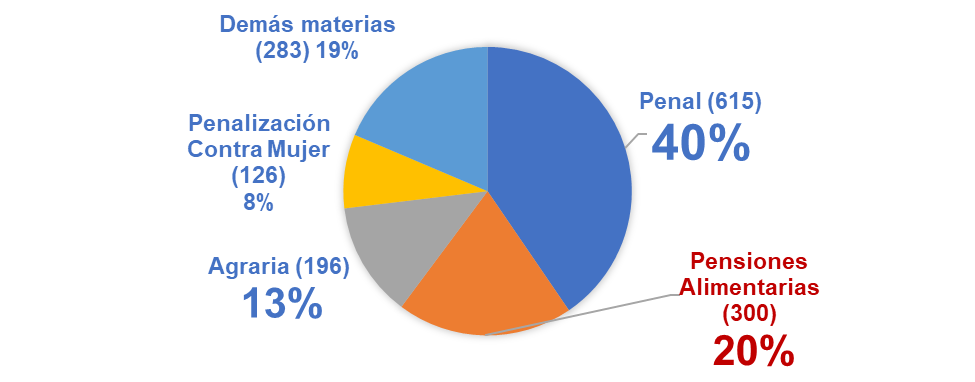
*En los expedientes contabilizadas en “Otras materias”, la Defensa Pública de Buenos Aires presenta el ingreso del 37% de las representaciones nuevas por mes; por lo que es importante mencionar que dichos asuntos se concentran en Laboral (un asunto mensual), Penal Juvenil (3 asuntos mensuales), Familia (2 asuntos mensuales) y Contravencional (2 asuntos mensuales). Además, la Defensa Pública de Bribri el promedio de “Otras materias” se mantiene en tres causas nuevas por mes, concentradas principalmente en materia Laboral.*

*Finalmente, cabe manifestar que la representación en materias como Penal, Laboral, Agrario, Pensiones, Penalización contra la mujer y Penal juvenil, se atiende por la Defensa Pública, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.*

### *Circulante de asuntos con interviniente persona usuaria indígena, antes y después de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas*

*Con base en los datos estadísticos facilitados por el Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; se tiene que, con base en la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, al cierre del mes de setiembre de 2019, el circulante a nivel nacional de asuntos con persona usuaria indígena en calidad de interviniente es el siguiente:*

*Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019*



***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*El gráfico anterior segmenta las materias que representan el 80% del circulante, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, de la población indígena a nivel nacional, donde se puede observar que el 40% de los asuntos activos se concentran en materia penal (615 expedientes), el 20% en Pensiones Alimentarias (300 expedientes), el 13% en materia agraria (196 expedientes), el 8% en Penalización de Violencia contra Mujer (126 expedientes) y, el restante 20% se concentra en las demás materias (283 expedientes).*

*Haciendo la comparación entre la* ***Figura 3 Representación por materia de los asuntos ingresados, donde intervienen personas usuarias indígenas, de octubre 2018 a setiembre 2019*** *y la* ***Figura 5 Circulante activo con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593, con interviniente persona indígena, al cierre de setiembre de 2019****, se tiene que, a pesar que el mayor ingreso mensual se encuentra en Pensiones Alimentarias, el circulante demuestra se concentra principalmente en materia penal. De conformidad con lo anterior, se puede concluir el tiempo de tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias es menor al tiempo de tramitación de asuntos Penales.*

*Ahora, en la siguiente tabla se muestra la concentración de asuntos activos, con persona usuaria indígena en calidad de interviniente y, con la competencia antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, por oficina de la Defensa Pública y materia, al cierre de setiembre de 2019.*

*Tabla 3 Asuntos activos con persona indígena conforme a la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593, al cierre de setiembre de 2019, segregado por materia y oficina*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Oficina*** | ***Penal*** | ***Pensiones Alimentarias*** | ***Agraria*** | ***Penalización Contra Mujer*** | ***Demás materias*** | ***Total*** |
| *Bribri* | *302* | *102* | *0* | *57* | *32* | ***493*** |
| *Buenos Aires* | *163* | *102* | *44* | *30* | *111* | ***450*** |
| *Limón* | *23* | *18* | *25* | *8* | *32* | ***106*** |
| *Coto Brus* | *54* | *9* | *0* | *22* | *5* | ***90*** |
| *Pérez Zeledón* | *3* | *21* | *32* | *0* | *19* | ***75*** |
| *San José* | *10* | *2* | *22* | *1* | *31* | ***66*** |
| *Corredores* | *20* | *12* | *12* | *3* | *14* | ***61*** |
| *Demás oficinas* | *40* | *34* | *61* | *5* | *39* | ***179*** |
| ***Total*** | *615* | *300* | *196* | *126* | *283* | ***1520*** |

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Considerando la información mostrada en la tabla anterior, con la competencia de la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; la Defensa Pública de Bribri es la que mantiene, al cierre de setiembre de 2019, la mayor cantidad de procesos activos (493 expedientes), seguido de la Defensa Pública de Buenos Aires (450 expedientes). Estas dos oficinas mantienen el 62% del total de causas activas a nivel nacional.*

*Es importante resaltar que, la Defensa Pública de San José mantiene, al cierre de setiembre de 2019, un total de 66 asuntos activos, donde 22 son de materia agraria, 10 de materia penal, 2 de Pensiones Alimentarias, 1 de Penalización de Violencia contra Mujer y hay 31 expedientes que se encuentran contabilizados en “Demás materias”. Importante mencionar que esas 31 causas son de Ejecución de la Pena (13), Laboral (9), Ejecución de la Pena en Penal Juvenil (7) y Revisión (2).*

*Finalmente, es importante hacer mención que, como se explicó anteriormente, la Administración de la Defensa Pública contabiliza dentro de sus datos estadísticos los asuntos en los que se representan personas usuarias indígenas producto de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas y por tal, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas indígenas representadas en razón de la ampliación de la competencia de la Defensa Pública, al cierre del mes de diciembre de 2019.*

*Tabla 4 Personas Indígenas que mantienen procesos en trámite en la Defensa Pública en razón del cumplimiento de la Ley 9593, al 31 de diciembre 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Oficina*** | ***Pensiones Alimen-tarias*** | ***Familia*** | ***Contencioso Administrativo*** | ***Violencia Doméstica*** | ***Contravencional*** | ***Civil*** | ***Otro*** | ***Total*** |
| *Buenos Aires (2)* | *23* | *32* | *1* | *5* | *2* |  | *3* | ***66*** |
| *Bribri (3)* | *29* | *11* |  | *6* | *3* | *1* |  | ***50*** |
| *San José* |  |  | *38(1)* |  |  | *1* |  | ***39*** |
| *Turrialba* | *1* | *3* |  | *7* |  |  |  | ***11*** |
| *Corredores* | *2* | *9* |  |  |  |  |  | ***11*** |
| *Golfito* | *8* | *1* |  | *1* |  |  |  | ***10*** |
| *Alajuela* |  |  |  |  |  | *2* |  | ***2*** |
| *Brus* | *2* |  |  |  |  |  |  | ***2*** |
| *Puriscal* |  | *1* |  |  |  |  |  | ***1*** |
| ***Total*** | ***65*** | ***57*** | ***39*** | ***19*** | ***5*** | ***4*** | ***3*** | ***192*** |

*\*1 Estos procesos llevan codefensa, por lo que es requerida la asignación de dos profesionales*

*\*2 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Pérez Zeledón*

*\*3 Estos procesos son atendidos por profesionales de la oficina de Limón*

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Las representaciones mostradas en la tabla anterior responden a asuntos que iniciaron en razón del cumplimiento de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a las personas indígenas, esto debido a que, por ejemplo, en Pensiones Alimentarias, esas 65 personas representadas están en calidad de demandadas. Y, es importante aclarar que los asuntos presentados en la tabla anterior no se encuentran contabilizados dentro del análisis expuesto anteriormente, debido al orden de tabulación de la información por parte de la Administración de la Defensa Pública. Por lo que, lo que se encuentra establecido en la tabla anterior es lo que realmente corresponde al incremento en las cargas de trabajo a partir de la promulgación de la Ley 9593.*

*Respecto a los asuntos Contenciosos Administrativos, es importante hace énfasis de que se reportan 39 representaciones al cierre de diciembre de 2019.Estos asuntos mantienen la particularidad de que requieren codefensa, por lo que al menos deben participar dos Defensoras o Defensores en su tramitación.*

*En consulta con la Coordinación de la Defensa Pública de Buenos Aires, el Licenciado Andrey Fuentes Gamboa, se expone que, por indicación de la Jefatura de la Defensa Pública, los asuntos contenciosos administrativos con interviniente persona indígena se asignan como recargo a las personas defensoras agrarias y por tal, desde que recibió la indicación, el único asunto que ha ingresado a la oficina es el que tiene asignado dentro de su circulante la persona defensora de materia agraria.*

*Adicionalmente, como se ha hecho mención, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda soporte a la oficina de Buenos Aires y la Defensa Pública de Limón le brinda soporte a la oficina de Bribri, tanto para la tramitación de asuntos ordinarios, como para la tramitación de asuntos donde se requiera representar a ambas partes del proceso.*

*Por último, en consulta al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; las tres representaciones contabilizadas en otras materias responden a una Querella y representaciones en materia de Tránsito.*

*Por otra parte, según lo expuesto por la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Personas Indígenas de la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; y de una manera muy proactiva por parte de la Defensa Pública, los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de las personas defensoras que atienden Pensiones Alimentarias, los asuntos de Contencioso Administrativo en el circulante de las personas defensoras de Agrario, y los asuntos en materia de Violencia Doméstica pasan a formar parte del circulante de las Defensoras y Defensores que atienden materia penal.*

*Además, señala que dentro del análisis de los procesos que consideren población indígena, a parte de la cantidad de personas usuarias y cantidad de causas, debe contemplarse factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada; respetando las distancias, las condiciones de pobreza, medios de transporte, los horarios de visitas en situ, idiomas; así como, las pericias culturales.*

*Relevante resaltar que, para la atención de aquellos asuntos ordinarios de la materia de Penal y Pensión Alimentaria, en los cuales; además, forma parte del circulante activo asuntos con intervinientes de asuntos indígenas, las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí, Buenos Aires, Turrialba, Limón y Coto Brus mantiene la siguiente estructura:*

*Tabla 5 Estructura para la atención de asuntos en materia Penal y Pensión Alimentaria, de las Oficinas que atienden asuntos indígenas, a marzo de 2020*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Cantidad de recurso Defensor por materia*** | ***Penal*** | ***Pensiones alimentarias*** |
| *Bribri* | *4* | *1* |
| *Buenos Aires* | *3* | *-* |
| *Turrialba* | *5* | *1* |
| *Limón* | *12* | *3* |
| *Coto Brus* | *2* | *-* |

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por las oficinas de la Defensa Pública.*

*Haciendo la comparación de la estructura organizacional con la que contaba cada una de las oficinas mencionadas en la tabla anterior, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 y la minuta 48-PLA-MI-MNTA-2019, se infiere que la Jefatura de la Defensa Pública reforzó el personal defensor para la tramitación de asuntos penales, haciendo traslado de recursos de Defensora o Defensor Público, como fue el caso de la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires.*

*Por último, es importante aclarar que, a pesar de que en la tabla anterior se evidencie que algunas oficinas no cuentan con recursos de Defensora o Defensor Público en materia de Pensiones Alimentarias, para poder tramitar adecuadamente estos asuntos, reciben colaboración de oficinas cercanas. Tal es el caso de la Defensa Pública de Bribri, que recibe colaboración de la oficina de Limón; así como, la Defensa Pública de Buenos Aires mantiene colaboración de Pérez Zeledón*

*Para la tramitación de asuntos de Pensiones Alimentarias, la Defensa Pública de Limón le brinda colaboración a la oficina de Bribri para la representación de las personas usuarias indígenas demandadas. Así como, la Defensa Pública de Pérez Zeledón le brinda colaboración a Buenos Aires, siendo dos profesionales los que se trasladan a la oficina para poder representar a las personas usuarias indígenas ofendidas y demandas.*

*Además, la Defensa Pública de Turrialba recibe colaboración de Cartago (un día por semana) y, la Defensa Pública de Coto Brus mantiene colaboración de Corredores (un día por semana). En este último despacho, aunque no se cuente en la estructura organizacional ordinaria con una persona defensora especializada en Pensiones Alimentarias, una Defensora o Defensor Público de materia penal mantiene un recargo de Pensiones Alimentarias.*

### *Atención de asuntos con persona usuaria indígena en el Tribunal Contenciosos Administrativo*

*En consulta a los servidores judiciales del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante el correo enviado a la cuenta oficial del despacho el 03 de febrero de 2020, se indica literalmente que:*

*“(...) En este despacho se continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, aún no contamos con mejoras para determinar la cantidad de procesos de personas servidoras judiciales y en el caso de las personas indígenas, al igual que hace un año se pueden filtrar únicamente los procesos en los cuales se encuentran como parte alguna asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como se muestra en cuadro adjunto.”*

*En razón de lo anterior, se puede decir que, al 03 de febrero de 2020, los filtros con los que cuentan los sistemas informáticos del Tribunal Contencioso Administrativo no permiten determinar la cantidad de procesos donde intervenga al menos una persona usuaria indígena o una persona servidora judicial, según las recomendaciones emitidas en el informe* ***634-PLA-RH-MI-2019 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”****.*

*Seguido, se procede al análisis del archivo suministrado, entendiendo las observaciones señaladas por el personal judicial del despacho, donde se registran 257 números de expedientes atendidos por el Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras que, al cierre de enero 2019, en el informe* ***634-PLA-RH-MI-2019 “Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria)”****, se reportan 240 expedientes. Por lo que, se puede inferir que, en el año 2019 ingresaron 17 asuntos, el equivalente a 1,41 asuntos por mes.*

*Es importante aclarar que, los expedientes reportados por el Tribunal Contencioso en los cuales se incluye como parte una asociación de personas indígenas o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, contabiliza la totalidad de expedientes ingresados al Sistema de Gestión del despacho, inclusive los archivados, pasivos o los que se encuentran asignados a alguna persona servidora del despacho. Por lo anterior, para determinar el análisis de expedientes activos al 04 de febrero de 2020, se excluyen los asuntos en ubicación pasiva y, por ende, se tiene un total de 97 expedientes activos. En la siguiente tabla se muestra la segregación de expedientes activos, del Tribunal Contencioso Administrativo, figura como intervinientes una asociación de personas indígenas.*

*Tabla 6 Circulante del Tribunal Contencioso Administrativo como parte se encuentra una asociación de personas indígenas, al febrero de 2020*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parte (interviniente)*** | ***Cantidad*** |
| *Comisión Nacional de Asuntos Indígenas* | *62* |
| *Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi* | *12* |
| *Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Salitre* | *9* |
| *Asociación Indígena Huetar de Zapatón de Puriscal* | *4* |
| *Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri De Talamanca* | *3* |
| *Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Rey Curré Boruca* | *2* |
| *Asociación de Desarrollo Indígena Altos de San Antonio* | *1* |
| *Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena San Rafael De Cabagra* | *1* |
| *Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quit* | *1* |
| *Asociación de Desarrollo Integral De La Reserva Indígena Chirripó* | *1* |
| *Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba* | *1* |
| ***Total, de expedientes*** | ***97*** |

***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por el Tribunal Contencioso Administrativo.*

*En este partícular, tal como se hizo mención en líneas anteriores, únicamente se identifica la intervención de personas indígenas cuando participan en asociaciones u organizaciones; es decir, la cantidad de asuntos donde se participa como parte demandada o actora sin la representación de una asoción y/u organización presenta una limitante estadísitica en los sistemas actuales, para determinar la cantidad de asuntos Contenciosos Administrativos donde intervinen personas indígenas y así estimar la proyección de la demanda del proceso.*

*De igual manera, se puede observar en la tabla anterior que, de los 97 expedientes activos, 62 mantienen como intervinientes a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, mientras que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kelkoldi mantiene 12 expedientes activos. Las dos asociaciones mencionadas anteriormente representan el 76% de la totalidad de causas activas. Es importante mencionar que el terrorio Kelkoldi pertenece a la Cordillera de Talamanca, donde prevalece la etnia Bribri.*

*Por lo tanto, es importante destacar lo acordado sesión del Consejo Superior 43-19 del 14 de mayo del 2019, artículo XL, donde aprobó trasladar de la Secretería Técnica de Género la plaza de Defensor Público (369766) ocupada por el Lic. Jorge Sánchez Solano hacia la Defensa Pública de San José, para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial.*

### *Atención de asuntos agrarios*

*En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19, en el mismo se aprueba cambiar la condición de siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, a condición ordinarias; asumiendo además de materia agraria la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. En el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignará asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.*

*De tal manera, se considera que con la aprobación e implementación de la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, fue solventada la necesidad en materia agraria y la defensa técnica en materia contenciosa administrativa.*

*Seguidamente, se realizó un balance general de la materia agrario de los primeros tres trimestres del 2019:*

*Figura 6 Balance general de los procesos de materia agraria a nivel nacional en la Defensa Pública del primer semestre de 2019*

*Durante los primeros tres trimestres de 2019 se finalizaron 975 asuntos, de 1317 que ingresaron, logrando una efectividad de 74%, acumulando un 26% (342) en el circulante, lo que muestra un incremento en el circulante al finalizar de un 25%.*

*Seguidamente se realizó una comparación de los asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y los asuntos terminados por las Defensas Públicas en Materia Agraria a nivel nacional al tercer trimestre del 2019.*

*Figura 7 Comparativa entre asuntos terminados en los Juzgados Agrarios y las Defensas Públicas en materia Agraria, al tercer trimestre de 2019*

*Nota: En lo referente a la información de la Defensa Pública los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística y la Administración de la Defensa Pública.*

*El total de 975 asuntos terminados por la Unidad Agraria de la Defensa Pública representa un 35% del total de 2 822 asuntos terminados en los Juzgados Agrarios a nivel nacional. El restante de 1847 (65%) asuntos terminados pueden estar asociados a la representación de abogado particular; así como, causas que se presentaron ante los Juzgados Agrarios sin patrocinio letrado.*

*Por otra parte, en consulta realizada el 5 de marzo de 2019 al Lic. Mario Alberto Rosales Vargas, Coordinador a.i. de la Unidad de Agrario sobre la cuota de circulante por plaza de Defensor Público Agrario a nivel nacional, señala que una cuota máxima que puede llevar un Defensor es de 150 a 180 procesos o expedientes, dado a la complejidad de la materia, por factores cualitativos como el tiempo de traslado, visitas previas a campo, atención de poblaciones vulnerables y la atención de contrapartes.*

*El Consejo Superior del Poder Judicial, mediante el acta N° 023-2018 del 21 de marzo de 2018 en el artículo LVI, se acordó tener por rendido el informe presentado por la máster Damaris Vargas Vásquez, en calidad de Gestora del Proyecto de Implementación de la Reforma Procesal Agraria e Integrante de la Comisión de la Jurisdicción Agraria; el cual contiene el oficio N° 1284-213-AUO-2014 de Auditoría Judicial denominado “Estudio Operativo del proceso Agrario (Primera Instancia)”, donde se dispuso establecer como cuotas mínima de señalamientos a realizarse por semana, por cada persona juzgadora agraria, al menos tres audiencias en el despacho y dos fuera de la sede de éste. Esta cuota de trabajo por persona juzgadora se mantiene según el informe* ***630-PLA-RH-MI-2019******“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del Nuevo Código Procesal Agrario para el 2020”****, el cual fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2019) el 16 de mayo de 2019 y, aprobado por Corte Plena el 06 de junio de 2019 en la sesión 47-19, artículo VI. Para el informe de informe de impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Agrario para el 2021, la Dirección de Planificación mantiene la cuota de trabajo descrita anteriormente.*

*En este particular, con la finalidad de determinar la carga de trabajo por Oficina, en el siguiente cuadro se detalla el circulante y cantidad de asuntos entrados por recurso Defensor Público.*

*Tabla 7 Relación de asuntos entrados y circulante por recurso Defensor Público,*

*al tercer trimestre del 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Oficinas de la Defensa Pública*** | ***Cantidad de Recurso Defensor*** | ***Entrada al III Trimestre 2019*** | ***Entrada mensual, por Defensor*** | ***Circulante activo*** | ***Circulante*** | ***Promedio de entrada + Circulante*** |
| ***por Defensor*** |
| *Defensa Pública San José* | *2* | *23* | *3* | *74* | *37* | *45* |
| *Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Sur* | *1* | *45* | *5* | *121* | *121* | *129* |
| *Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Sur (Corredores)* | *1* | *65* | *7* | *119* | *119* | *127* |
| *Defensa Pública Buenos Aires* | *1* | *45* | *5* | *98* | *98* | *106* |
| *Defensa Pública I Circuito Judicial Alajuela* | *1* | *77* | *9* | *114* | *114* | *122* |
| *Defensa Pública III Circuito Judicial Alajuela (San Ramón)* | *1* | *148* | *16* | *139* | *139* | *147* |
| *Defensa Pública II Circuito Judicial Alajuela* | *1* | *85* | *9* | *178* | *178* | *186* |
| *Defensa Pública Upala* | *1* | *123* | *14* | *185* | *185* | *193* |
| *Defensa Pública Cartago* | *1* | *77* | *9* | *152* | *152* | *160* |
| *Defensa Pública Turrialba* | *1* | *113* | *13* | *119* | *119* | *127* |
| *Defensa Pública I Circuito Judicial Guanacaste (Liberia)* | *1* | *62* | *7* | *125* | *125* | *133* |
| *Defensa Pública Santa Cruz* | *1* | *88* | *10* | *199* | *199* | *207* |
| *Defensa Pública Puntarenas* | *1* | *87* | *10* | *175* | *175* | *183* |
| *Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Atlántica (Limón)* | *2* | *166* | *18* | *438* | *219* | *227* |
| *Defensa Pública II Circuito Judicial Zona Atlántica (Pococí)* | *1* | *113* | *13* | *218* | *218* | *226* |
| *Total* | *17* | *1317* |  | *2454* |  |  |
| ***Promedio Nacional*** | ***-*** | ***-*** | ***8*** | ***-*** | ***129*** | ***-*** |

*Nota: Los datos del primer y segundo trimestre fueron facilitados por el Subproceso de Estadística, en lo que respecta al tercer trimestre son datos preliminares facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Fuente: Elaboración propia, con datos suministrados por el Subproceso de Estadística.*

*En análisis de los datos proyectados de la Defensa Pública en materia Agraria, se estima una entrada promedio de 8 asuntos por recurso Defensor Público a nivel nacional; así como, un circulante promedio de 129 asuntos por cada plaza de Defensor.*

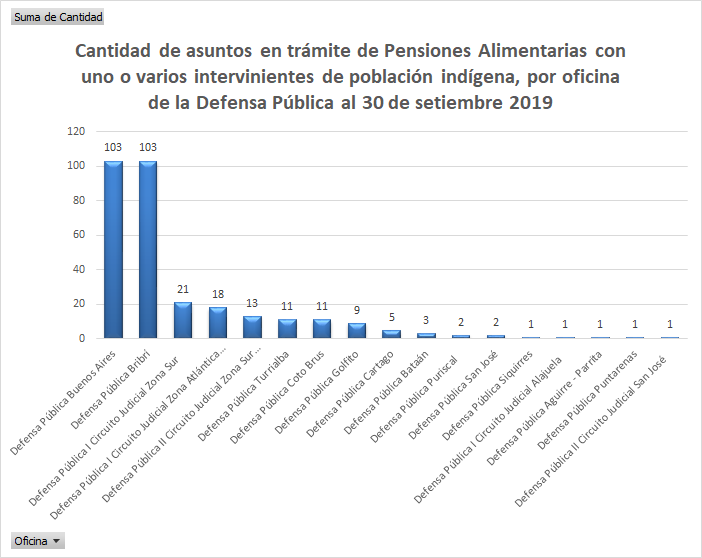
*De considerar la entrada promedio de 8 asuntos a nivel nacional más el circulante por cada plaza a diciembre de 2018, se estima un circulante proyectado de aproximadamente 137 asuntos por cada recurso Defensor Público; estando por debajo en 43 procesos (24%) de la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por cada plaza de Defensora o Defensor Público.*

***En consideración de la carga de trabajo de los recursos defensores a nivel nacional, se estima conveniente mantener la recomendación planteada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 donde se establece que las plazas de Agrario asuman como carga ordinaria aquellos asuntos en materia Contenciosa Administrativa donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Tal y como lo recomendó la Dirección de la Defensa Pública.***

### *Atención de asuntos de Pensión Alimentaria*

*Con el fin de establecer las Defensa Públicas del país con mayor afluencia de personas indígenas en materia de pensiones alimentarias, se adjunta el siguiente gráfico:*

*Figura 8 Cantidad de asuntos en trámite de Pensiones Alimentarias con uno o varios intervinientes de población indígena, por ofídica de la Defensa Pública al 30 de setiembre de 2019*



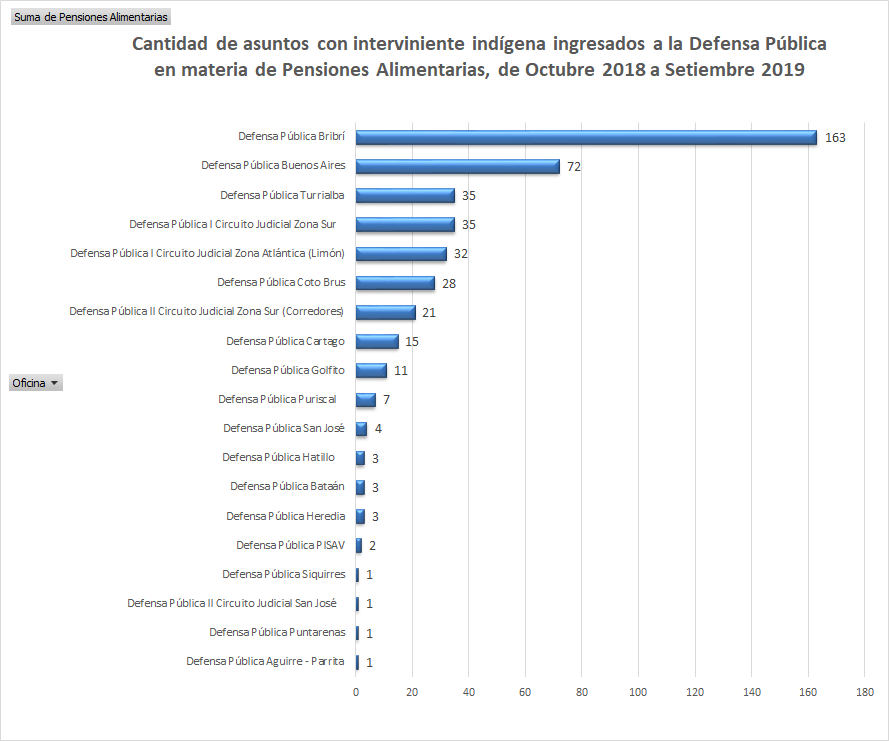
***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Al tercer trimestre del 2019 existían 306 asuntos en trámite en la Defensa Pública, en los que figuraba una o varias personas pertenecientes a poblaciones indígenas, del total de asuntos un 68% esta centralizado en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, con un 34% cada una; seguidos de Pérez Zeledón con un 7% y Limón con un 6%.*

*De tal modo, es posible determinar que los asuntos en trámite en Bribri y Buenos Aires de forma separada, superan en un 80% a los casos en trámite en la Defensa Pública con el tercer lugar, en materia de Pensiones Alimentarias.*

*Por otro lado, tomando como insumo lo establecido en la tabla 1 del presente informe, donde se determinó que la relación de asuntos entrados e intervinientes en Pensiones Alimentarias es de uno a uno; seguidamente, se procede a analizar los asuntos en trámite por cantidad de personas indígenas.*

*Figura 9 Cantidad de asuntos con interviniente persona usuaria indígena ingresados en materia de Pensiones Alimentarias, de octubre 2018 a setiembre 2019*



***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*Del gráfico anterior, se señalan las siguientes conclusiones como principales:*

* *De las 19 defensas públicas en las que ingresaron asuntos con intervinientes indígenas, se vislumbra que el 83% de los asuntos ingresan en 6 oficinas, encabezadas por Bribri con 163 (37%) asuntos y Buenos Aires con 72 (16%), luego Turrialba y Pérez Zeledón con 35 (8%) cada una; y finalmente, Limón con 32 (7%) y Coto Brus con 28 (6%) asuntos. El restante 17% de los asuntos ingresados está distribuido en las otras 13 oficinas.*
* *En Bribri ingresaron más del doble de asuntos que en Buenos Aires y más del cuádruple de asuntos que en Turrialba y Pérez Zeledón.*
* *En Buenos Aires se atendieron el doble de asuntos que en las oficinas de Turrialba y Pérez Zeledón.*
* *Los datos estadísticos de la Defensa Pública poseen una concordancia lógica con la información tomada del INEC, en relación a la densidad de población indígena según territorio.*

*Por otro lado, anteriormente se le consultó a la Licda. Sandra Mora Venegas, Supervisora en Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública, sobre la estructura funcional para la atención de pensiones alimentarias de las oficinas de Bribri y Buenos Aires, manifestando:*

### *Defensa Pública de Buenos Aires:*

*Una plaza de Defensor Público de la Oficina de Pérez Zeledón, se desplaza los martes y miércoles a la zona de Buenos Aires, para atender los asuntos en materia de Pensión Alimentaria. El tiempo de traslado de ida y regreso entre una Oficina a otra es de aproximadamente de dos horas.*

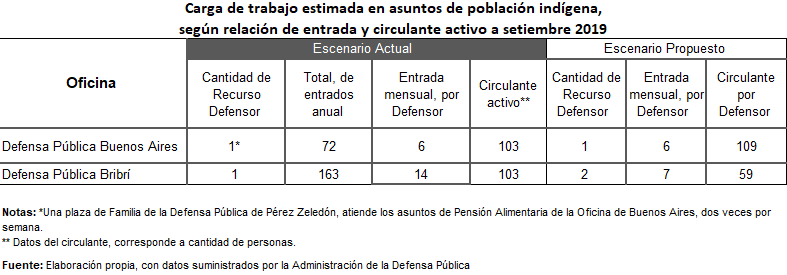
### *Defensa Pública de Bribrí*

*Cuenta con una plaza de Defensor Público para la atención de Pensiones Alimentarias. En los casos donde figure una persona indígena como parte demandada, son atendidos por una plaza de Defensor Público de Limón los miércoles de cada semana.*

*Aunado a lo anterior, es relevante resaltar que la Defensa Pública de Limón, a parte de la colaboración facilitada a Bribrí; además, colabora con un recurso de Defensor Público cada 15 días para asistir el Valle de la Estrella, y con otro recurso se apoya en la toma de demanda de la Defensa Pública de Matina los lunes de cada semana.*

*Seguidamente se adjunta un cuadro donde se analiza la carga ordinaria de trabajo según los asuntos en trámite y entrados en relación con la cantidad de recurso defensor que hay actualmente en las oficinas de Buenos Aires y Bribri (ver apéndice 2), así como, el escenario aprobado por el Consejo Superior propuesto en el informe 634-PLA-RH-MI-2019.*

*Tabla 8 Carga de trabajo estimada en asuntos de población indígena, según relación de entrada de octubre 2018 a setiembre 2019 (12 meses) y el circulante activo al cierre de setiembre 2019*



***Fuente:*** *Subproceso de Modernización Institucional, de la Dirección de Planificación con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.*

*En virtud del cuadro anterior, se proyecta que en el escenario propuesto el circulante mensual por persona defensora en Buenos Aires rondará los 109 asunto, donde 103 asuntos corresponderán el circulante y alrededor de 6 asuntos ingresarían mensualmente. En el caso de Bribri, se estima que el circulante mensual por persona defensora será de 59 asuntos, de los cuales 52 corresponderán a circulante y 7 a la entrada mensual.*

*Ahora bien, según los datos estadísticos del primer semestre del 2019, es importante destacar que la plaza de persona defensora en Bribri para atención de materia de Pensiones Alimentarias posee un promedio mensual de casos entrados totales de 30 asuntos y la plaza de que da apoyo en Buenos Aires tiene una entrada mensual promedio total de 19 asuntos.*

*En consecuencia, resulta importante resaltar y mantener los aspectos planteados en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, en lo que respecta a la estructura funcional que deberán seguir para un máximo aprovechamiento del recurso:*

* *Que la Jefatura de la Defensa Pública mantenga la colaboración que presta actualmente por medio una plaza de Defensor Público proveniente de la Oficina de Pérez Zeledón para la atención de intereses contrapuestos en Buenos Aires. La Defensa Pública de Bribri, en caso de aprobarse el contenido presupuestario contará con dos plazas de Pensión Alimentaria, tendrá la capacidad de atender los asuntos de intereses contrapuestos; de manera que la plaza de la Defensa Pública de Limón, que brinda la colaboración los miércoles de cada semana, se podrá avocar a asuntos propios de la Oficina de Limón.*

*En razón a lo expuesto, y en consideración de factores cualitativos tales como, la calidad de atención a partir de un acceso de justicia efectivo, y reconocer las necesidades de atención diferenciada, se propone establecer una plaza de Defensor Público con la modalidad a tiempo completo, el cual se estima que tendrá una entrada mensual de 7 asuntos de Pensión Alimentaria; además, deberá asumir la competencia de asuntos en materia de Familia.*

* *En el caso de que la carga de trabajo este por debajo de su capacidad instalada, para las personas defensoras públicas asignadas a la atención de pensión Alimentaria de las Oficinas de Bribrí y Buenos Aires, se le asignen asuntos de materia Penal; siempre, en el entendido de que será predomina este la atención de asuntos de Pensión Alimentaria.*
* *Mantener la dinámica planteada por la Dirección de la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, donde los asuntos en materia de Familia forman parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Pensiones Alimentarias, y en materia de Violencia Doméstica pasan hacer parte del circulante de la Unidad de la Defensa Pública que atiende Penal.*
* *Por otro lado, en lo referente a materia contravencional, según los datos estadísticos suministrados por la Defensa Pública, en la oficina de Bribri al 30 de setiembre de 2019 existían 3 asuntos que contaban con intervinientes indígenas, lo que representa un 1% del circulante (276) que poseía el Juzgado Contravencional de Bribri al finalizar el tercer trimestre de 2019. En lo referente a la oficina de la Defensa Pública de Buenos Aires el circulante correspondía a 43 asuntos, lo que representa un 7% en relación con el circulante (650) que posee el Juzgado Contravencional de Buenos Aires al 30 de setiembre de 2019.*

*Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.*

## *Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación*

*En sesión del Consejo Superior 44-19 artículo II, se aprobó el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación referente al impacto de la entrada en vigencia de la ley 9593 de acceso a la justicia a pueblos indígenas, posteriormente la Corte Plena en sesión 47-19 (Presupuesto 2020), celebrada el 23 de mayo de 2019 aprueba la comunicación del informe 102-CSP-19 y remite a la Dirección de Gestión Humana el acuerdo tomado donde se aprueba cambiar a condición ordinaria siete plazas extraordinarias de Defensora o Defensor Público que mantiene asignada la Unidad Agraria de la Defensa Pública.*

*Además, mediante la minuta 29-PLA-MNTA-2020 del 03 de febrero del 2020, la Sub Jefatura de la Defensa Pública expone dichas plazas de Defensora o Defensor Público se encuentran condición ordinaria a partir del presente año.*

*Por otro lado, de acuerdo con la consulta realizada al Tribunal Contencioso Administrativo, en el correo electrónico enviado el 03 de febrero de 2020; se menciona que el despacho continúa trabajando con los filtros que se indican en el Sistema de Gestión, por lo que se tiene la limitación para diferenciar los asuntos con interviniente persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Los asuntos que se pueden diferenciar y, por ende, filtrar, son los que mantienen como interviniente una asociación indígena o la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.*

*Aunado al párrafo anterior, se consulta al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, mediante el correo enviado el 03 de febrero de 2020, sí se ha incorporado una fórmula para contabilizar los procesos judiciales que mantengan como interviniente una persona usuaria indígena o persona servidora judicial. Es así que, el 04 de febrero de 2020, el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación indica que ha sido incorporado dentro de las bases de datos la variable “etnia” y que, para los Anuarios Judiciales del 2019, se visualizará dicha variable en los cuadros estadísticos. Adicionalmente, se consulta vía telefónica, y la identificación de los asuntos que donde una persona judicial esté en condición de interviniente, a la fecha no ha sido implementada.*

*Con respecto a la implementación del Sistema de Seguimiento de Casos (SSC) en materia agraria en la Defensa Pública, se consultó al Lic. Roberto Montero García, quién se encontraba al día 10 de febrero de 2020 como responsable de la implementación del SSC en la Defensa Pública, quien indica que la Dirección de Tecnología de la Información se encuentra realizando los ajustes indicados por el Lic. Mario Rosales Vargas, Coordinador de Agrario, de manera que el sistema se adecúe a la materia en gestión. Una vez que los ajustes se encuentren realizados y aprobados por el Lic. Rosales Vargas, se procederá con la implementación a nivel nacional.*

* ***Recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información***

*En lo referente a las recomendaciones emitidas por en el informe 634-PLA-RH-MI-2020 hacia la Dirección de Tecnología de Información se plantearon las siguientes:*

* *Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.*
* *Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.*

*En consecuencia, se efectuó una consulta el 3 de febrero de 2020 al Juzgado y al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el fin de conocer si dicha recomendación había sido implementada en los sistemas, a lo que se recibió una respuesta negativa.*

*Posteriormente, el 27 de marzo de 2020, se consultó al Lic. Uriel García Regalado, Profesional Informático de la Dirección de Tecnología de Información sobre el estado de las dos recomendaciones, a lo que manifestó que el Consejo Superior en mediante oficio 13919-17 acordó lo siguiente:*

*“(…) autorizar la suspensión del desarrollo de nuevas solicitudes de mejoras para los sistemas actuales utilizados para la gestión y tramitación de expedientes y oficinas judiciales.”*

*Lo anterior debido a que todos los esfuerzos se están centrando en el desarrollo de la nueva plataforma informática que está desarrollando la Dirección de Tecnología de Información.*

*Por último, se remitió un correo electrónico a la Dirección de Tecnología de Información para conocer el estado actual de las mismas, sin embargo, no se recibió respuesta al momento de remitir el informe.*

* ***Recomendaciones a la Jefatura de la Defensa Pública:***

*Mediante el oficio JEFDEP-90-2020 (ver anexo 6) del 13 de febrero de 2020 la Jefatura de la Defensa Pública remitió el seguimiento que ha realizado, en lo referente a las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:*

*“(…)*

* 1. ***Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.***

*La ley 9609 “Código Procesal Agrario” no ha entrado en vigencia aún. Sin embargo, actualmente las 16 plazas de personas defensoras públicas agrarias tienen un promedio de 158 procesos, con una cantidad mayor de intervinientes.*

*La Defensa Pública reporta aproximadamente 2528 expedientes, mientras que los Juzgados Agrarios reportan, al cierre de enero 2020, un total de 6987 expedientes, lo que da a entender que se mantiene un alto índice de defensa privada.   
  
El promedio de 158 expedientes por Defensor(a) está por debajo de la cuota establecida por el coordinador de la DP, que es de 180.*

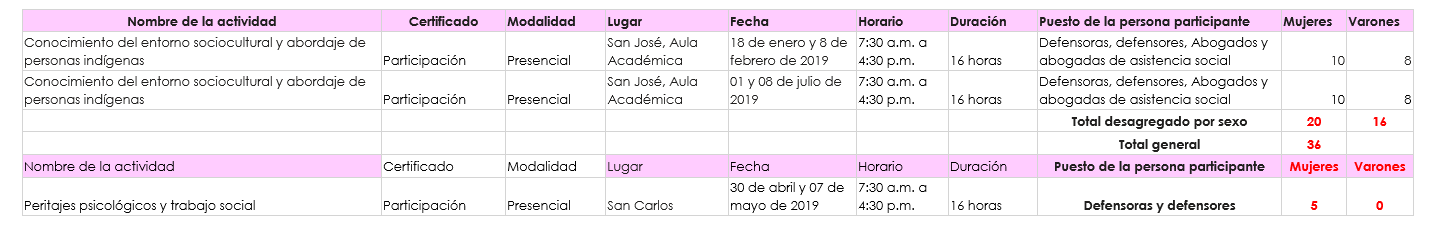
* 1. ***Asignar asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensiones Alimentarias que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos, esto en caso de que la carga de trabajo no alcance. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.***

*No se ha asignado ninguna plaza de pensiones alimentarias en Buenos Aires y Bribri según los términos referidos en este informe.*

* 1. ***Comunicar bajo una circular interna de la Dirección de la Defensa Pública a las distintas Oficinas, la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.***

*Desde agosto de 2019 se socializó con todas las Defensas Públicas a nivel nacional la “Fórmula Ley 9593 de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas”, a fin de visibilizar los procesos que ingresen con personas indígenas en materias no tradicionales. En el mes de febrero de 2020, se le realizó un adendum que incluye una plantilla para anotar datos como número de expediente, fecha de entrada, estado del proceso, etc. (Se adjunta la fórmula.)*

* 1. ***Coordinar la respectiva capacitación a las personas defensoras públicas de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.***

*Según la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública en el año 2019 se impartieron las siguientes capacitaciones: “*

*Asimismo, se impartieron una* ***serie de videoconferencias****, como parte del ciclo 1 y se registró los siguientes datos:*

*Total, de personas participantes: 28*

*Mujeres: 21*

*Hombres:7*

*Fecha: 27 de marzo*

*Además, en materia contenciosa tuvimos una capacitación el 21 de marzo de 2019 con don Roberto Montero.  Y una serie de charlas los días 15, 22 y 29 de noviembre por parte de los jueces contenciosos administrativos.*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 21 de marzo 2019*

*Total, de personas participantes: 22*

*Mujeres: 10*

*Hombres: 12*

*Actividad formativa: Contencioso administrativo*

*Fecha: 15, 22 y 29 de noviembre de 2019*

*Total, de personas participantes: 6*

*Mujeres: 1*

*Hombres: 5”*

* ***Recomendaciones a la Dirección de Gestión Humana:***

*Mediante correo electrónico del 3 de febrero de 2020, se le solicitó a la Dirección de Gestión Humana, información referente al que trabajo que se ha realizado para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación; sin embargo, al 27 de marzo de 2020 no se recibió respuesta al respecto, por lo tanto, se considera necesario mantener las mismas recomendaciones del informe 634-PLA-RH-MI-2019:*

*(…)*

* 1. *Realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública.*
  2. *Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita…, Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.*
  3. *Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:*
* *Disposición para realizar las diligencias in situ*
* *Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)*
* *Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.*

*6.11 Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.”*

## *Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal en la Defensa Pública*

*La Corte Plena en la sesión 37-12 del 29 de octubre de 2012, artículo VIII, solicitó definir el modelo de gestión de despachos, posteriormente, en la sesión 15-16 del 16 de mayo de 2016, artículo XVII, aprobó el informe 259-66-SAO-2016 de la Auditoría Judicial relacionada al “Estudio Operativo de los Tribunales Penales.”*

*En consecuencia, en sesión del Consejo Superior 5-2019, artículo XXII del 23 de enero de 2019, se tuvo por rendido el informe 1507-PLA-MI-2018, relacionado con el “Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”.*

*Este modelo de tramitación establece una serie de parámetros generales de las características de las oficinas de la Defensa Pública, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta para brindar un servicio público de calidad e incrementar la cantidad de debates con la participación de los ámbitos auxiliares de justicia. La metodología aprobada establece dentro de la fase de diseño de propuestas de mejora, la posibilidad de elaborar rediseños de oficinas con el fin de maximizar la utilización de los recursos disponibles.*

*En consecuencia, se estima conveniente que dentro de los alcances del modelo y en los casos que técnicamente corresponda, se tome en consideración la posibilidad de movilizar plazas de personas defensoras, para solventar las necesidades institucionales de atención a personas indígenas, en virtud del impacto organizacional y presupuestario en la Defensa Pública, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.*

### *Oficinas de la Defensa Pública abordadas en el Proyecto Modelo Integral del Proceso Penal*

*Desde el año 2019, la Dirección de Planificación se ha mantenido haciendo abordajes en materia penal en las diferentes oficinas de la Defensa Pública y, según el apartado del presente informe denominado “Aspectos demográficos a considerar”, las oficinas abordadas en el proyecto que son cercanas a las zonas de mayor cantidad de personas usuarias indígenas son la Defensa Pública de Limón y Bribrí.*

*Producto del abordaje de la Defensa Pública se Bribri se infiere que, con base en el análisis estadístico, la demanda en la cantidad de asuntos nuevos o ingresados de la oficina tiende al crecimiento y, que la carga de trabajo reportada por persona defensora se encuentra por encima de la carga definida en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública; además, de que hay que considerar que el 24% de los asuntos activos en estado en trámite presentan al menos una persona usuaria indígena en calidad de interviniente y por tal, se deben considerar aspectos cualitativos en la atención de esta población para obtener un servicio público de calidad. En consecuencia, se estableció la necesidad de contar con un recurso adicional de Persona Defensora que colabore en materia penal, lo anterior supeditado a las limitaciones presupuestarias.*

*Aunado a lo anterior, también se realizó el abordaje en la Defensa Pública de Limón, donde se determina, por medio del análisis estadístico, que la demanda en la cantidad de asuntos nuevos en materia penal ordinaria se la mantenido aproximadamente constante en el tiempo y, que la carga de trabajo reportada por cada persona defensora en materia penal ordinario se encuentra dentro de los parámetros definidos en el Modelo de Tramitación de la Defensa Pública. Adicionalmente, por cargas de trabajo reportadas por las Técnicas o Técnicos Jurídicos se considera que, de encontrarse las condiciones idóneas, se podría recalificar una de esas plazas a Defensora o Defensor Público y así, atender las necesidades de la zona. No obstante, esta propuesta está sujeta a las aprobaciones correspondientes.*

*Además, es importante hacer recalcar que, la Dirección de Planificación durante el 2019 realizó el abordaje en las oficinas de la Defensa Pública de Flagrancia del Primer y Segundo circuito Judicial, donde, con base en el análisis de cargas de trabajo y la capacidad del proceso expedito de Flagrancia, se podría eventualmente trasladar recursos de Defensora o Defensor Pública donde se considere exista mayor necesidad del mismo. Sin embargo, esta recomendación se encuentra sujeta a la aprobación de los Modelos de Flagrancia, tanto en el Ambiento Auxiliar de Justicia, como en el Ámbito Jurisdiccional.*

*Por lo anterior, se evidencia que producto de los abordajes de la Dirección de Planificación se han brindado alternativas para solventar las necesidades instituciones, en las zonas del país que más lo requieren. Sin embargo, estas alternativas de solución se encuentran sujetas a la aprobación de los informes respectivos y actualmente son objeto de seguimiento.*

# *Contenido presupuestario*

*En el siguiente cuadro, se detalla el costo estimado de las dos plazas extraordinarias de Defensor Público, las cuales asumirán como parte de la carga de trabajo ordinaria la atención de los asuntos de Pensión Alimentaria donde figure como parte actora o demanda una o más personas indígenas. Además, se estima el costo estimado del mobiliario y equipo a asignar a las plazas en mención.*

*Tabla 9 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Despacho*** | ***Cantidad*** | ***Tipo de plaza*** | ***Condición actual*** | ***Recomendación*** | ***Período*** | ***Costo Estimado*** |
| *Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública* | *2* | *Defensor Público* | *-* | *Extraordinaria* | *12 meses* | *₡105.734.000* |
|  | | | | | | *₡3.356.545,00* |
|  | | | | | | ***₡109.090.545,00*** |

***Nota (1):*** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

***Nota (2):*** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

***Fuente:*** *Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación*

*En relación a los recursos que se requieren para completar la cobertura a nivel nacional de la materia de pensiones se ratifica la necesidad, sin embargo, esta deberá constar como parte de la extensión del servicio en pensiones y no en el impacto de este estudio que nos ocupa.*

# *Elementos resolutivos*

* *Según los datos demográficos, la competencia territorial, los asuntos en trámite y asuntos ingresados y terminados por materia, se determinó que, en razón del análisis de las cargas de trabajo de las diferentes oficinas de la Defensa Pública que tramitan asuntos con personas usuarias indígenas, se deben reforzar de manera prioritaria las oficinas de Bribri y Buenos Aires, específicamente en la materia pensión alimentaria. Es importante ratificar que, con base en el criterio de la Dirección de Planificación en el informe 634-PLA-RH-MI-2019 del análisis presupuestario del 2020 a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se identifica la necesidad de recurso defensor en estas dos oficinas y, continúa siendo la necesidad para el periodo presupuestario 2021.*

*Lo anterior sustentado en que para el 2018 el 85% del circulante activo en Pensiones Alimentarias con interviniente indígena se encontraba en las oficinas de Bribri y Buenos Aires, y para el tercer trimestre del 2019 este dato corresponde a un 70% distribuido en 36% para Bribri y 34% para Buenos Aires, mostrando que si bien es cierto el porcentaje disminuyó contra el año anterior, la tendencia es la misma; ya que, el restante 30% del circulante se diluye entre 15 oficinas.*

* *En lo referente a la atención de materia Agraria y Contenciosa Administrativa, el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 44-19 (Presupuesto 2020) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó que a partir del año 2020 las siete plazas de recurso defensor que se encontraban extraordinarias para la atención de materia agraria, pasaron a condición ordinarias; asumiendo la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas. Aunado a lo anterior, en el análisis de cargas de trabajo del presente informe se determina que, el circulante de las plazas de Defensora o Defensor Público en materia Agraria a nivel nacional se encuentra en 115 procesos o expedientes, estando este promedio nacional 65 asuntos por debajo de la cuota establecida por la Coordinación en Materia Agraria de la Defensa Pública, lo equivalente a un 36% menos; debido a que la cuota establecida de 180 asuntos de circulante por persona defensora. Por lo anterior y por la competencia de estas plazas, se considera que continúan manteniendo la capacidad para dentro de su carga de trabajo ordinaria asuman aquellos asuntos en Materia Contenciosa Administrativa, donde figure como parte actora o demandada una o más personas usuarias indígenas. Importante aclarar que, en el caso de aquellas plazas, donde la carga de trabajo no alcance la cuota establecida, se le asignarán asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.*
* *A pesar de que, en consulta al personal del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, aún no se cuente con el identificador de personas servidoras judiciales en calidad de intervinientes dentro de las bases de datos, lo cual resulta que materialmente sea imposible la proyección de la demanda del servicio profesional para ejercer la defensa técnica en los casos que lo ameriten; se considera que estos procesos o asuntos pueden ser asumidos por las Defensoras y Defensores Públicos que asumen los asuntos Contenciosos Administrativos donde intervienen personas usuarias indígenas, de manera que los asuntos con servidores judiciales en calidad de intervinientes contribuyan para completar la carga de trabajo establecida para este personal defensor.*
* *Resultado del análisis estadístico de los asuntos en materia de Pensiones Alimentarias donde se tiene en calidad de interviniente una persona indígena se concluye que, el 81% de la carga de trabajo a nivel nacional se concentra en las Defensas Públicas de Bribri, Buenos Aires, Pérez Zeledón y Limón, recordando que las últimas dos oficinas brindan apoyo a las dos primeras, donde se encuentra la mayor concentración de asuntos en esta materia. En razón de lo anterior y, tomando en consideración factores cualitativos que permitan brindar un acceso a la justicia efectivo y de atención diferenciada a la población indígena de nuestro país se reitera la necesidad de la incorporación de dos plazas de Defensora o Defensor Público (una en cada oficina), para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria dónde figure como parte actora o demandada una persona indígena.*
* *El proyecto de mejora de mejora integral del proceso penal en las defensas públicas tiene la posibilidad de realizar movilizaciones de personal cuando es técnicamente viable; por lo tanto, según las prioridades institucionales, se deberá considerar el cumplimiento de la ley 9593 de Acceso a la Justicia a la población indígena.*

# *Recomendaciones*

## *Escenarios para suplir las necesidades de personal defensor*

*En razón de las limitaciones presupuestarias, mencionadas en el apartado de antecedentes del presente informe, se plantean dos escenarios para el cumplimiento de la necesidad de personal para el efectivo acceso a la justicia a las personas usuarias indígenas.*

### *Escenario 1: Inclusión de plazas dentro del presupuesto 2021*

*Incluir dentro del presupuesto 2021, dos plazas de Defensora o Defensor Público para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria, con el fin de dar sostenibilidad al plan de trabajo propuesto en este informe; dado a que, al reforzar la estructura del recurso humano de la Defensa Pública de Bribri y la Defensa Pública de Buenos Aires, se estaría en la capacidad para asumir la atención ordinaria de asuntos donde figure como parte actora o demanda una o más personas usuarias indígenas.*

*Tabla 10 Estimación del costo estimado para el 2021, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Despacho*** | ***Cantidad*** | ***Tipo de plaza*** | ***Condición actual*** | ***Recomendación*** | ***Período*** | ***Costo Estimado*** |
| *Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública* | *2* | *Defensor Público* | *-* | *Extraordinaria* | *12 meses* | *₡105.734.000* |
|  | | | | | | *₡3.356.545,00* |
|  | | | | | | ***₡109.090.545,00*** |

***Nota (1):*** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2021 es de ₡52.867.000*

***Nota (2):*** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2021 es de ₡1.678.273*

***Fuente:*** *Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación*

### *Escenario 2: Reubicación de personal defensor*

*Como se menciona en el presente informe, la Dirección de Planificación se encuentra desarrollando el Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal”, donde se considera que, en los casos en que el criterio de este ente técnico lo indique, se podrá plantear la posibilidad de movilizar plazas de Defensora o Defensor Público, con el propósito de suplir la necesidad de personal para la atención de personas usuarias indígenas en la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.*

*Importante aclarar que, si bien este escenario no tiene impacto directo en el presupuesto de la institución, se dependerá del cronograma del Proyecto “Mejora Integral del Proceso Penal” y, por ende, se imposibilita determinar el momento en que se podrá suplir las necesidades detectadas en el presente informe.*

*Recomendaciones generales*

### *A la Jefatura de la Defensa Pública*

* *Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.*
* *En caso de que se asignen las plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, asignar complementariamente asuntos de materia Penal, a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.*
* *Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.*
* *Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.*

### *A la Dirección de Gestión Humana*

*Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:*

* *Realizar la valoración del perfil de la plaza ordinaria de Defensor Público, proveniente de la Secretaría Técnica de Género y de Acceso a la Justicia, en caso de que se apruebe el que asuma las funciones encomendadas en la atención de asuntos de Asuntos Agrarios y Contencioso Administrativo, donde figure como intervinientes personas indígenas y servidores judiciales; además, de la atención de asuntos ordinarios que así disponga la Dirección de la Defensa Pública.*
* *Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia* ***proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)****”****.*** *Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.*
* *Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:*
* *Disposición para realizar las diligencias in situ*
* *Utilizar diferentes medios de transporte (caballo, camión, bote, panga, etc.)*
* *Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.*
* *Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.*

### *A la Dirección de la Dirección de la Tecnología de la Información y Comunicación*

*Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:*

* *Establecer una mejora a nivel del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, Gestión en línea, CEREDOC, Escritorio Virtual y Sistema de Seguimiento de Casos, de forma tal que desde el Juzgado y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; así como, para el resto de las materias, se permita identificar la cantidad de asuntos donde figuran como intervinientes personas servidoras judiciales e indígenas, sea como Asociación Integral de Desarrollo, o como persona física.*
* *Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios.*

### *A la Dirección de la Planificación*

*Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 634-PLA-RH-MI-2019:*

*Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio. Apéndices y Anexos.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Apéndice*** | ***Nombre*** | ***Documento*** |
| ***Apéndice 1*** | *Memoria de cálculo: Distribución porcentual de posible atención de persona indígena, según territorios y ubicaciones de la Defensas Públicas del país* |  |
| ***Apéndice 2*** | *Memoria de cálculo: Análisis estadístico* |  |
| ***Apéndice 3*** | *Memoria de cálculo: Asuntos del Tribunal Contencioso Administrativo* |  |
| ***Anexo 1*** | *Consulta del estado de la implementación del SSC en materia agraria* |  |
| ***Anexo 2*** | *Consulta de las capacitaciones brindadas para la tramitación de asuntos con personas indígenas* |  |
| ***Anexo 3*** | *Consulta al Tribunal Contencioso Administrativo* |  |
| ***Anexo 4*** | *Consulta a la Dirección de Gestión Humana* |  |
| ***Anexo 5*** | *Cálculo de los costos presupuestarios* |  |
| ***Anexo 6*** | *Oficio de la Jefatura de la Defensa Pública* |  |
| ***Anexo 7*** | *Correo de consulta a la Dirección de Gestión Humana* |  |
| ***Anexo 8*** | *Datos Estadísticos facilitados por la Administración de la Defensa Pública* |  |

**SE ACUERDA:** Se toma nota del Oficio N° 507-PLA-RH-MI-2020 de 30 de marzo de 2020, remitido por la Dirección de Planificación a la Unidad de Acceso a la Justicia, en el que confirió el plazo de 8 días naturales para que se emita pronunciamiento sobre el Oficio 10880-18, donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 2 de octubre del 2018, artículo LXVI, e informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa del Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con el Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas. El oficio se hizo de conocimiento de las personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas el 1 de abril de 2020, con el objetivo de que emitieran pronunciamiento a la Dirección de Planificación dentro del plazo de 8 días naturales concedido sobre las observaciones que eventualmente se tengan. Se declara firme este acuerdo por unanimidad y se dispone su comunicación a las personas integrantes de la Subcomisión para lo de su cargo. -

**ARTICULO XVIII**

La Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, en Oficio DVV-S1-018-2020 solicitó a la Dirección de la Escuela Judicial y al Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Judicial un informe de avance en el cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado y la Circular 188-19 de Corte Plena.

La Escuela Judicial en Oficio EJ-DIR-026-2020 de 27 de febrero de 2020 informó:

*Señora*

*Damaris Vargas Vásquez*

*Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas*

*Magistrada Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia*

*Poder Judicial*

***Asunto:******Respuesta a oficio DVV-S1-018-2020 y otros, sobre capacitaciones***

***en materia de Acceso a la Justicia para pueblos indígenas****.*

*Estimada señora:*

*Reciba un cordial saludo.*

*En respuesta a su oficio número* ***DVV-S1-018-2020****, de fecha 26 de febrero del presente año, en el que se solicita que la Escuela Judicial brinde un informe de avance del cumplimiento de la Circular 188-19, denominada “20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”.*

*Además, de los oficios* ***N°. CACC-290-2019****, del 19 de septiembre de 2019; N°.* ***CACC-358-2019****, del 21 de octubre de 2019; N°.* ***CACC-359-2019****, del 21 de octubre de 2019; N°.* ***CACC-36-2020****, del 22 de enero de 2020; N°.* ***5991-19****, del 14 de junio de 2019, en donde se transcribe el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N°. 20-19 del 27 de mayo del 2019, ARTÍCULO XIX; N°.* ***6418-19****, del 26 de junio de 2019, en que se transcribe el acuerdo tomado por la Corte Plena, en la sesión N°. 25-19 del 24 de junio del año 2019, ARTÍCULO II.*

*Con respecto a los anteriores, se adjunta el informe número* ***EJ-INF- 001-2020*** *de la Escuela Judicial, junto con tres documentos anexos. Recalcamos el compromiso adquirido por la Escuela Judicial en cuanto a las capacitaciones en el tema de Acceso a la Justicia para pueblos indígenas.*

*Sin otro particular,*

***Licda. Rebeca Guardia Morales***

*Directora a.i., Escuela Judicial*

*C. -Máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora, Unidad de Acceso a la Justicia.*

*-Mag. William Molinari Vílchez, presidente del Consejo Directivo de la Escuela Judicial.*

*-Consejo Superior del Poder Judicial.*

*-Arch. Consec.*

*fam*

***Se adjuntan los archivos pertinentes. ANEXOS.***



***RESPUESTA A LOS OFICIOS CACC-290-2019, CACC-358-2019, CACC-36-2020:***

***EJ-INF-001-2020***

***27 de febrero de 2020***

***Informe de avance en cuanto a capacitaciones en el tema de***

***Acceso a la Justicia de pueblos indígenas.***

*En razón de la Circular del Consejo Superior número 188-19, denominada “20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”, la Escuela Judicial rinde el siguiente informe de avance en cuanto al plan de capacitación en el tema de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas:*

1. ***Programa de Formación Continua (PEC), Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.***

*En la sesión Nº 016-2019, del 23 de agosto del 2019, el Consejo Directivo de la Escuela Judicial tomó el acuerdo de que la capacitación para el año 2020 a través del Programa de Formación Continua en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, será destinada a atender las necesidades institucionales de capacitación en materia de Pueblos Indígenas.*

*Por esta razón, desde el año 2019 se ha coordinado con dicha Universidad la elaboración de un nuevo Programa de Especialización, que se impartirá en el año 2020. Por parte de la Escuela Judicial se solicitó la inclusión de los temas de interés propuestos por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, así como la verificación de que en los contenidos de los diseños de las actividades académicas se incluyan los aspectos contemplados en el eje de acción número 10. La propuesta de este programa será presentada por dicha Universidad a la Escuela Judicial aproximadamente a mediados del mes de marzo del 2020. Y el inicio de su ejecución se encuentra programado aproximadamente para el mes de setiembre del 2020, en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica.*

1. ***Plan anual permanente de capacitación (art.10 de la Ley de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas).***

***1. Curso virtual auto formativo.***

*A fin de cumplir con el objetivo de incorporar en la currícula de la Escuela Judicial, un plan anual permanente de capacitación, tal y como lo dispone el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas, se ha proyectado para el año 2020 la elaboración de un curso virtual de autoformación dirigido a las personas funcionarias judiciales. Para el diseño de este curso contamos con la colaboración de personas especialistas en contenido, que de igual forma lo revisarán periódicamente a fin de mantener actualizada la información que allí se proporciona. Por su parte, la propuesta metodológica del curso estará a cargo de la Escuela Judicial. El mismo se construirá en la plataforma de cursos virtuales de nuestra institución, y su ejecución iniciará en cuanto se encuentre elaborado.*

***2. Taller de inducción al tema de Acceso a la justicia de pueblos indígenas.***

*La Escuela Judicial trabaja en la elaboración de un taller presencial de inducción al tema de Acceso a la justicia de pueblos indígenas, con el fin de capacitar a poblaciones que requieren conocimientos inmediatos en el tema, tales como las personas que laboran en los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica, las personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas (de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la justicia de pueblos indígenas), y la población indígena en sí, especialmente la población indígena Malecu que ha solicitado expresamente su capacitación, mediante su representante, el señor Emigdio Cruz, y para lo cual se requerirá de la colaboración de las mismas personas traductoras e intérpretes.*

*Para esta labor, se cuenta con la lista oficial de personas traductoras e intérpretes, que asciende a la suma de 56 personas.*

*En cuanto a la población indígena Malecu, se le solicitó información detallada a la Comisión de Acceso a la Justicia, para determinar la cantidad de personas interesadas en esta capacitación.*

*En relación con este dato, se estaría considerando la propuesta de construir una red de formadores, con las mismas personas traductoras capacitadas.*

*A mediano plazo, tanto las personas colaboradoras en los Consultorios Jurídicos como las personas intérpretes y traductoras podrán ser incorporadas como participantes del curso virtual de autoformación indicado anteriormente.*

* ***Ejecución de la propuesta de capacitación brindada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de pueblos indígenas.***

*Con respecto a la propuesta de capacitación aportada por la Subcomisión de Acceso a la justicia de pueblos indígenas, la Escuela Judicial ha elaborado una propuesta metodológica para ejecutar cada capacitación, la cual se adjunta en este acto.*

*Seguidamente, se iniciará el diseño de las actividades, de acuerdo a las necesidades y complejidad de cada propuesta, y se procederá a calendarizar las mismas para iniciar su coordinación y ejecución en el año 2020.*

*Para el diseño de las actividades, la Escuela Judicial requiere la colaboración de al menos una persona especialista en la materia, por lo que se coordinará con esta Subcomisión, el aporte de dicha persona.*

* ***Diseño de actividades académicas.***

*De conformidad con lo estipulado en el eje de acción número 10, la Escuela Judicial solicita a las personas especialistas colaboradoras que verifiquen que los contenidos de los diseños de las capacitaciones en esta materia incluyan la normativa internacional relativa a los derechos de las personas indígenas, leyes, jurisprudencia, y demás regulaciones de interés en este tema.*

* ***Población meta de las capacitaciones.***

*En cumplimiento de lo expuesto en el eje de acción número 9, el proceso de capacitación incluirá a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros, y se le dará prioridad a las personas juzgadoras y personal técnico de los despachos donde se tramite la mayor cantidad de procesos vinculados con personas indígenas. Para ello se cuenta con el listado proporcionado por la Subcomisión de Acceso a la justicia de pueblos indígenas, según reporte de SIGMA, el cual se adjunta. Asimismo, en principio, se les dará prioridad a las personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias.*

*Sin otro particular,*

***Licda. Rebeca Guardia Morales***

***Directora a.i.***

***Escuela Judicial***

*C. Arch. Consec.*

*fam*

***Propuesta de Capacitación sobre Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas***

***Año 2020***

*Propuesta:*

|  | ***Tema*** | ***Justificación*** | ***Nivel de profundidad***  *Baja*  *Media*  *Alta* | ***Prioridad*** | ***Posibles personas facilitadoras*** | ***Propuesta metodológica*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***CONOCERNOS:*** *Un primer acercamiento*  *Historia*  *Costumbres, Formas de transmisión de la tierra,*  *Formas de posesión de la tierra* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Alta* | *Personas indígenas representantes de los territorios indígenas de Bribrí de Talamanca y Térraba (Señor Pablo Sibar);*  *Dr. Marcos Guevara Berger*  *Escuela de Antropología*  *UCR*  *Dr. Alí García*  *UCR*  *Dra. Alejandra Boza*  *Escuela de Historia*  *UCR*  *Licda. Marjorie Herrera*  *Defensoría de los Habitantes de la República*  *Justa Romero*  *Indígena Bribri*  *Pablo Sibar*  *Indígena Broran*  *Por definir*  *Indígena Bribri* | *Panel de personas expertas. Se desarrollaría en 80 minutos, y se brinda un espacio para consultas.* |
|  | *Modelo de construcción de Política Nacional Indígena y Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas; y construcción de la Política Indígena del Poder Judicial* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Alta* | *Sr. Juan Alfaro*  *Viceministerio de la Presidencia, delegado para atender los asuntos indígenas por la Presidencia de la República*  *Sr. Geyner Blanco*  *Indígena Maleku Asesor de la Presidencia de la República en temas indígenas*  *Sr. Jorge Olaso Alvarez*  *Coordinador Comisión de Acceso a la Justicia*  *Sra. Melissa Benavides*  *Coordinadora Unidad de Acceso a la Justicia*  *Sra. Damaris Vargas Vásquez*  *Coordinadora Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas* | *Taller de 3 días cuyo producto sea la construcción de la Política Indígena del Poder Judicial.* |
|  | *Buenas Prácticas: Reglas de Brasilia, Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica y Reglas de Procesos Indígenas; Circulares.* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Media* | *Defensa Pública: Ligia Jiménez*  *Fiscalía Indígena:*  *Ariana Céspedes*  *Judicatura:*  *Jean Carlos Monge, Damaris Vargas Vásquez*  *Ámbito Administrativo:*  *Wilberth Kidd*  *OIJ:*  *Yorleny Ferreto*  *Sociedad Civil:*  *Exmagistrada Carmen María Escoto Fernández* | *Curso virtual autoformativo* |
|  | *Mecanismo General de Consultas sobre actos en los territorios y de importancia para las personas indígenas fuera de los territorios indígenas* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Alta* | *Magistrada Iris Rocío Rojas:*  *Coordinadora Comisión de Conciliación*  *Franklin Paniagua, director de DINARAC del Ministerio de Justicia*  *Carmen Cerdas: directora Centro de Conciliación del Poder Judicial*  *Kattya Escalante: Escuela Judicial* | *Mesa Redonda con personas expertas.* |
|  | *Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (INDER) (Tierras, Territorios y Recursos)* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Media* | *Diana Murillo:*  *Gerente General de INDER*  *Ing. Jimmy Garita*  *INDER*  *Ingra. Sandra Angulo Calderón*  *INDER* | *Conversatorio con espacio de consultas por parte de las personas participantes.* |
|  | *Género y mujeres indígenas* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Media* | *Antropóloga Valeria Varas*  *INAMU*  *Máster Melissa*  *Benavides*  *Unidad Acceso a la Justicia* | *Taller de 2 días.*  *Producto: buena práctica para aplicar.* |
|  | *Peritajes Culturales:*  *Lecciones aprendidas*  *Aprovechamiento y administración de la información*  *Interpretación del idioma indígena* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Alta* | *Dr. Marcos Guevara Berger*  *UCR*  *Alí García*  *UCR*  *Javier Rodríguez*  *Coordinador de Proyecto por el National Center*  *Patricia Bonilla*  *Centro de Información Jurisprudencial* | *Simposio de al menos tres días para el desarrollo de la temática.* |
|  | *Módulo didáctico sobre Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Alta* | *Media* | *Personas integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia, representantes de la Judicatura, Fiscalía, Defensa Pública, Trabajo Social y Psicología,* | *Taller de 2 días. Producto: la aplicación de la política de acceso a la Justicia.* |
|  | *Experiencias de la Defensa Pública en la atención de la temática indígena:*  *Políticas y circulares*  *Buenas Prácticas*  *Peritajes culturales* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Media* | *Alta* | *Dra. Diana Montero Montero*  *Directora Defensa Pública*  *Dr. Erick Núñez Rodríguez*  *Subdirector de la Defensa Pública*  *Licda. Ligia Jiménez*  *Defensa Pública Indígena*  *Lic. Jesús Chaves Mora*  *Defensa Pública Indígena* | *Conferencia puntual con espacio para preguntas* |
|  | *Capacitación en temáticas vinculadas con pueblos y territorios indígenas*  *Capacitación desarrollada por la UCR compuesta por 6 módulos temáticos con un sitio virtual para la interlocución de las personas participantes.*  *Se adicionaron dos módulos:*  *-Concepción tradicional de la tierra*  *-Peritaje cultural* | *Acuerdos de Corte Plena tomados en sesiones N° 20-19 de 27 de mayo de 2019, Artículo XIX y N° 25-19 de 24 de junio de 2019, Artículo II, donde se aprobaron y la Circular N° 123-2019 denominada “Sobre los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica”* | *Alta* | *Alta* | *Dra. Vania Solano*  *UCR*  *Dr. Marcos Guevara*  *UCR* | *Curso que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica.*  *Programa de Educación Continua, Facultad de Derecho.* |

*Se solicita verificar que, en los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos:*

1. *Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016*
2. *Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017*
3. *Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, entre otras.*
4. *Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.*
5. *Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas; además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Nombre*** | ***Cédula*** | ***Teléfono*** | ***Lenguas*** | ***Circuito (s) Judicial (es)*** |
| 1. *1.* | *JOSE BALDOMERO TORRES TORRES* | *0600590704* | *Tel: Valor 001 27300289 Tel: Valor 00222005024* | *Bribrí* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *ICJ Zona Atlántica*  *II CJ Alajuela*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *ULISES HERNANDEZ NERCIS* | *0900710272* | *Tel: Valor 00325332434*  *Fax: Valo 00425333056* | *Bribrí* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *I CJ Alajuela*  *I CJ San José*  *ICJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica* |
|  | *EMILIANO FIGUEROA ORTIZ* | *600930377* | *Tel: Valor 00587197151 Tel: Valor 00684154519*  *Tel: Valor 00785758917* | *Bribrí* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *ICJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Alajuela*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *ELIO NELSON NELSON* | *700560863* | *Tel: Valor 00883014551* | *Bribrí* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *ICJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Alajuela*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *ANA MAURA VARGAS MORALES* | *0701060881* | *Tel: Valor 00983967551* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *EDWARD LEISY STWARD JACKSON* | *0702820634* | *Tel: Valor 01027510574*  *Tel: Valor 01185123908* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *MARINA LOPEZ MORALES* | *0700790129* | *Tel: Valor 01227510574*  *Tel: Valor 01385123908* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *LEONARDO BUITRAGO MORALES* | *0700960977* | *Tel: Valor 01484991938* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *NEMESIO REYES REYES* | *0700460278* | *Tel: Valor 01583967551* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *JUSTA ROMERO MORALES* | *0900730306* | *Tel: Valor 01687040556* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *BAUDILIO SELLES SANCHEZ* | *701330133* | *Tel: Valor 01783525971* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *LEIDY FABIOLA MORALES ROJAS* | *702580852* | *Tel: Valor 01885949581* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *ROLANDO MORALES MARIN* | *701890254* | *Tel: Valor 01985612095*  *Tel: Valor 02085612095* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *ARCELIO GARCIA MORALES* | *0701200162* | *Tel: Valor 02183979316* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *LILLIAM JEANNETTE MORALES GARCIA* | *0701240018* | *Tel: Valor 02283867194* | *Bribrí* | *ICJ Zona Atlántica* |
|  | *LAUDENCIO ROJAS ORTIZ* | *0900750620* | *Tel: Valor 02384509771* | *Bribrí* | *I CJ Zona Sur*  *II CJ Zona Sur* |
|  | *JOSE JULIO MORALES MARTINEZ* | *0303280622* | *Tel: Valor 02425548073*  *Tel: Valor 02587411124*  *Tel: Valor 02685978935* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *WILLIAM HERRERA REYES* | *0304580270* | *Tel: Valor 02725311438*  *Tel: Valor 02889784654* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *I CJ Zona Atlántica* |
|  | *MARGARITA OBANDO MADRIZ* | *0305410105* | *Tel: Valor 02925548341*  *Tel: Valor 03086072564* | *Cabécar* | *CJ Cartago (Turrialba)* |
|  | *FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ* | *0302720334* | *Tel: Valor 03189259201* | *Cabécar* | *CJ Cartago* |
|  | *ALEJANDRO OBANDO ORTIZ* | *0304230993* | *Tel: Valor 03283867194* | *Cabécar* | *CJ Cartago (Turrialba)* |
|  | *HEINER MAURICIO ACOSTA CONTRERAS* | *0304030448* | *Tel: Valor 03325541130*  *Tel: Valor 03485429097* | *Cabécar* | *CJ Cartago* |
|  | *ESTER BARQUERO MADRIZ* | *0901020122* | *Tel: Valor 03588107067*  *Tel: Valor 03688107067* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *II CJ Zona Atlántica* |
|  | *MIGUEL RODRIGO MORALES REYES* | *0900980677* | *Tel: Valor 03789552843* | *Cabécar* | *CJ Cartago (Turrialba-Chirripó)* |
|  | *FRANKLIN MORALES MARTINEZ* | *0900990121* | *Tel: Valor 03825316038*  *Tel: Valor 03925316090*  *Tel: Valor 04087238194* | *Cabécar* | *CJ Cartago* |
|  | *YULISSA PAOLA ORTIZ MORALES* | *305190318* | *Tel: Valor 04185079867*  *Tel: Valor 04285079867* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *VIELKA CELESTE MORALES SEGURA* | *305240012* | *Tel: Valor 04383720142* | *Cabécar* | *CJ Cartago* |
|  | *RODRIGO MORALES SEGURA* | *304930199* | *Tel: Valor 04485877650* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *III CJ San José* |
|  | *ELIETH MORALES SEGURA* | *115220379* | *Tel: Valor 04587163543*  *Tel: Valor 04687163543* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *RONALD OBANDO GARCIA* | *304280270* | *Tel: Valor 04722064595*  *Tel: Valor 04885389206* | *Cabécar* | *CJ Cartago (Turrialba)* |
|  | *DENNIS MADRIGAL MORA* | *305400592* | *Tel: Valor 04987661030*  *Tel: Valor 05083729545* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *SEM VALLE JIMENEZ* | *304880442* | *Tel: Valor 05163661079*  *Tel: Valor 05283171803* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *ILEANA MOYA OBANDO* | *304270270* | *Tel: Valor 05383496916* | *Cabécar* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Sur*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *CARLOS EZEQUIEL ARTAVIA SANABRIA* | *0701250005* | *Tel: Valor 05422005085*  *Tel: Valor 05586181081* | *Cabécar* | *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *III CJ San José* |
|  | *ADRIAN SANABRIA PAYAN* | *0701320518* | *Tel: Valor 05685445524*  *Tel: Valor 05785070142* | *Cabécar* | *I CJ Zona Atlántica* |
|  | *HERMÓGENES MORALES MORALES* | *0900810303* | *Tel: Valor 05889935324* | *Cabécar* | *I CJ Zona Atlántica* |
|  | *TJUK LEANDRO MORALES LOPEZ* | *702630622* | *Tel: Valor 05988604161* | *Cabécar* | *I CJ Zona Atlántica*  *II CJ Zona Atlántica* |
|  | *NAGO ELIZONDO CASTRO* | *0205380513* | *Tel: Valor 06084855528*  *Fax:Valor 06185884624* | *Maleku* | *II CJ Alajuela* |
|  | *EDGAR ATENCIO RODRIGUEZ* | *0603190447* | *Tel: Valor 06284855528*  *Fax: Valor 06385884624* | *Ngöbe* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Alajuela*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *CANDELARIO GOMEZ GALINDO* | *'59100363611* | *Tel: Valor 06425461575*  *Tel: Valor 06586450728* | *Ngöbe* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *CJ Puntarenas*  *I CJ Alajuela*  *I CJ Guanacaste*  *I CJ San José*  *I CJ Zona Atlántica*  *I CJ Zona Sur*  *II CJ Alajuela*  *II CJ Guanacaste*  *II CJ San José*  *II CJ Zona Atlántica*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *MELINA MONTEZUMA RODRIGUEZ* | *602860566* | *Tel: Valor 06688689739*  *Tel: Valor 06788689739* | *Ngöbe* | *CJ Cartago*  *CJ Heredia*  *I CJ Alajuela*  *I CJ San José*  *II CJ Alajuela*  *II CJ San José*  *III CJ Alajuela*  *III CJ San José* |
|  | *VALENTIN DE JESUS GONZALEZ PALACIOS* | *0602130307* | *Tel: Valor 06889513230* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *JONATAN ATENCIO RODRIGUEZ* | *0603190446* | *Tel: Valor 06950060344*  *Tel: Valor 07085319231* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *AURELIO BEJARANO RIOS* | *0901060603* | *Tel: Valor 07183959050*  *Tel: Valor 07283959050*  *Fax: Valor 07327832911* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *CARMELA ANDARLES DE GRACIA* | *0602840229* | *Tel: Valor 07486827153* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *MAXIMINO MONTEZUMA BEJARANO* | *0901060614* | *Tel: Valor 07522322402*  *Tel: Valor 07689736514*  *Fax: Valor 07727322402* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *ELIAN QUIROS MENDOZA* | *0603580852* | *Tel: Valor 07886695366*  *Tel: Valor 07985506848* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *HORACIO WILLIAM QUIROS MENDOZA* | *0603690809* | *Tel: Valor 08050191761*  *Tel: Valor 08187558844* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *RUBEN BEJARANO MENDOZA* | *0901000412* | *Cel: Valor 08287182716*  *Fax: Valor 08327831972* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *MARCIAL MONTEZUMA SANCHEZ* | *604060353* | *Tel: Valor 08485654479* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *JAVIER QUIROS MENDOZA* | *602720496* | *Tel: Valor 08550038076* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *KATTIA PALACIOS PALACIOS* | *603910342* | *Tel: Valor 08689190624* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *ANIA MARIA GONZALEZ ARAUZ* | *603990739* | *Tel: Valor 08784333185* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *ELIDA MARIA RODRIGUEZ SANTOS* | *0601890914* | *Tel: Valor 0889871708* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *SANTOS GONZALEZ PALACIOS* | *901010847* | *Tel: Valor 0844056489* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |
|  | *NATANAEL CARRERA SANTIAGO* | *604210119* | *Tel: Valor 09083331408* | *Ngöbe* | *II CJ Zona Sur* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CANTIDAD DE INTERVINIENTES*** | ***OFICINAS CON MAYOR CANTIDAD DE INTERVINIENTES (INDÍGENAS) ENERO 2019*** |
| *278* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *264* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *227* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *140* | *TRIBUNAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *137* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *119* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TURRIALBA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *118* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *100* | *JUZGADO PENAL DE BUENOS AIRES* |
| *88* | *JUZGADO TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *82* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *78* | *JUZGADO PENAL DE TALAMANCA* |
| *64* | *JUZGADO PENAL DE TURRIALBA* |
| *52* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *40* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *39* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA PENAL)* |
| *38* | *JUZGADO FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMESTICA DE TURRIALBA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *34* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA AGRARIA)* |
| *34* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE COTO BRUS (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *29* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *28* | *FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS* |
| *28* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TURRIALBA (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *24* | *TRIBUNAL DE CARTAGO, SEDE TURRIALBA* |
| *22* | *JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *21* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE GRECIA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *20* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE GUATUSO (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *20* | *JUZGADO AGRARIO I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *20* | *JUZGADO FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMESTICA DE TURRIALBA (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *19* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *18* | *JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *18* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR* |
| *17* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS DE SARAPIQUI* |
| *17* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA CIVIL)* |
| *16* | *OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA, SEDE LIMÓN* |
| *16* | *JUZGADO PENAL DE COTO BRUS* |
| *15* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA LABORAL)* |
| *15* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *14* | *TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *14* | *FISCALIA ADJUNTA I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *14* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *13* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *13* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE COTO BRUS (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *12* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *12* | *JUZGADO PENAL JUVENIL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *12* | *JUZGADO PENAL DE BUENOS AIRES* |
| *11* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *11* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *11* | *JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *10* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA, SEDE UPALA (MATERIA AGRARIA)* |
| *10* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA LABORAL)* |
| *10* | *FISCALIA ADJUNTA CARTAGO (MATERIA PENAL)* |
| *10* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *9* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA FAMILIA)* |
| *9* | *SALA PRIMERA* |
| *9* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA PENAL)* |
| *8* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA LABORAL)* |
| *8* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN)* |
| *8* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *8* | *JUZGADO PENAL DE BUENOS AIRES* |
| *8* | *FISCALIA DE BATAN* |
| *8* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *7* | *JUZGADO AGRARIO II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES)* |
| *7* | *TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN)* |
| *7* | *TRIBUNAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *6* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA LABORAL)* |
| *6* | *JUZGADO PENSIONES Y VIOLENCIA DOMESTICA DE SIQUIRRES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *6* | *JUZGADO TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *6* | *JUZGADO PENAL DE CARTAGO* |
| *6* | *JUZGADO PENAL JUVENIL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES Y GOLFITO)* |
| *6* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE COTO BRUS (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *6* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *5* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA CIVIL)* |
| *5* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE JICARAL (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *5* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE GRECIA (MATERIA FAMILIA)* |
| *5* | *JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *5* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *5* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA LABORAL)* |
| *5* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *5* | *JUZGADO PENAL DE BATAN* |
| *4* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y AGRARIO DE TURRIALBA (MATERIA AGRARIA)* |
| *4* | *JUZGADO DE TRABAJO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE* |
| *4* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA CIVIL)* |
| *4* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *4* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *4* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *4* | *FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS* |
| *4* | *JUZGADO PENAL DE TALAMANCA* |
| *4* | *FISCALIA ADJUNTA II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *4* | *JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SEDE ATENAS* |
| *4* | *JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PEREZ ZELEDON)* |
| *4* | *JUZGADO PENAL DE BUENOS AIRES* |
| *4* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE GRECIA (MATERIA FAMILIA)* |
| *3* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *3* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *3* | *JUZGADO AGRARIO I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE CARRILLO (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA) (MA* |
| *3* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *3* | *JUZGADO DE PENSIONES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE PAVAS (PISAV) (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *3* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA CIVIL)* |
| *3* | *TRIBUNAL DE CARTAGO, SEDE TURRIALBA* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PAVAS (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *3* | *JUZGADO EJECUCION DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES* |
| *3* | *JUZGADO PENAL DE PURISCAL* |
| *3* | *TRIBUNAL DE II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *3* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR, SEDE GOLFITO* |
| *3* | *TRIBUNAL PENAL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *3* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *3* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA PENAL)* |
| *3* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA PENAL)* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE GUATUSO (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *3* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MATINA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *3* | *JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *3* | *JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE (DESAMPARADOS)* |
| *3* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA AGRARIA)* |
| *3* | *JUZGADO TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *3* | *TRIBUNAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (MATERIA PENAL)* |
| *2* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *2* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *2* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *2* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA, SEDE UPALA (MATERIA FAMILIA)* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (MATERIA LABORAL)* |
| *2* | *JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRACIÓN Y CIVIL DE HACIENDA* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ASERRI (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE GRECIA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE HATILLO (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE JIMENEZ (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MATINA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE NARANJO (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE POAS (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TARRAZU, DOTA Y LEON CORTES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y PENSIONES ALIMENTARIAS II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (MATERIA PENSIONES* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y PENSIONES ALIMENTARIAS III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMÓN) (MATERIA* |
| *2* | *JUZGADO DE SEGURIDAD SOCIAL* |
| *2* | *JUZGADO DE TRABAJO I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *2* | *JUZGADO DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *2* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS DE CARTAGO* |
| *2* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE (DESAMPARADOS)* |
| *2* | *JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *2* | *SALA PRIMERA* |
| *2* | *OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA, SEDE CORREDORES* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *2* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *2* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *2* | *JUZGADO NOTARIAL* |
| *2* | *JUZGADO PENAL DE CARTAGO* |
| *2* | *JUZGADO PENAL DE COTO BRUS* |
| *2* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *2* | *FISCALÍA ADJUNTA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (MATERIA PENAL)* |
| *2* | *FISCALIA ADJUNTA I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) (MATERIA PENAL)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE HEREDIA* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE MATINA (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *2* | *JUZGADO PENAL DE UPALA* |
| *2* | *TRIBUNAL DE CARTAGO* |
| *2* | *TRIBUNAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (MATERIA PENAL)* |
| *2* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (FLAGRANCIA)* |
| *2* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (FLAGRANCIA)* |
| *2* | *JUZGADO PENAL DE COTO BRUS* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *2* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA PURISCAL (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *2* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PARRITA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *2* | *JUZGADO DE PENSIONES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE SIQUIRRES (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *2* | *JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE CARTAGO* |
| *2* | *JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN)* |
| *2* | *JUZGADO FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMESTICA DE TURRIALBA (MATERIA FAMILIA)* |
| *2* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE GRECIA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMON)* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (SANTA CRUZ)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE QUEPOS (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (LIBERIA) (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES) (MATERIA CIVIL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y AGRARIO DE TURRIALBA (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA CIVIL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE OSA (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ATENAS (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ESPARZA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE LA FORTUNA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE LOS CHILES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE OSA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PURISCAL (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SAN RAFAEL (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SANTO DOMINGO (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TARRAZU, DOTA Y LEON CORTES (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE TILARAN (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE UPALA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE VALVERDE VEGA (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DEL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (SANTA CRUZ)* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMESTICA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATER* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO DE SANTA CRUZ* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE (DESAMPARADOS)* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO Y FAMILIA DE HATILLO, SAN SEBASTIAN Y ALAJUELITA (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS DE HEREDIA* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES ALIMENTARIAS II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (POCOCÍ)* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES Y VIOLENCIA DOMESTICA DE ESCAZÚ (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES Y VIOLENCIA DOMESTICA DE LA UNION (PISAV) (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES Y VIOLENCIA DOMESTICA DE SAN JOAQUIN DE FLORES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *TRIBUNAL SEGUNDO COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSÉ* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE PAVAS* |
| *1* | *OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA* |
| *1* | *OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA, SEDE III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *FISCALIA ADJUNTA HEREDIA (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DE POCOCI* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DEL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (SANTA CRUZ)* |
| *1* | *JUZGADO DE TRABAJO DE PUNTARENAS* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE PAVAS* |
| *1* | *JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO TERCERO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR, SEDE OSA* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DEL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (SANTA CRUZ)* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO DE CARTAGO* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE GRECIA (MATERIA CIVIL)* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DE GRECIA* |
| *1* | *TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMÓN)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO PENSIONES Y VIOLENCIA DOMESTICA DE ESCAZÚ (MATERIA PENSIONES ALIMENTARIAS)* |
| *1* | *TRIBUNAL COLEGIADO PRIMERA INSTANCIA CIVIL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA)* |
| *1* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (LIBERIA) (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BUENOS AIRES (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO EJECUCION DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE BATAN* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE GOLFITO* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE TURRIALBA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMON)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES Y GOLFITO)* |
| *1* | *TRIBUNAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (FLAGRANCIA)* |
| *1* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (FLAGRANCIA)* |
| *1* | *FISCALIA ADJUNTA I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (LIBERIA) (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE TURRIALBA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA)* |
| *1* | *TRIBUNAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE, SEDE SANTA CRUZ (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (FLAGRANCIA)* |
| *1* | *TRIBUNAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE (LIBERIA) (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE BRIBRI (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *CENTRO DE CONCILIACION DEL PODER JUDICIAL* |
| *1* | *FISCALIA ADJUNTA HEREDIA (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *FISCALIA ADJUNTA I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN) (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *1* | *FISCALÍA DE BATÁN (MATERIA PENAL JUVENIL)* |
| *1* | *FISCALIA DEL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE PURISCAL (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ATENAS (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE COTO BRUS (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE LA FORTUNA (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE OSA (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE POAS (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y TRÁNSITO DE POCOCÍ (MATERIA FALTAS Y CONTRAVENCIONES)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE GOLFITO* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE GRECIA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE HATILLO* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE OSA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE PAVAS* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE POCOCI GUACIMO* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE PUNTARENAS* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE SARAPIQUI* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO PENAL I CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (LIBERIA)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMON)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL DE HEREDIA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON Y GRECIA)* |
| *1* | *SALA CONSTITUCIONAL* |
| *1* | *TRIBUNAL DE PUNTARENAS, SEDE QUEPOS* |
| *1* | *TRIBUNAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA (FLAGRANCIA)* |
| *1* | *TRIBUNAL DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA (SAN RAMON) (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *TRIBUNAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR, SEDE OSA* |
| *1* | *TRIBUNAL PENAL DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, SEDE SUROESTE (PAVAS)* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE TURRIALBA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL JUVENIL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (CORREDORES Y GOLFITO)* |
| *1* | *FISCALIA ADJUNTA CARTAGO (MATERIA PENAL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SEDE UPALA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTIC* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO, FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMESTICA SARAPIQUI (MATERIA VIOLENCIA DO* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE LA CRUZ (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SAN RAFAEL (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE SANTO DOMINGO (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE GOLFITO (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMESTICA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATER* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMESTICA III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SAN RAMON) (MATERIA VIOLENC* |
| *1* | *JUZGADO DE PENSIONES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DE ESCAZÚ (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE PUNTARENAS* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE BUENOS AIRES* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE TALAMANCA* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DE TURRIALBA* |
| *1* | *JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO EJECUCION DE LA PENA DE SAN JOSE* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL DE CARTAGO* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL HATILLO, SAN SEBASTIAN Y ALAJUELITA* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO DE CAÑAS (MATERIA CIVIL)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL Y TRABAJO II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA, SEDE UPALA (MATERIA AGRARIA)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA FAMILIA)* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA LABORAL)* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE GUANACASTE (NICOYA) (MATERIA FA* |
| *1* | *JUZGADO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DOMESTICA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (MATER* |
| *1* | *SALA CONSTITUCIONAL* |
| *1* | *JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE BUENOS AIRES (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE POAS (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO FAMILIA, PENAL JUVENIL Y VIOLENCIA DOMESTICA DE TURRIALBA (MATERIA VIOLENCIA DOMÉSTICA)* |
| *1* | *JUZGADO VIOLENCIA DOMESTICA I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR (PÉREZ ZELEDÓN)* |
| *1* | *JUZGADO AGRARIO I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA* |
| *1* | *FISCALIA DE ASUNTOS INDIGENAS* |
| *1* | *JUZGADO PENAL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA* |

La Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en sesión anterior, tomó el siguiente acuerdo:

***SE ACUERDA****:*

***1°*** *Se toma nota del Oficio EJ-DIR-026-2020 de 27 de febrero de 2020, remitido por la Escuela Judicial en relación con el Plan Anual de Capacitación 2020; con ocasión de la solicitud planteada en Oficio DVV-S1-018-2020 en el que se le solicitó a la Dirección de la Escuela Judicial y al Consejo Directivo de la Escuela Judicial la presentación de un informe de avance en el cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado y la Circular 188-19 de Corte Plena.-*

***2°*** *Con respecto a la propuesta de capacitación aportada por la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, conforme al cual la Escuela Judicial señala ha elaborado una propuesta metodológica para ejecutar cada capacitación e iniciará el diseño de las actividades, de acuerdo a las necesidades y complejidad de cada propuesta, y se procederá a calendarizar las mismas para iniciar su coordinación y ejecución en el año 2020, se dispone solicitar a la Escuela Judicial comunique la calendarización a la que hace referencia.*

***3°*** *En relación con lo señalado por la Escuela Judicial acerca de que, para el diseño de las actividades, la Escuela Judicial requiere la colaboración de al menos una persona especialista en la materia, por lo que se coordinará con esta Subcomisión, el aporte de dicha persona, se le informa que para tal efecto se designó oportunamente al señor Marcos Guevara Berger, Antropólogo Social de la Escuela de Antropología de la UCR; sin embargo, el señor Guevara manifestó no poder ejecutar dicha labor considerando los lineamientos de la Universidad. De igual forma, comunicarle que para ese efecto la Subcomisión designó un equipo de personas integrantes de ésta, para que estén a cargo de la capacitación, por lo que se le solicita a la Unidad de Acceso a la Justicia convocar a la persona representante de la Escuela Judicial ante la Subcomisión y a la especialista en métodos de enseñanza que la Escuela Judicial defina, a la siguiente sesión de trabajo de dicho Equipo de Capacitación.*

***4°*** *Reiterar a la Escuela Judicial verificar que en as capacitaciones que ejecuten, sin excepción, se incluya como mínimo, los lineamientos sobre contenidos señalados en la Circular 188-19 de Corte Plena.*

***5°*** *Se toma nota del informe de la Escuela Judicial donde se señala que, en cumplimiento de lo expuesto en el eje de acción número 9, el proceso de capacitación incluirá a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros, y se le dará prioridad a las personas juzgadoras, defensoras, fiscalas y personal técnico y administrativo de los despachos donde se tramite la mayor cantidad de procesos vinculados con personas indígenas. La participación de las personas defensoras públicas es muy importante considerando que a partir de la vigencia de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica deben atender en forma gratuita y especializada a la población indígena que requiera sus servicios en todas las Jurisdicciones. Para ello se cuenta con el listado de despachos con mayor incidencia en la atención de población indígena, proporcionado por la Subcomisión de Acceso a la justicia de pueblos indígenas, según reporte de SIGMA, el cual se adjunta, el cual deberá estar actualizado al momento de disponer de las convocatorias. Asimismo, en principio, se les dará prioridad a las personas servidoras judiciales de la Defensa Pública, Judicatura, Fiscalía y sector Administrativo involucrado con las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, entre otras.*

***6°*** *Se declara este acuerdo firme por unanimidad. Comuníquese por medio de la Unidad de Acceso a la Justicia a la Escuela Judicial y al equipo de la Subcomisión designado para la capacitación. -*

**ARTÍCULO XIX**

Comunica la Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígena que el pasado 12 de marzo participó en una sesión virtual convocada por Naciones Unidas para conocer la gestión formulada por Ditsö relacionada con las amenazas y riesgos en que se encuentran en Buenos Aires de Puntarenas.

Agrega, el 30 de marzo remitió comunicado electrónico al señor Gustavo Oreamuno Vignet con copia a la Unidad de Acceso a la Justicia, Melissa Benavides Víquez, Alvaro Paniagua, Marjorie Herrera, Alice Shackelford, Michelle Bachelet, el despacho del Viceministerio de Diálogo Ciudadano y del Viceministerio de Seguridad, el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el señor Christian Gonzalez, la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, en el que informó:

*“Tengo el gusto de informarle a usted y a las demás personas copiadas en este chat que, tanto la gestión inicial, como las posteriores y documentos remitidos, vinculados con la petición de la Asociación que usted representa, fueron trasladadas de inmediato a todas las jerarquías institucionales, incluyendo dentro de ellas la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, Direcciones de Fiscalía General, Organismo de Investigación Judicial y Defensa Pública, para lo que corresponda de acuerdo a sus competencias. De igual forma se les trasladaron varios de los comunicados electrónicos enviados por personas relacionadas con ocasión de su gestión.*

*En relación con lo anterior le reitero, los procesos vinculados con población indígena, especialmente si están vinculadas con las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, son una prioridad para el Poder Judicial; así como la privacidad que exige la ley en relación con gestiones planteadas vinculadas con protección de víctimas y testigos que están siendo conocidas por la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, según les referí en la sesión del 12 de marzo pasado, en la que participé virtualmente.”*

Al respecto, se remitió el siguiente comunicado electrónico:

**De:** Damaris Vargas Vásquez <[dvargas@Poder-Judicial.go.cr](mailto:dvargas@Poder-Judicial.go.cr)>  
**Enviado:** miércoles, 25 de marzo de 2020 09:48  
**Para:** Presidencia de la Corte <[presidencia@Poder-Judicial.go.cr](mailto:presidencia@Poder-Judicial.go.cr)>; Despacho de la Presidencia de la Corte <[despacho\_pre@Poder-Judicial.go.cr](mailto:despacho_pre@Poder-Judicial.go.cr)>; Fiscalía General <[fgeneral@Poder-Judicial.go.cr](mailto:fgeneral@Poder-Judicial.go.cr)>; Fiscalía de Asuntos Indígenas <[fai-mp@Poder-Judicial.go.cr](mailto:fai-mp@Poder-Judicial.go.cr)>; Organismo de Investigación Judicial <[oij@Poder-Judicial.go.cr](mailto:oij@Poder-Judicial.go.cr)>; Secretaría Defensa Publica I Circuito Judicial <[defensapublica@Poder-Judicial.go.cr](mailto:defensapublica@Poder-Judicial.go.cr)>; Dirección de Justicia Restaurativa <[justiciarestaurativa@Poder-Judicial.go.cr](mailto:justiciarestaurativa@Poder-Judicial.go.cr)>; Contraloría de Servicios de San José <[contraloriapj@Poder-Judicial.go.cr](mailto:contraloriapj@Poder-Judicial.go.cr)>; Oficina Atención a la Victima del Delito <[victimadelito@Poder-Judicial.go.cr](mailto:victimadelito@Poder-Judicial.go.cr)>; Escuela Judicial Dirección <[esc\_judicial@Poder-Judicial.go.cr](mailto:esc_judicial@Poder-Judicial.go.cr)>; Gestión Humana Comunicaciones Secretaría <[gh\_comunicaciones@Poder-Judicial.go.cr](mailto:gh_comunicaciones@Poder-Judicial.go.cr)>; Dirección Ejecutiva <[direc\_ejecutiva@Poder-Judicial.go.cr](mailto:direc_ejecutiva@Poder-Judicial.go.cr)>; Dirección de Planificación <[planificacion@Poder-Judicial.go.cr](mailto:planificacion@Poder-Judicial.go.cr)>  
**Cc:** Acceso a la Justicia <[accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr](mailto:accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr)>; Jorge Olaso Alvarez <[jolaso@Poder-Judicial.go.cr](mailto:jolaso@Poder-Judicial.go.cr)>; Melissa Benavides Víquez <[mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr](mailto:mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr)>; Alejandra Mena Cárdenas <[amenac@Poder-Judicial.go.cr](mailto:amenac@Poder-Judicial.go.cr)>  
**Asunto:** Aumento de amenazas de muerte contra líderes indígenas

**Estimados Señores y Señoras:**

Reciban un atento saludo.

Les comento que la señora Alice Shackelford convocó a una sesión de trabajo el pasado 12 de marzo a solicitud del señor Gustavo Oreamuno Vignet de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. Asistieron representantes de la Presidencia de la República, la Organización de las Naciones Unidas, Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Seguridad y otros. En la reunión el señor Oreamuno expuso la situación que están viviendo con ocasión de los acontecimientos que se han dado en Buenos Aires de Puntarenas a raíz de los últimos acontecimientos.

El día de ayer, el señor Oreamuno Vignet, compartió los documentos adjuntos a la Comisión de Acceso a la Justicia y a las oficinas citadas y sus representantes. Se refieren, según dice, a la situación de alto riesgo para la vida e integridad en la que se encuentran las personas integrantes de Ditsö, ante lo cual solicitan una serie de medidas de atención y protección tanto al Poder Ejecutivo, como al Poder Judicial. Además, comparte documentos referidos a denuncias, solicitando dar seguimiento a unas causas judiciales recientes, relacionadas con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas.

En la sesión de trabajo indicada, en la que participé virtualmente, les informé haría de conocimiento de las principales jerarquías institucionales vinculadas con la atención de procesos indígenas, en especial, de la población beneficiaria de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado. Me referí a las principales acciones del Poder Judicial y acuerdos de Corte Plena incorporados en la Circular 188-19. Además, fui enfática en que las medidas de protección de víctimas y testigos son confidenciales conforme lo disponen los artículos 2 y 325 bis de la normativa que les rige, e incluyen sanciones de prisión de 2 a 8 años a quien por sí o cualquier medio, difunda información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el Programa de Víctimas y Testigos, entre otras sanciones que establece la normativa especializada.

Les comunico que como juzgadora, ahora integrando la Sala Primera, he explicado a las personas indígenas y a las organizaciones involucradas, en las sesiones de trabajo con el Gobierno y otros organismos y en las sesiones presenciales en los territorios indígenas, de las limitaciones legales de referirme a procesos concretos y evacuar algunas dudas que tienen, remitiéndoles a la Defensa Pública pues de conformidad con la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica las personas indígenas que lo requieran tienen derecho a ser atendidas por defensoras y defensores públicos especializados en todas las materias; además, la disposición de la Contraloría de Servicios de atender cualquier queja que se presente en relación con el servicio público, sumada la atención de la Inspección Judicial de las causas que las personas indígenas ya tienen presentadas.

Los documentos adjuntos son, según se refiere en el comunicado, los siguientes:

*1. Ditsö - Gobierno (solicitud de medidas de atención y protección)*

*2. Acción Urgente. Omisión por parte del Estado de Costa Rica ante amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, incitación a hechos de violencia y apología del delito en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro, miembros de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. AU-0/San José/Costa Rica/-04/03/2020*

*3. Alerta Temprana de la Defensoría de los Habitantes sobre situación de riesgo de miembros de Ditsö y líderes de Pueblos Originarios.*

*4. Respuesta del Ministerio de Seguridad a la Alerta Temprana de la Defensoría.*

*5. Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante riesgo de miembros de Ditsö y líderes de Pueblos Originarios.*

*6. Denuncias de Gustavo Oreamuno y Jeffery López por amenazas ante el OIJ. (20-006343-0042-PE)*

*7. Documentos varios de la OAPVD.*

*8. Denuncia por el delito de amenazas interpuesta el 6 de marzo por Clarita Quiel Torres por amenazas, contra Ignorado en la Fiscalía de Buenos Aires (Materia Penal)*

*9. Cuatro personas Bribri se encuentran privadas de libertad y se solicitó un estudio preliminar para no institucionalización. Tribunal Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Buenos Aires; Expediente 18-000234-0634-PE, contra: Delio Ortiz Elizondo y otros, ofendido: Ilda Ortiz Elizondo, delito: robo agravado, causa en la cual fueron sentenciados 4 compañeros del Pueblo Bribri de Salitre (Eliseo Ortiz Elizondo, Delio Ortiz Elizondo, Mauricio Obando Rojas y José Hipólito Lupario Rojas) a cumplir 5 años y cuatro meses de privación de libertad, desconociendo totalmente la normativa internacional sobre medidas alternativas a la cárcel para Pueblos originarios.*

*10. Interdicto de amparo de posesión contra Clarita Quiel Torres y otros (todos Bribri) en el que resuelve el Juez Jean Carlo Céspedes Mora)*

Finalizo reconociendo la excelente coordinación que hasta el momento hemos desarrollado y la emisión de informes de parte de ustedes para poder dar seguimiento a las múltiples acciones que hemos desarrollado como Institución.

Atentamente,

*Magistrada Damaris Vargas Vásquez*

*Coordinadora*

*Subcomisión Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas*

**De:** gustavo oreamuno vignet <[tavoreamuno72@gmail.com](mailto:tavoreamuno72@gmail.com)>   
**Enviado el:** martes, 24 de marzo de 2020 7:40 a. m.  
**Para:** Damaris Vargas Vásquez <[dvargas@Poder-Judicial.go.cr](mailto:dvargas@Poder-Judicial.go.cr)>; Acceso a la Justicia <[accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr](mailto:accesojusticia@Poder-Judicial.go.cr)>; Alvaro Paniagua <[apaniagua@dhr.go.cr](mailto:apaniagua@dhr.go.cr)>; Marjorie Herrera <[mherrera@dhr.go.cr](mailto:mherrera@dhr.go.cr)>; Melissa Benavides Víquez <[mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr](mailto:mbenavidesv@Poder-Judicial.go.cr)>; [alice.shackelford@un.org](mailto:alice.shackelford@un.org); [bacheletm@ohchr.org](mailto:bacheletm@ohchr.org); [despacho@inamu.go.cr](mailto:despacho@inamu.go.cr); [despachoministro@seguridadpublica.go.cr](mailto:despachoministro@seguridadpublica.go.cr); [despachopresidente@presidencia.go.cr](mailto:despachopresidente@presidencia.go.cr); [gonzalez.cristhian.olivier@gmail.com](mailto:gonzalez.cristhian.olivier@gmail.com); Asociación de Iniciativas Populares Ditsö <[ditso.org@gmail.com](mailto:ditso.org@gmail.com)>; [pabrao@oas.org](mailto:pabrao@oas.org)  
**Asunto:** Aumento de amenazas de muerte contra líderes indígenas

Saludos

Magistrada

Damaris Vargas

Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial

Costa Rica

Reciba un cordial saludo de parte de parte de la Coordinadora de Lucha sur Sur y demás organizaciones firmantes. Le adjuntamos el Comunicado Público: Aumentan amenazas de muerte contra líderes de los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica e imágenes de las denuncias interpuestas al respecto.

Agradeciendo su atención;

Gustavo Oreamuno V

Ditsö

Coordinadora de Lucha Sur Sur

**SE ACUERDA:** Se toma nota. -